

Las relaciones de seguridad entre Venezuela y los Estados Unidos: entre la diplomacia y el conflicto

Carlos Romero



**Instituto Latinoamericano
de Investigaciones Sociales (Ildis)**

**Las relaciones de seguridad entre
Venezuela y Estados Unidos:
entre la diplomacia y el conflicto**

Carlos Romero

Caracas, Venezuela
Julio 2006

© Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (Ildis)

Apartado 61712, Chacao, Caracas 1060
www.ildis.org.ve

1ª edición, julio/2006

Coordinación editorial y gráfica,
composición electrónica,
y diseño de portada: Javier Ferrini

Edición y corrección: Henry Arrayago

Hecho el Depósito de Ley
Depósito Legal: lf81120063202841
ISBN: 980-6077-50-4

El Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (Ildis)
es la Oficina en Venezuela de la Fundación Friedrich Ebert

ÍNDICE

PRESENTACIÓN _____	7
INTRODUCCIÓN _____	9
BASES DOCTRINARIAS DE LA ESTRATEGIA MILITAR DE VENEZUELA _____	19
Planteamiento general _____	19
El tema de Estados Unidos en la estrategia de Venezuela _____	22
LAS RELACIONES POLÍTICAS ENTRE VENEZUELA Y ESTADOS UNIDOS _____	31
Marco inicial _____	31
La secuencia histórica a partir de 1958 _____	35
EL DESARROLLO PUNTUAL DE LAS RELACIONES BILATERALES DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS _____	43
Diplomacia bilateral y temas democráticos _____	43
Sobre cuestiones militares y el tema del terrorismo _____	69
Derechos humanos _____	86
Combate al narcotráfico _____	87
ASPECTOS ESTRATÉGICOS VINCULADOS A LOS TEMAS ECONÓMICO-COMERCIALES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS _____	93

Aspectos generales _____	93
La cuestión energética _____	102
CONCLUSIONES Y PROYECCIONES _____	111
REFERENCIAS _____	123
APÉNDICES _____	129

PRESENTACIÓN

La seguridad, en su sentido más amplio, constituye uno de los temas de política pública más complejos. Esta complejidad es la resultante natural de la gran diversidad de factores y variables que deben sopesarse simultáneamente al momento de formular e implantar políticas de seguridad.

Las amenazas y desafíos que impone la globalización, así como los problemas asociados con el terrorismo, narcotráfico y otros delitos de carácter transnacional, cada vez más sofisticados, nos obligan a reflexionar seriamente sobre la necesidad de abordar de una manera más rigurosa e integral, no sólo la temática de la seguridad nacional, sino además, sus dimensiones subregionales, regionales y globales.

En América Latina y el Caribe, toma cada vez más fuerza la idea de avanzar hacia una agenda común en materia de seguridad, que haga posible un enfrentamiento más eficaz a las amenazas que atentan seriamente contra la estabilidad de la región. Así, la crisis de seguridad interna por la que transita Haití, las tensiones sociopolíticas que atraviesan importantes países de la subregión andina, la reactivación de conflictos limítrofes y la internacionalización del conflicto colombiano, entre varias otras, son situaciones que no pueden ser enfrentadas únicamente con políticas nacionales.

Sin embargo, a pesar de la intensificación que han experimentado los esfuerzos por avanzar hacia agendas comunes en materia de seguridad, el debate sobre el tema no se ha extendido con suficiente fuerza a los actores políticos y sociales nacionales; con base en esta última consideración, la Fundación Friedrich Ebert, a través del Programa de Cooperación en Seguridad Regional, asumió la iniciativa de promover la incorporación activa y creativa de las sociedades latinoamericanas en el debate sobre la seguridad, desde una perspectiva regional y

global. En su Capítulo venezolano, coordinado desde el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (Ildis), los esfuerzos iniciales se concentraron en la generación, la sistematización y el análisis de información relevante destinada a caracterizar la Agenda de Seguridad del Estado venezolano y su inserción en el contexto subregional, regional y hemisférico.

La presente publicación, titulada *Las relaciones de seguridad entre Venezuela y Estados Unidos entre la diplomacia y el conflicto*, es parte de esta iniciativa; su autor, Carlos Romero, analiza el rol que Estados Unidos ha desempeñado en la visión estratégica de Venezuela y los cambios ocurridos en los últimos años en el marco de las relaciones políticas, militares y económicas entre ambos países.

Como es usual en estos casos, las reflexiones y análisis contenidos en la publicación son de la exclusiva responsabilidad de su autor, y en nada comprometen al Ildis como organización que asumió el reto de promoverlo y ofrecerlo al debate público.

Kurt-Peter Schütt
Director del Ildis
Representante en Venezuela de la
Fundación Friedrich Ebert

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se busca analizar el papel que Estados Unidos ha jugado en la visión estratégica de Venezuela, y los cambios que se han dado entre ambos países en los últimos años en cuanto a sus relaciones políticas, militares y económicas.

Se trata de explorar cómo el papel de EEUU, en cuanto a su importancia mundial, hemisférica y bilateral, repercute en la configuración de la política exterior de nuestro país, al igual que en los diferentes planes de defensa y de seguridad nacionales.

Al abordar este tema, se deben tomar en cuenta las importantes contribuciones que dos palancas fundamentales le han dado la fuerza necesaria a estas relaciones: el petróleo y el tema de la democracia. Por una parte, Venezuela es uno de los principales productores de petróleo del mundo y un importante proveedor de EEUU; y a su vez, Venezuela ha tenido desde 1958 una democracia sólida en el hemisferio.

En este orden de ideas, se plantea que las dos variables recién mencionadas han experimentado una transformación crucial en los últimos años, ya que Venezuela ha dejado de ser un país petrolero, para convertirse en un país energético. Por otra parte, el gobierno del presidente Hugo Chávez ha buscado la transformación de la democracia representativa, en una democracia participativa y protagónica.

Estos cambios, tanto el que se refiere al ámbito energético, como el que se refiere a las percepciones que se tienen sobre el sistema democrático implican, a nuestro entender, unas transformaciones importantes, y de raíz, en la medida en que unas relaciones que tuvieron pocas variaciones de carácter táctico, pasan ahora a tener notables diferencias de carácter estratégico.

Venezuela y EEUU se encuentran en la actualidad en un proceso de reevaluación de sus políticas exteriores y de sus enfoques de seguridad, con el fin de adaptarlos a un mundo cambiante.

El establecimiento de nuevos parámetros de la relación binacional se concreta en una vinculación energética y en la discusión sobre el estado actual del orden internacional, con base en dos aproximaciones estratégicas diferentes y dos definiciones sobre la seguridad.

Venezuela ha sido una constante en las preocupaciones estratégicas de EEUU. Desde el punto de vista geopolítico, su situación geográfica representa un aspecto crítico, ya que el país se encuentra en el norte de América del Sur, en medio de un cruce marítimo entre el Caribe y el Atlántico, al tiempo que posee una industria y unas reservas petroleras y también gasíferas de gran consideración. De hecho, Venezuela es uno de los cinco principales suplidores de petróleo de EEUU y las importaciones norteamericanas son las más importantes para el comercio exterior venezolano (Consalvi, 2000).

Desde el comienzo del siglo xx, Venezuela ocupa un lugar relevante en los planes de defensa de la superpotencia. Durante la I Guerra Mundial, el petróleo venezolano fue considerado como el sustituto inmediato del petróleo ruso y del petróleo mexicano, en el momento en que esos países transitaban por una revolución. Más adelante, durante la II Guerra Mundial, el petróleo venezolano se constituyó en una pieza clave en el suministro de recursos para la acción bélica de los países aliados. En el período de la Guerra Fría, EEUU definió a Venezuela como un aliado con una alta prioridad para evitar el avance del marxismo en ese país y para promover la defensa continental contra la supuesta injerencia soviética-cubana en la región.

Venezuela era considerada como una pieza importante para la estabilidad del hemisferio, en términos de su sistema político y sus relaciones cívico-militares. A pesar de haber tenido una dictadura militar caudillista en la persona de Juan Vicente Gómez (1908-1935), regímenes semiautoritarios (1935-1945), un corto período democrático (1945-1948) y una dictadura militar institucional (1948-1958), los venezolanos desarrollaron desde el año 1959 una democracia y un sistema de partidos estables que fueron definidos en muchos círculos norteamericanos como un modelo a seguir por el resto de los países de América Latina.

Por otra parte, es importante subrayar que el sistema político venezolano no entró a formar parte de los ciclos democracia-golpes de

Estado-dictaduras-democracia, tan comunes en la región, manteniéndose desde 1958 y hasta ahora dentro del marco de la democracia.

A Venezuela se le definió hasta hace pocos años como una nación democrática moderada, con una política exterior propia y un comercio internacional orientado fundamentalmente hacia el mercado norteamericano. De igual manera, Venezuela nunca cuestionó la supremacía norteamericana en el continente, ni la importancia de la democracia representativa y de la empresa privada en el desarrollo nacional e incluso en el hemisférico.

En cuanto a las relaciones cívico-militares, los líderes partidistas venezolanos y los sucesivos gobiernos democráticos mantuvieron a partir de 1959 el control civil sobre las Fuerzas Armadas, y a pesar de algunos poderes de facto que tuvo la institución militar, en cuanto al tema fronterizo, la política de ascensos militares y la compra de armamentos, hubo tan sólo cinco intentos de golpe de Estado: uno en 1960, posteriormente en dos ocasiones en 1962, más dos intentos frustrados de golpe de Estado en 1992. Paralelamente, es de destacar que las FFAA no participaron abiertamente en la política partidista y tampoco en decisiones sobre política exterior, excepción hecha de los temas fronterizos y de las relaciones militares con EEUU.

Si se parte de una perspectiva económica, los negocios privados de norteamericanos en Venezuela no encontraron mayores dificultades para desarrollarse en el país. Con el advenimiento de la industria petrolera, EEUU se convirtió en el principal socio comercial de Venezuela, y el impacto de la cultura de negocios norteamericana se impuso como el patrón fundamental para la economía privada venezolana.

Desde una visión diplomática, a pesar de que los sucesivos gobiernos democráticos venezolanos trataron de diferenciarse de EEUU en un plano multilateral al tener un papel activo en las Naciones Unidas (ONU) y en la Organización de Estados Americanos (OEA), Venezuela nunca tuvo una posición antinorteamericana y pudo combinar su alianza con EEUU, junto con la pertenencia a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Si bien es cierto que Venezuela estuvo en desacuerdo con las posiciones norteamericanas en cuanto al estatus de la isla de Puerto Rico, la invasión de tropas estadounidenses a la República Dominicana en 1965 y el apoyo norteamericano al Reino Unido en la Guerra de las Malvinas, en 1982, estas actitudes no afectaron en mucho las relaciones bilaterales entre los dos países.

Por lo mencionado hasta ahora, es posible sostener la idea de que desde 1958 hasta 1989, los problemas de seguridad no afectaron las relaciones entre Venezuela y EEUU. Sin embargo, ya para esta última fecha, factores tales como los desarrollos internos venezolanos, la revuelta social conocida como el “Caracazo” de 1989 y los dos intentos de golpe de Estado en 1992, más la propia situación económica negativa en el país, permitieron que las percepciones de los analistas norteamericanos cambiaran y se comenzara a dudar sobre la estabilidad venezolana. Por añadidura, nuestro petróleo ya no era tan importante para EEUU como en el pasado, y al caer el Muro de Berlín y mejorar las relaciones de EEUU con los países árabes, las políticas proteccionistas norteamericanas empezaron a incluir a Venezuela entre los países sujetos a nuevas disposiciones de carácter hemisférico (como las barreras arancelarias y no arancelarias).

Al mismo tiempo, el cambio de estrategia norteamericana en el hemisferio, al pasar de una orientación anticomunista hacia una orientación antinarcoóticos; la transformación de su estrategia de guerra y de una lucha tradicional hacia políticas de baja intensidad, la tesis de una guerra aérea virtual, el desarrollo de un programa de estímulo a la creación de una infantería para la guerra irregular, y la propuesta de un rol policial para las FFAA contribuyeron también a un reacomodo en las relaciones militares entre los dos países.

El establecimiento de nuevos parámetros de la relación binacional se concretaría en una vinculación energética y en la discusión sobre el estado actual del orden internacional, con base en dos aproximaciones estratégicas diferentes y dos definiciones sobre la seguridad.

Por otra parte, ambos países parten de un proceso de transición desde la perspectiva de la defensa común de la democracia representativa hacia un plano de mayores divergencias, en donde las percepciones mutuas se encuentran determinadas por la presencia venezolana migratoria en territorio norteamericano, la politización de la relación a un nivel societal (medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y asociaciones políticas), así como por diferencias sustantivas entre ambos países sobre el tema democrático.

Conviene recordar que el temor por un mundo externo adverso y un sentido de la fragilidad política del poder interno han orientado a la reflexión política desde que los griegos tomaron conciencia del Imperio Persa y los romanos de los pueblos “bárbaros” (Wolin, 1974). Es por ello que el tema de la guerra y su relación con la política han

ocupado un lugar privilegiado en la teoría política. Así, los temas de seguridad y de defensa han alcanzando un espacio importante en la reflexión política, cuestión que en nuestra época cobra un mayor peso, en la medida que ellos se relacionan con los temas de la política exterior, la economía internacional, la estabilidad política, la seguridad energética y el comercio externo.

Las relaciones entre Venezuela y EEUU se enmarcan dentro de los cambios globales, donde lo que se considera bilateral se presenta bajo nuevas formas, en la medida en que el gobierno venezolano consolida una base política fundamentalmente opuesta a la norteamericana, cuando se observa una creciente preocupación por el tema de la seguridad, es decir una securitización, de la agenda de política exterior de EEUU y de la agenda hemisférica, mediante una reorganización de sus intereses vitales.

Desde que Chávez asumió la presidencia de Venezuela en 1999, se ha observado cada vez con más frecuencia la emergente participación activa y abierta de un grupo de oficiales y ex oficiales militares en la política y en el sector público nacional. Este factor y la misma situación general de crisis, ha hecho que Venezuela se convierta en objeto de preocupación para Washington. Las posibles limitaciones al juego democrático, a la actividad privada y a las inversiones norteamericanas, la incertidumbre sobre la seguridad del suministro petrolero, la posibilidad del desarrollo de una política exterior “antiimperialista”, y la actitud venezolana frente al conflicto armado en Colombia, son algunos de los elementos que preocupan a los decisores norteamericanos. Igualmente, se convierte en una preocupación para Venezuela el tipo de respuesta que EEUU ha tenido para el proceso de cambio político que vive el país.

Hasta ahora, la política estadounidense ha sido la histórica posición de “esperar y ver”; Venezuela por su parte, ha utilizado el recurso del “poder negativo”. El gobierno venezolano ha empleado el tema de sus diferencias reales y mediáticas con EEUU como una palanca de su proyección internacional (Carvajal y Pardo, 2002).

De hecho, el tema de EEUU desde la perspectiva de Venezuela presenta dos dimensiones. Una, más tradicional, tiene que ver con las proyecciones mundiales, hemisféricas y subregionales de la potencia y con una relación bilateral que al cabo de los años se concreta de manera más compleja, al formarse una agenda que no está monopolizada por los temas energéticos y democráticos. La otra, está vinculada

con los temas internos, especialmente el relativo a la defensa nacional ante una eventual agresión norteamericana, de acuerdo con la visión del actual gobierno venezolano. Esta dimensión doméstica presenta rasgos novedosos: EEUU ha dejado de ser, desde la óptica venezolana, un país colaborador en el mantenimiento de la democracia y de la estabilidad interna, para ser observado ahora de manera "sospechosa".

Por consiguiente, los cambios que se han dado en el punto de vista que tiene Venezuela sobre el papel de EEUU en el mundo, deben enfocarse dentro de las relaciones bilaterales específicas entre los dos países. Pero también, y debido a su importancia, parece apropiado analizar el impacto del desarrollo político venezolano en las consideraciones sobre la seguridad de Venezuela, así como también las consideraciones de Caracas sobre una presunta injerencia de Washington en los asuntos internos de Venezuela.

La política exterior y la seguridad de Venezuela han tenido un notable cambio desde 1999, con base en tres importantes procesos: 1) unas transformaciones de la estructura política de Venezuela, en cuanto a lo que se observa en la última Constitución de 1999, en el desplazamiento de las élites políticas tradicionales en el proceso de toma de decisiones, en la reconsideración de sus fines y medios, y en la reevaluación de la política de alianzas mundiales; 2) en segundo lugar, la creciente internacionalización del tema de Venezuela, en la medida en que organismos multilaterales, ONGs, medios de comunicación social y los propios gobiernos extranjeros le prestan atención a la dinámica interna del país; 3) la generación de una serie de factores domésticos en Venezuela, que llama la atención de la comunidad internacional y que se origina dentro del proceso interno, pero que se enlaza con temas novedosos en la agenda de seguridad mundial, como son los temas del desarrollo, de la cultura política, de la desinstitucionalización, de la violencia, del terrorismo y el estado de los derechos humanos.

También, se añaden nuevas ideas sobre la solidaridad internacional, de interés político y económico, y la promoción de la tesis venezolana sobre la democracia participativa en organismos y conferencias multilaterales e instituciones internacionales no estatales. Por otra parte, se estarían asentando los supuestos para una política exterior que incluye el apoyo político y económico a actores subnacionales que reivindiquen su emancipación del control de un Estado;

además, se busca la vía institucional con el propósito de modificar las instancias y los sistemas de decisión en organizaciones internacionales, incluidas las de naturaleza económica.

Habría que agregar en este plano de los cambios constitucionales y políticos, la tesis gubernamental de lograr un mundo multipolar, la búsqueda de una política de alianzas amplias que privilegien las relaciones con Cuba y otros países llamados “progresistas” como Irán, China y Rusia, y la disminución de las relaciones con EEUU y Colombia. En el plano económico, es importante analizar la reducción de los compromisos de integración comercial y la regeneración de una política proteccionista y de retorno al modelo de sustitución de importaciones-endógeno (Romero, C., 2005).

De profundizarse estas tendencias, no cabe sino preguntarse en qué medida contribuirán a sostener a Venezuela dentro del contexto internacional en los años por venir. Si nos situamos en el escenario de los años 2005-2007, se observará que la Administración del presidente Bush está orientada hacia una agenda geopolítica que le da prioridad a temas cruciales como: las relaciones con la Unión Europea, China y Rusia, con una América Latina sostenida por México, Brasil y Argentina, países en buenas relaciones con EEUU, y una Comunidad Andina que ha confrontado problemas de estabilidad y la presencia progresiva del narcotráfico, incluyendo el agravamiento del conflicto colombiano y una alta presencia de ayuda militar norteamericana en ese país (Carvajal y Pardo, 2002).

A los fines de enmarcar esta discusión dentro de los procesos de seguridad hemisféricos, cabe observar los niveles de acción que permiten analizar de manera conjunta la actual política exterior de EEUU y su estrategia de seguridad. En un primer nivel, hay que prestarle atención a los cambios que ha experimentado la diplomacia norteamericana. En efecto, en el gobierno estadounidense se ha fortalecido la tendencia a colocar los temas geopolíticos por encima de los económicos y comerciales. Esta tendencia se debe, en parte, a la tensión que se da en el mundo entre una agenda de seguridad restringida inspirada en la unilateralidad, y una agenda de seguridad ampliada, inspirada sobre todo en círculos europeos y tercermundistas que aspira a privilegiar el discurso de la interdependencia y el tema de la seguridad humana.

Para el gobierno de EEUU, liderado por el presidente George W. Bush, la seguridad de su país incluye la visión de un poder interna-

cional con responsabilidades mundiales y capacidad militar; la percepción de un mundo amenazado por el terrorismo, por los Estados forajidos y por el peligro de la propagación de armas de destrucción masiva; una reevaluación del papel de las ONU y de su Consejo de Seguridad; una nueva política de alianzas más comprometida para quienes la forman y menos complaciente para quienes la rechacen, y la procura de una unidad de fines y medios dentro del sistema de política exterior de EEUU (Atlas, 2003; Baker, 2003; Bodemer, 2003; Frum, 2003; Kelly y Romero, C., 2002).

En un segundo nivel, se observa la discusión sobre las transformaciones conceptuales de la estrategia militar norteamericana, en donde se promueve la tesis de “manos libres”, a fin de lanzar guerras preventivas unilateralmente determinadas. En este contexto, lo que se ha estado denominando como la “Doctrina Bush”, significa una ruptura fundamental con posiciones estratégicas oficiales norteamericanas del pasado reciente, enfatizándose ahora, que se está en una nueva era y con nuevos enemigos, bajo la tesis de la unipolaridad. Por ello, se comprueba un manifiesto rechazo a las resoluciones de la ONU que, de acuerdo con esta perspectiva, lesionen el interés nacional norteamericano, en el retiro de la firma del Protocolo de Kyoto sobre el calentamiento global, en el rechazo norteamericano a la firma del acuerdo de creación de la Corte Penal Internacional, en el abandono unilateral del Tratado ABM (Anti-Balistic Missiles), en la interpretación de la presencia militar estadounidense a escala global como algo sin discusión, en el aumento de los gastos de defensa, en la creación de las alianzas compactas y homogéneas ideológicamente “Coalitions of the Willing” (formada por “quienes estén dispuestos”), y en el rechazo a la tesis del multilateralismo asertivo (Kagan, 2003; Rice, 2000; The Presidency of the United States, 2002).

En un tercer nivel, se sitúan las alteraciones que la política internacional de Washington ha tenido con respecto a temas como los del desarrollo, la democracia y los derechos humanos. Con relación al primer tema, mediante las nuevas propuestas norteamericanas se privilegian el de la democracia y el del “*nation-building*”, en función de recrear la tesis del desarrollo económico hacia una economía de mercado.

En cuanto al “*nation-building*”, en castellano, “la reconstrucción de los Estados débiles”, el gobierno de EEUU ha definido como un peligro para su seguridad la fragilidad de otros países y la crisis de

governabilidad de los mismos (Einzenstat *et al.*, 2005, p. 135; Fukuyama, 2004).

En referencia al tema democrático, se aspira a que la democracia liberal sea un punto de honor en la política exterior y en la seguridad norteamericana, así como el respeto a los derechos humanos (Kamat, 2003; Marglin, 2003; Pockenham, 1993; Przeworski, 2003).

En este contexto, se estima que “Los Estados débiles y sin gobernabilidad plantean una amenaza en el siglo *xxi* que debe enfrentarse con una operación modernizada y centralizada propia del siglo *xxi*. En los últimos dos años, las autoridades estadounidenses se han concentrado en perfeccionar la defensa y la inteligencia internas con miras a lograr la seguridad nacional. Ese mismo interés exige hoy que se reconstruyan las instituciones de la política exterior y de desarrollo de los Estados Unidos, como ocurrió hace 50 años para encarar la Guerra Fría” (Einzenstat *et al.*, 2005, p. 135; Fukuyama, 2004).

Es por ello que el gobierno del presidente Bush ha propuesto la creación de un Cuerpo de Respuesta Activa, cuyo objetivo será el despliegue rápido de especialistas en emergencia, economía, sanidad, enseñanza, tribunales, orden público, instituciones democráticas y sistemas fiscales, quienes puedan contribuir a resolver situaciones de crisis o desarrollar instituciones estables (Calvo, 2005, p. 4). De esta forma, se piensa que “Ante todo, un plan de tal alcance debe reconocer que las raíces de la crisis de los Estados débiles, y cualquier esperanza de una solución de largo plazo, radican en el desarrollo: promover instituciones estables y que rindan cuentas en las naciones en lucha; instituciones que cumplan las necesidades del pueblo, y que las habilite para mejorar sus medios de vida en forma legal, no desesperada. Washington debe reconocer que los países débiles e ingobernables presentan un desafío que no puede resolverse sólo por los medios de seguridad; sencillamente Estados Unidos no puede convertirse en el policía de todas las naciones en que aceche algún peligro. Así, la construcción de Estados no es un mero acto de caridad, sino una inversión inteligente para la propia seguridad y estabilidad de Estados Unidos” (Einzenstat *et al.*, 2005, pp. 134-135).

Entre los nuevos elementos que definen este cambio en la estrategia militar y en la política exterior de EEUU, tenemos la reconfiguración de su papel como Estado miembro de la comunidad internacional, como miembro de una comunidad de seguridad y como potencia hegemónica, capaz de enfrentar simultáneamente las amenazas que constituyen

los temas negativos del terrorismo, de la proliferación de armas de destrucción masiva y de regímenes hostiles, en el marco de una securitización rampante de su agenda exterior (Cardona *et al.*, 2004). Desde luego que esta securitización plantea el dilema de profundizar el esquema de ataque preventivo como una panacea a las fuentes de inseguridad, o mantener un compromiso político de negociación para evitar el conflicto.

Por su parte, el gobierno de Venezuela ha desarrollado una posición estratégica diferente a la de EEUU, en lo que se observa como un choque de culturas estratégicas, de códigos distintos basados en premisas dicotómicas. Venezuela está comprometida en la búsqueda de un mundo multipolar, en unas relaciones especiales con Cuba, en la búsqueda de una cooperación militar hemisférica sin la participación de EEUU y en la elaboración de la tesis de la guerra asimétrica. Por otra parte, se observan unas reiteradas referencias al carácter imperialista de Washington, la supuesta injerencia de EEUU en la política interna venezolana, las posiciones divergentes de Venezuela con respecto a las invasiones norteamericanas a Afganistán e Irak y las diferencias entre ambos países sobre el rol de los partidos y movimientos de izquierda y radicales en el continente (Cardona *et al.*, 2004, p. 212).

Cabe entonces comprender de manera global y con sus particularidades hemisféricas, subregionales y bilaterales, los cambios que se han dado en Venezuela y en EEUU en materia estratégica, y especialmente en el plano de la seguridad. Es por ello que resulta pertinente considerar aspectos que revisten una gran importancia dentro de cualquier propuesta de un fortalecimiento gubernamental destinado a mejorar el desempeño de Venezuela en el contexto de la seguridad hemisférica. De esta manera es prioritario comprender cómo Venezuela y EEUU son dos países vinculados a través de múltiples asuntos y complejas vías que ahora tienen el reto de aprender a convivir en un ambiente "interméstico", mundial y nacional, más difícil de reconocer y controlar.

En este trabajo se discute, en primer término, el rol que juega el tema de EEUU en los planes estratégicos, de defensa y de seguridad de Venezuela; en segundo lugar, se analizarán las relaciones bilaterales entre los dos países a la luz de los temas diplomáticos y de seguridad; en tercer término se estudiarán las relaciones económicas y comerciales entre ambas naciones, y finalmente se desarrollará un capítulo referido a algunas conclusiones y proyecciones.

BASES DOCTRINARIAS DE LA ESTRATEGIA MILITAR DE VENEZUELA

Planteamiento general

El desarrollo de una nueva estrategia militar para Venezuela, es uno de los puntos más importantes de la agenda política y de seguridad del gobierno del presidente Hugo Chávez. Este proyecto es la culminación de un trabajo en dos frentes: el frente legal y el frente organizacional dentro de la Fuerza Armada. Para ello se ha reformulado y sancionado la nueva Ley de Seguridad y Defensa, ahora llamada Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (2002), y está por aprobarse en segunda discusión y sancionar para el año 2005, la nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional. A estos dos instrumentos jurídicos hay que agregarle otras leyes conexas, como la de Seguridad Alimentaria, la de Migración y Extranjería y la de Fronteras, que junto con los artículos referidos en la Constitución Nacional sobre la materia, conforman como un todo una visión sobre el papel de la Fuerza Armada y sobre el tema de la seguridad de la nación, la cual está fuertemente orientada a promover el control del Estado sobre la sociedad venezolana. A esto hay que anexarle la reciente sanción de la Ley de Responsabilidad Social de los Medios de Comunicación, conocida como “Ley Resorte” o “Ley Mordaza”, y la reforma al Código Penal, la cual complementa toda esta arquitectura cívico-militar del gobierno bolivariano de Venezuela.

Desde el punto de vista organizacional, el actual pensamiento estratégico de Venezuela le da prioridad a la unidad de la Fuerza Armada, y rebaja a la categoría de fuerza autónoma a las secciones de las antiguas Fuerzas Armadas dentro del nuevo concepto de “componentes” de un orden unitario: “Fuerza Armada”, con un solo Estado

Mayor. A esto hay que agregar nuevas disposiciones en materia de logística, uniformes, manejo de las armas, uso de los reservistas y planes conjuntos con la sociedad civil, cambios de proveedores de armas, nuevos planes estratégicos, definición del nuevo enemigo, entre otros.

La preparación de un documento base para discutir la nueva concepción estratégica de Venezuela, a ser presentado este año, se considera como el punto culminante de este proceso de cambio dentro de la Fuerza Armada.

Como es del conocimiento público, la Fuerza Armada Nacional (FAN), se ha constituido como un solo cuerpo militar con cuatro componentes, eliminando así la autonomía de las fuerzas respectivas. A esto se le debe agregar la creación de la Reserva Militar Nacional, y ahora la creación de las defensas populares, compuestas por ciudadanos venezolanos en edad militar, que viven y trabajan en las ciudades y zonas rurales, pero que estarían armados en forma permanente. Esto a su vez, sería la plataforma para crear unas redes de inteligencia en la administración pública, en las fábricas, en las cooperativas, en los institutos educacionales, en una combinación de ejercicios militares y trabajo semimilitar en forma colectiva, en labores de agricultura y cría, y en la construcción pública, infraestructura y defensa civil.

Analistas del tema han advertido que este proceso de integración civil-militar, es parte del cambio en la estrategia militar de Venezuela, en donde resalta la idea de que el país se debe preparar para un nuevo conflicto bélico bajo el concepto de guerra asimétrica, caracterizado por la hipótesis de guerra de una invasión de Estados Unidos a Venezuela.

Esta guerra asimétrica estaría compuesta de acciones regulares e irregulares, bajo la idea de una "Guerra de Todo el Pueblo".

En cuanto a los grupos de defensa popular, se comenta que la idea que está detrás de este planteamiento es la justificación precisa para armar a sectores populares afectos al gobierno del presidente Chávez, ante la eventualidad de una invasión norteamericana, o lo que es más creíble a corto plazo, una insurrección popular si se pierde el control político-militar que ahora tiene el Gobierno.

En este marco debe distinguirse una primera fase, el plan de constituir un ejército de reserva -Reserva nacional- compuesta por más de 100.000 efectivos con instrucción militar previa y que recibirían un adiestramiento profesional semanal; y en una segunda fase, se le

unirían los grupos de defensa popular, todo lo cual crearía una fuerza armada de más de 200.000 contingentes.

En este sentido, se habla de la formación de las Unidades Populares de Defensa, que relacionaría estratégicamente a los miembros de la FAN con la Reserva y los grupos de defensa popular, bajo el mando directo del presidente Chávez, en su condición de comandante en jefe de la FAN.

En resumen, la creación de las reservas y de las unidades populares junto con el plan de armar a grupos rurales en la frontera colombo-venezolana, reflejan cómo se está creando una organización paralela a la FAN, la cual pudiera desviarse a otros fines distintos de su objetivo principal que es la defensa de la seguridad del país.

En la esfera estrictamente militar, la Fuerza Armada venezolana ha asumido como factible la hipótesis de guerra frente a la de EEUU, de lo que se desprende la reorientación de las políticas de adquisición de armamento, la estrecha alianza con Cuba, la prevención de los efectos de una escalada militar de EEUU a través de Colombia, y la promoción de la tesis de la guerra asimétrica prolongada (Olivares, 2005).

Esta dinámica de controversias entre Venezuela y EEUU está impulsada por la creencia del gobierno de Chávez que en el mundo está planteada una lucha por el poder global en el contexto de la decadencia de la hegemonía norteamericana. Esta creencia está fundamentada en la idea de una guerra revolucionaria asimétrica, que va más allá de la confrontación entre Estados soberanos, con estrategias y tácticas diferentes, en donde a la superioridad técnica que tiene el "imperialismo" se le responde con flexibilidad táctica, sin un campo de batalla establecido y conocido y con el apoyo de la población civil en armas (Rapoport, 1982).

En este marco, EEUU y Venezuela se enfrentan, cada quien, con una visión confrontacional de la guerra, observándola como teatro; la defensa de Occidente *vs.* la defensa en contra del imperialismo, como un mandato mesiánico y no como un instrumento de la política, en el marco del desarrollo de una "zona gris" entre la diplomacia y la cooperación y la amenaza de un conflicto existencial. De ahí que la postura venezolana "le permite colocarse, casi gratis, en una posición ideal porque le da como auditorio –y también aliados– a todos los enemigos, adversarios y críticos de Washington, incluidos muchos sectores liberales de EEUU y Europa" (Blanco, 2005).

El tema de Estados Unidos en la estrategia de Venezuela

La creciente confrontación diplomática y política entre Venezuela y EEUU, debe comprenderse dentro de los cambios que la agenda mundial ha tenido en los últimos cinco años. Después de una década en que se llegó a percibir un período de estabilidad mundial, en donde los instrumentos de la globalización se definían como la muestra de un cambio técnico capaz de fomentar los temas socioeconómicos por encima de los temas estratégicos, las preocupaciones sobre seguridad y defensa vuelven a ocupar un lugar destacado en la agenda bilateral.

En este marco, cabe plantearse la presencia de dos “códigos operacionales” con sus respectivas estrategias. En primer lugar, EEUU ha definido un mapa conceptual diferente a la tesis de la contención. Su base principal parte de la idea de la presencia de una lucha en contra de un enemigo que no es reconocido dentro de los parámetros y convenciones bélicas tradicionales y cuyo marco temporal es indefinido. Estos factores condicionan la formulación de una política exterior con un alto grado de securitización, en donde el elemento de la prevención puede significar un “derecho” a iniciar una guerra y una intervención en países considerados como sospechosos de proteger e inclusive incitar a grupos terroristas.

Estas consideraciones, van acompañadas de una importante discrecionalidad presidencial y cierta restricción de las libertades públicas, del diseño y de la transparencia gubernamental, legalizada a través de la promulgación del Acta Patriótica de los Estados Unidos, de fecha 25 de octubre de 2001, en la promoción de una agenda diplomática antiterrorista, basada en la percepción de que la *Salus Rei Publicae* está amenazada por el terrorismo internacional, y en la necesidad de construir una alianza política-militar para responderle (Urbinati, 2002).

El gobierno del presidente George W. Bush, planteó una agenda clara desde el año 2000, y específicamente desde los sucesos del 11 de septiembre de 2001, en la que se incluían temas relevantes referentes a su política de seguridad nacional. Entre ellos cabe destacar la lucha contra el terrorismo, el apoyo a la promoción y consolidación de la democracia como sistema político viable y justo, la lucha contra las drogas y la defensa del libre comercio. Para EEUU, el terrorismo presenta múltiples facetas. En primer término, la prevención

de ataques perpetrados por grupos terroristas tanto a bienes como a seres humanos; en segundo lugar, el control de la fabricación y diseminación de armas nucleares por parte de Estados forajidos y grupos ilegales; en tercer lugar, el control sobre el desarrollo de armas químicas (gas mostaza, sarin, el agente nervioso vx) y biológicas (antrax, botulismo, cólera, fiebre hemorrágica, tifoidea, lechina y fiebre amarilla); y por último, el apoyo a un cambio de régimen hacia la democracia, en aquel país que esté bajo un régimen autoritario.

En lo que se relaciona con el libre comercio, Washington propone un mundo capitalista, de economía libre y en donde la empresa privada juegue un papel fundamental en la producción de bienes y servicios. Si se enfoca el aspecto político vinculado con el respaldo a las democracias, el gobierno del presidente Bush se comprometió con la formación de experiencias democráticas en el mundo, tanto en el marco de las transiciones políticas que han salido de situaciones semi o plenamente antidemocráticas, como también en los casos en que sea necesaria la construcción de un Estado democrático, en términos de la superación de una situación de conflicto militar (Fukuyama, 2004; Williamson, 1998).

En este marco referencial, está sobreentendido que algunos Estados en el mundo son objeto de preocupación para EEUU, sean considerados Estados forajidos, débiles o propensos a alterar el orden mundial, por razones de su simpatía hacia causas terroristas, por la ausencia de una vida democrática, por sus vinculaciones con el narcotráfico o por su tenencia o persecución de tenencia de armas nucleares, químicas o biológicas.

Las ideas que provienen del razonamiento del gobierno del presidente Bush sobre estos tópicos, se basan principalmente en la implementación de una política de presión diplomática, o si es necesario, en la presión militar sobre algún Estado que presente uno o varios de los elementos anteriormente mencionados, con base en las siguientes ideas: que la situación no va a cambiar y va a agravarse si no se toman las medidas necesarias; que se debe negociar bilateralmente, o en ciertas ocasiones con aliados, o a través de organismos multilaterales; o que hay que precisar los elementos principales que hacen de ese país o grupo de países un peligro para la seguridad de EEUU.

Se puede afirmar que EEUU plantea la promoción de procesos democráticos, la libre empresa, la celebración de elecciones libres, la supremacía del Poder Legislativo sobre otros poderes del Estado, y

la independencia del Poder Judicial, como parte fundamental de esta cruzada antiterrorista, de acuerdo con la idea de homogenizar un mundo con desajustes estratégicos, dada la presencia de Estados forajidos, autoritarios y débiles que deben corregir sus posiciones por una vía regenerativa, por la vía de una intervención de la comunidad internacional o por medios unilaterales (Fukuyama, 2005).

Venezuela por su parte, plantea una estrategia diferente. El gobierno del presidente Chávez considera que el terrorismo no es el producto de un desequilibrio estratégico sino de la violencia generada por la asimetría socioeconómica mundial que resulta de la globalización. En el desarrollo de este desequilibrio, EEUU juega un rol fundamental al querer imponer una visión unipolar sobre un mundo que ya es, según la visión venezolana, multipolar, con cinco polos de poder o agrupaciones de fuerza: África, Asia, Europa, Norteamérica y Suramérica.

Si se toma en consideración lo expuesto hasta este momento, hay otro tema que cobra interés desde la perspectiva venezolana: la intervención norteamericana en asuntos internos de otros países. El gobierno de Venezuela considera que EEUU "va a acentuar su política intervencionista, agresora, genocida, y salvaje" (Chávez, 2005). Es por ello que, de acuerdo con la tesis venezolana, los países progresistas en la etapa nacional liberadora y la revolución venezolana, democrática, nacionalista, antiimperialista y bolivariana deben prepararse para una agresión que provenga de Washington (Romero, C., 2005).

Cabría entonces pensar que Venezuela aspira a formar una alianza antiestadounidense cooperando con países reconocidos como forajidos o "molestos" por EEUU, como Cuba, exportando la revolución venezolana, impulsando el cambio mundial anticapitalista, y manteniendo una política de confrontación con el gobierno del presidente Bush. Así lo dijo el mismo presidente Chávez: "el objetivo a largo plazo, en lo económico, nadie puede tener duda de ello, es trascender el modelo capitalista" (Chávez, 2005).

Desde el punto de vista doméstico, EEUU mantiene también importantes diferencias con Venezuela. En el orden político, Venezuela plantea que son válidas las condiciones para el tránsito hacia el socialismo del siglo XXI, y que la revolución venezolana ya está superando la etapa nacional liberadora que antecede a la etapa socialista. Estados Unidos propone la fundamentación de la democracia representativa. Esta aseveración va acompañada en lo interno por la profundización

en Venezuela del papel del Estado, lo que significa el acaparamiento del poder político y la reducción del poder económico disperso, que se encuentra en una sociedad civil, cada día menos autónoma y sin una propiedad privada lo suficientemente fuerte. De esta forma, la soberanía popular y la política competitiva con libre participación, choca de manera importante con el crecimiento de un capitalismo que tiene un Estado propietario y empleador (Jesay, 1993, pp. 320-328).

En resumen, EEUU y Venezuela profundizan sus diferencias estratégicas-conceptuales, políticas y económicas, dentro de una cadena de movimientos tácticos, las acusaciones del gobierno del presidente Bush y la aceleración de los programas de cooperación venezolanos con otros países del hemisferio (PetroSur, PetroCaribe, la unidad suramericana, entre otros), a fin de promover cada uno de esos códigos estratégicos que se encuentran en plena competencia.

Una importante interrogante salta a la vista: ¿cuál podría ser la línea de tolerancia de EEUU a todo lo planteado por un país como Venezuela? Para contestar esta pregunta hay que distinguir, primero que todo, tres tipos de respuestas norteamericanas a los gobiernos revolucionarios en la región. En un primer término, aquellos en que se llegó a la reconciliación entre los gobiernos revolucionarios y el gobierno estadounidense, tales como fueron los casos de la revolución mexicana y la revolución boliviana; los casos en donde no hubo reconciliación, como fue la respuesta de Washington a las revoluciones guatemalteca y cubana; y los casos en donde hubo una respuesta flexible a la revolución: la experiencia chilena, el modelo de Granada y la experiencia nicaragüense (Blasier, 1976).

En cada uno de estos procesos, existió una fase rebelde en donde se tomó el poder por las armas o por la vía electoral, con una respuesta norteamericana flexible; una fase reformista-populista, con una respuesta hostil de EEUU; y una fase revolucionaria, con una respuesta dual por parte de ese país para tratar de negociar los límites a esos procesos (casos de México y Bolivia), o de emprender acciones para derrocarlos (casos de Guatemala, Cuba, República Dominicana, Chile, Granada, Panamá) (Blasier, 1976, p. 217).

Ante estas clasificaciones, surgen varias interrogantes sobre la singularidad del caso venezolano. Desde el punto de vista de la toma del poder, se debe resaltar que la vía fue la electoral. Se puede decir que en este momento se está transitando de la fase reformista y está comenzando la fase revolucionaria, a pesar que no se han dado dos

de las claves importantes para categorizar una fase radical: no se han nacionalizado propiedades norteamericanas y no se han roto las relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con Washington.

Es en este contexto en donde sale a relucir el interés que tienen los temas de seguridad en la agenda bilateral. Hasta ahora, los gobiernos norteamericanos de los presidentes William J. Clinton y George W. Bush han mantenido una conducta de “esperar y ver”, bajo una combinación de percepciones mixtas sobre la experiencia venezolana y una política más orientada a dar respuestas tácticas a específicos retos, que a dar respuestas estratégicas. Ahora bien, a partir de mediados del año 2004, EEUU parece estar encaminado a responder estratégicamente, basado en la idea de que en Venezuela se está a punto de pasar a una fase revolucionaria posconciliatoria.

Aparentemente, el caso venezolano vuelve a tener características muy especiales. Aparte de la ausencia de la toma de propiedades norteamericanas y de la ruptura de relaciones, este proceso no se da en el contexto de la Guerra Fría y de la competencia estadounidense con la extinta Unión Soviética (Cottam, 1967).

Es interesante reflexionar sobre este último punto. No se puede decir que entre Venezuela y EEUU se han eliminado todas las posibilidades de cooperación, pero sí es cierto que la tendencia más visible es al enfrentamiento. Y es por ello que es importante destacar que el caso venezolano se enmarca dentro de los cambios globales y no dentro del período de la Guerra Fría.

Ahora bien, los gobiernos de EEUU han respondido de diversas maneras y con variados niveles de tolerancia al reto que significa el gobierno del presidente Chávez, pero sin llegar a la ruptura. Cabe destacar a este respecto los sucesos del 11 de abril de 2002, que es cuando se observaron algunos indicios de interferencia en el respaldo a los sectores que trataron de sacar definitivamente al presidente Chávez del poder.

La falta de una estrategia a largo plazo por parte de los gobiernos norteamericanos, las conductas variadas que han tenido frente al caso venezolano, la misma falta de condiciones para la ruptura con Venezuela, y la ausencia de un consenso sobre cómo comprender el tipo de amenaza que representa el gobierno del presidente Chávez, le han dado a Venezuela un espacio para seguir relacionándose con EEUU en un plano ambiguo. Pero otras tres interrogantes surgen a la luz de este análisis: ¿podrían llevar estas situaciones a una ruptura con

Washington y a una radicalización de la estrategia venezolana?, ¿cuál sería el punto de quiebre o *“turning point”*, en donde la tolerancia llevaría a la ruptura?, y ¿es que no hay más espacio para la cooperación y para la ampliación de las relaciones?

El récord histórico sugiere que el control sobre las Fuerzas Armadas es esencial para hacer y mantener una revolución social. Aquí estaría la clave para entender el acelerado papel que juegan el factor militar y los temas de seguridad y defensa, como también la ausencia de una necesidad inmediata de asistencia económica, dados los recursos petroleros, en la respuesta que el gobierno del presidente Chávez le da a las relaciones con EEUU, en el marco de una combinación de disuasión (no me ataquen porque les va a ir mal interna y regionalmente) y defensa (pero si me atacan, le responderemos) (Cottam, 1967).

¿Es el gobierno del presidente Chávez una administración que realmente preocupa a los decisores de EEUU? ¿Cómo ha reaccionado Venezuela ante lo que considera es una situación capaz de generar una guerra asimétrica (con poderes desbalanceados) y una guerra de cuarta generación (manipulación no convencional de tipo psicológico, atentados, asesinatos, magnicidio, acciones de comando, percepción de una amenaza militar y transmilitar-mediática)? (Zakaria, 2003).

De lo expuesto, se puede inferir que el gobierno del presidente Chávez es percibido por EEUU como un gobierno semidemocrático, cercano al régimen cubano, capaz de exportar la revolución al hemisferio y con pocas pruebas de querer apoyar las políticas prodemocráticas, prolibre empresa, antiterroristas y antinarcóticos promovidas por Washington a escala mundial, regional y subregional. En concreto, Washington percibe a Venezuela como un país que está buscando un orden mundial, en donde el poder de EEUU se vea disminuido, imponiendo un régimen con características no democráticas, limitante de los derechos humanos, y proclive a establecer alianzas con países que sostienen serias diferencias con EEUU.

Pero ¿en dónde reside el problema conceptual más importante para EEUU? Desde 1999 hasta 2001, ese país basó su conducta frente al gobierno de Chávez con base en las tesis de *“esperar y ver”* y de juzgar al presidente Chávez por lo que hacía y no por lo que decía. A partir del año 2001, el gobierno del presidente Bush manifestó algunas diferencias con Venezuela, tanto en el ámbito internacional como en el bilateral, como en referencia a la experiencia interna venezolana,

a través de una actitud cíclica de crítica y de reserva frente a algunas emisiones y acciones del gobierno venezolano.

Desde 2004, Washington ha profundizado esas críticas sin llegar a la ruptura ni a la desclasificación del gobierno venezolano. Es por ello que pudiera pensarse en la generación de diferencias estratégicas entre ambos países, al dejar Venezuela de ser un país seguro y confiable para pasar a ser un país sospechoso, lo que significa en términos generales la concreción de una desconfianza cada día mayor por parte del gobierno del presidente Bush, dada la conducta externa e interna de Chávez. Esta sospecha se basa principalmente en el acercamiento a Cuba, en la promoción de la democracia participativa, en el desarrollo de un modelo económico de clara orientación estatista, y en la búsqueda, por parte de Venezuela, de una política exterior más diversificada y promotora de un mundo multipolar, sin la presencia relevante de EEUU.

Esto no significa que otros problemas de la agenda de seguridad global de EEUU no estén contemplados para su consideración a corto plazo para el caso venezolano, tales como el terrorismo, el narcotráfico, la proliferación de armamentos sensibles, su posible conceptualización como Estado forajido y fuera de la ley, entre otros. Pero ahora, en este momento, la preocupación estadounidense se concentra en los siguientes temas: las condiciones democráticas internas, la promoción regional de la revolución bolivariana y el acceso a la energía proveniente de Venezuela.

Venezuela ha respondido a la generación de este plano de discordias estructurales con EEUU en forma contradictoria, al utilizar elementos clásicos de la seguridad, el Estado como actor internacional y a la vez, con la promoción de una diplomacia de pueblos, teniendo como pieza central la necesidad de llevar adelante los cambios internos y en un mayor plazo, un cambio mundial.

El gobierno del presidente Chávez ha planteado, tal como se refirió previamente, una nueva agenda de seguridad, agenda que se sostiene con base en los siguientes fines: entender a la seguridad como un problema nacional bajo el concepto de la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad, la defensa integral de la nación; promover una idea de país relacionada con la tesis de los deberes políticos y no con la tesis de los derechos políticos, una visión estadocéntrica *versus* una visión societal-democrática y de personas, otorgándole al estamento militar un rol estelar en los planes de seguridad y defen-

sa, en contraposición con las novísimas tesis de seguridad democrática y de seguridad humana, considerando a Venezuela como un país vulnerable bajo constante amenaza (San Juan, 2005).

Estos fines van acompañados de unos objetivos definidos en el ámbito de seguridad, tales como la búsqueda de un mundo multipolar, la diversificación de las relaciones internacionales de Venezuela, la procura de soluciones pacíficas a las controversias internacionales, la preparación para una eventual guerra asimétrica y de cuarta generación (nuevos planes estratégicos, nuevas hipótesis de guerra, el rearme y la reposición de equipos militares, reservas), la instrumentalización del factor energético como arma política, la reevaluación de las alianzas a escala mundial y la defensa del proceso interno revolucionario.

Desde luego que los fines y objetivos de seguridad de cada país no pueden sino polarizar las agendas de seguridad de EEUU y de Venezuela. De hecho, existe un fuerte contraste y una evidente paradoja entre ambas posiciones, tanto en el plano de las percepciones como en el de la configuración de realidades estratégicas. Estados Unidos ve a mediano plazo a Venezuela como un peligro para la estabilidad del hemisferio, aunque paradójicamente, es el país más estable desde el punto de vista interno de la subregión andina. De igual modo, esa nación ve a Venezuela como un agente exportador de una revolución anticapitalista y antiestadounidense en el hemisferio, pero considera prioritaria para sus intereses su capacidad exportadora energética.

Venezuela, por su parte, ve a EEUU como una potencia que mantiene serias diferencias con su idea de la política, con su plan de desarrollo y con su política exterior, considerada esta como soberana y con una base de poder regional creciente, gracias a su capacidad energética, pero también a su capacidad de convocatoria ideológica (Blanco, 2005).

Este tipo de consideraciones ha llevado a algunos observadores a sugerir que en la actualidad nos encontramos en un punto crítico de las relaciones entre los dos países. Sin embargo, a nuestro modo de ver, todavía hay un espacio para la negociación como se ha demostrado en el devenir de la realidad con políticas sectoriales, tales como el combate al terrorismo y el combate al narcotráfico, la estabilidad en las relaciones diplomáticas y el flujo ascendente del comercio y de las inversiones entre ambos países (San Juan, 2005).

LAS RELACIONES POLÍTICAS ENTRE VENEZUELA Y ESTADOS UNIDOS

Marco inicial

La política de nuestro país hacia Estados Unidos, vista desde una perspectiva histórica, logró un éxito relativo en cuanto al apoyo permanente de Washington a la democracia venezolana, y en parte a la diseminación de la democracia en la región, así como también a la política petrolera de Venezuela, aun teniendo el compromiso con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

En principio, unas relaciones que fueron definidas como estables y fáciles de manejar tanto desde Caracas como desde Washington, se vieron sacudidas por las transformaciones globales a partir de la caída del Muro de Berlín, la agenda hemisférica de la década de los 90, los cambios políticos en Venezuela y los requerimientos regionales y mundiales de la política exterior de EEUU.

Del mismo modo, la complejidad burocrática norteamericana y la conformación de una nueva agenda bilateral que iba más allá de los temas tradicionales referidos a la democracia y al petróleo, contribuyeron a estructurar un nuevo tipo de relación entre los dos países, sobre todo a raíz del triunfo electoral de Hugo Chávez, en 1998.

Debe tenerse en cuenta que se estudia un caso novedoso, dada la costumbre que, según algunas opiniones, en “Venezuela no pasaba nada”. Ahora se están observando diferencias de carácter estratégico y no de naturaleza táctica.

Al cabo de siete años quedan pendientes por responderse algunas interrogantes. Por una parte, ¿hasta qué punto EEUU va a tolerar los cambios que experimenta la política venezolana en estos años? Por la otra, ¿hasta qué punto le conviene a Venezuela profundizar o no

las transformaciones de su economía, con esquemas distintos a los planteamientos neoliberales y la apertura y ampliación de su comercio exterior? Cabe subrayar que este país no se encuentra entre las naciones con oferta de productos dinámicos, su comportamiento económico es neomercantilista (explotación petrolera, divisas), teniendo una ventaja comparativa en el intercambio comercial con EEUU (petróleo por manufacturas y servicios), con unos términos que favorecen a Venezuela y participando en la economía interna estadounidense, dadas las inversiones de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvs) y los depósitos bancarios privados en EEUU de muchos venezolanos así como los del sector público.

Fueron cuatro las premisas en las que se basaron las relaciones bilaterales desde finales de la década de los 50 hasta nuestros días, premisas que aún están siendo cuestionadas. En primer lugar, la reiterada tesis de los gobiernos venezolanos sobre la importancia estratégica de nuestro país en el contexto hemisférico (socio confiable); en segundo lugar, la idea de la excepcionalidad histórica del caso venezolano con respecto a otros países de la región (socio con estabilidad política y económica); en tercer lugar, el predominio de la cooperación sobre el conflicto entre ambos países (socio que no preocupa); y en cuarto lugar, el predominio de temas bilaterales ajenos en parte a la agenda regional y global de los dos países (socio conocido).

Estas cuatro premisas reflejan dos tendencias históricas. Venezuela en los últimos 50 años no ha recibido sanciones políticas, militares o económicas por parte de EEUU, y ha podido deslindar su compromiso bilateral con el desempeño independiente de su actuación internacional (Ewell, 1996; Kelly y Romero, C., 2002; Petráš, 2000; Romero, A., 1986; Romero, C., 1986).

Venezuela, a pesar de tener una relación asimétrica con EEUU, ha ocupado un lugar fundamental en los intereses estratégicos de esa superpotencia. Así lo indican la condición de ser un suplidor del petróleo importado por esa nación y el ser el décimonoveno país del globo que comercia con Washington.

Sin embargo, las relaciones presentan en su desarrollo momentos accidentados, dada la pluralidad de intereses e identidades internacionales de la política exterior de Venezuela y una vocación propensa al activismo foráneo, lo cual le ha permitido en muchas ocasiones deslindarse de posiciones norteamericanas, principalmente en foros internacionales y en organismos multilaterales (Ewell, 1996).

En este contexto, Venezuela tuvo una constante dentro de los objetivos de su política exterior: presentarse frente a EEUU como un aliado seguro y confiable, dada la importancia estratégica del petróleo y de la democracia.

En materia estratégica, los gobernantes venezolanos, a la par de la relevancia económica del petróleo, ofrecieron a los mandatarios norteamericanos condiciones favorables para una alianza permanente en lo que se refiere al papel intermediario que pudiera jugar el país, como por su prestigio en tanto actor internacional moderado y cooperador en el ámbito hemisférico (Cardozo, 1992; Martz, 1977; Petráš, 1995).

Recuérdese que durante más de 40 años, la política exterior de Venezuela se ha basado en dos pilares fundamentales: petróleo y democracia. Al mismo tiempo, la política exterior se ha caracterizado por ser muy activa bajo el control de la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Energía y Minas, en la actualidad conocido como Ministerio de Energía y Petróleo, reflejando un consenso estable sobre los más importantes temas de carácter internacional, a excepción de los conflictos limítrofes (Guerón, 1972).

Igualmente, durante el período previo al año 1999, el Congreso Nacional y los grupos de presión no tuvieron una injerencia primordial en la formación de la política exterior ni tampoco los medios de comunicación, con excepción para el caso de los temas fronterizos. De cierta manera, el debate político se dio en el ámbito del Poder Ejecutivo y cada presidente tuvo una gran injerencia en el área internacional (Romero, C., 1997).

Las relaciones entre Venezuela y EEUU siguieron el mismo patrón desde la llegada de la democracia en 1958. Venezuela se definió como un socio cercano a EEUU y como un "promotor" de la democracia en el hemisferio. Aunque los gobernantes venezolanos tuvieron algunas discrepancias tácticas con los gobiernos norteamericanos en temas como el de la permanencia de Venezuela en la OPEP, o la tímida defensa de los sistemas democráticos por parte de Washington, sobre todo en la década de los 70, en la mayoría del período comprendido entre 1958 y 1999 las relaciones fueron cordiales y estables.

Sin embargo, durante los años finales de la década de los 80 del pasado siglo, tanto los cambios globales como la transformación de las relaciones hemisféricas determinaron una alteración de las rela-

ciones bilaterales. El petróleo venezolano sigue siendo una pieza fundamental para la seguridad norteamericana, no obstante, los temas hemisféricos de reciente data (ambiente, narcotráfico y terrorismo), comienzan a aparecer en la agenda bilateral de seguridad, tales como el combate al lavado de dinero y a la piratería intelectual, así como el tema de los derechos humanos.

Desde el punto de vista político, las imágenes de Venezuela sobre EEUU no fueron muy complejas. A pesar de una vieja costumbre hispánica antinorteamericana, presente en la tradicional generación política que fundó la democracia en el país, la élite partidista entendió la importancia de trabajar coordinadamente con EEUU.

Sin embargo, desde el punto de vista económico, la tradición estatista y corporativa en Venezuela generó una creciente crítica de sectores civiles, cuyas ideas fueron transportadas y difundidas principalmente por centros norteamericanos cercanos al neoliberalismo. Las ideas de raigambre norteamericana sobre la transparencia gubernamental, el mercado, la democracia individual y la sociedad civil, comenzaron desde la década de los 80 a participar en el discurso político local.

Desde el punto de vista social, lo más importante a destacar fue el creciente intercambio transnacional entre Venezuela y EEUU. Como se vio anteriormente, las relaciones bilaterales fueron por mucho tiempo de carácter oficial e institucional, y las sociedades de cada país tuvieron poca participación en la construcción de la agenda bilateral.

Recientemente, un emergente sector privado venezolano con intereses en EEUU y que va más allá del sector petrolero, tiene y expande negocios en ese país, y se une al importante crecimiento de una comunidad venezolana en él.

De hecho, un inmigrante típico venezolano en EEUU, hasta hace poco tiempo, era una ama de casa que se casaba con un ciudadano norteamericano, un venezolano casado con una norteamericana, o un "genio" proveniente de fuga de cerebros y otros casos que pueden ser considerados como puntuales. Ahora por el contrario, hay un creciente número de profesionales, estudiantes, empleados, artistas, académicos, gente relacionada con organizaciones no gubernamentales y obreros venezolanos que viven en EEUU.

Por su parte, EEUU ha jugado un papel trascendental con las empresas multinacionales de petróleo en la economía venezolana, desde la década de los 20 hasta la década de los 70 del pasado siglo, al

igual que se debe mencionar el papel del capital norteamericano establecido en el país de carácter no petrolero, y la contribución de las misiones comerciales de diferentes estados y ciudades de EEUU con Venezuela.

Se estimó recientemente que hay 23.000 ciudadanos norteamericanos viviendo en Venezuela; 12.000 turistas estadounidenses en promedio la visitan anualmente; y están registradas más de 500 compañías norteamericanas que operan en el país (MRE de Venezuela, *Libro Amarillo*, 1959, p. CII; U.S. Department of State, 2005, p. 8).

La misma embajada estadounidense y varias agencias gubernamentales norteamericanas también contribuyen a esta extensión de las relaciones con programas culturales, estudiantiles, de formación cívica, profesional y científica. A su vez, el inglés como idioma y muchos de los gustos norteamericanos se desarrollan ampliamente en el país.

En este contexto, las relaciones bilaterales son relaciones oficiales y particulares, dando pie a una mayor complejidad en las percepciones mutuas de los ciudadanos de cada país. Desde hace unos 20 años se formularon dos ideas básicas sobre EEUU en Venezuela. Para un sector moderado, Venezuela debía ser un aliado cercano a EEUU. Para un sector radical, EEUU era un peligro para el país y era conceptualizado como una estructura compacta. Ahora, los aspectos sociales y culturales promueven una visión menos simplista y más variada.

Por otro lado, las bases conceptuales de la política exterior venezolana y del papel estratégico del país se está transformando, lo que da a EEUU un rol menos cooperativo para el actual gobierno de Venezuela.

La secuencia histórica a partir de 1958

El día 13 de mayo de 1958, luego de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en enero de ese mismo año, el vicepresidente de EEUU Richard Nixon visitó Caracas. La violencia desatada al paso del automóvil que conducía a Nixon del aeropuerto internacional de Maiquetía a la ciudad, trajo como consecuencia que el ilustre visitante y su comitiva se refugiaron en la residencia del embajador norteamericano en Venezuela, se suspendieron los actos programados para la visita y se movilizaban en posición preventiva unidades de las

Fuerzas Armadas norteamericanas, con el fin de rescatar al vicepresidente en caso de que fuera necesario.

Afortunadamente, el gobierno provisional pudo garantizar su salida y no hubo necesidad de “invadir a Venezuela”. Sin embargo, el desplazamiento de unidades militares a las costas venezolanas motivó una protesta por parte de la Junta de Gobierno. Ese mismo año se firmó entre los dos países un Convenio de Cooperación concerniente a los usos civiles de la energía atómica (MRE de Venezuela, *Libro Amarillo*, 1958, pp. XXII, 181-190).

El primer gobierno constitucional de la segunda época democrática en Venezuela, presidido por Rómulo Betancourt (1959-1964), tuvo una política exterior basada en la promoción de una alianza hemisférica antidictadura, en la defensa del petróleo venezolano y en la insistencia en buscar soluciones multilaterales a los problemas regionales a través de los mecanismos de la Organización de Estados Americanos. Igualmente, Venezuela apoyó el programa de la Alianza para el Progreso y la política de enfrentamiento hacia Cuba, aunque no estuvo de acuerdo con plan alguno sobre una invasión militar a la isla caribeña. La conducta venezolana hacia EEUU en esos años se concentró en lograr el apoyo de Washington a su proceso interno, lo cual obtuvo con relativo éxito.

Venezuela no se vio amenazada por un cambio de actitud desfavorable hacia Caracas por parte de la Casa Blanca, a pesar de la indiferencia norteamericana ante la ola sucesiva de golpes militares en la región y la falta de apoyo a la promulgación de la llamada Doctrina Betancourt (tesis venezolana de romper relaciones con gobiernos militares que surgieran del derrocamiento de gobiernos civiles elegidos democráticamente). Así se desprende de un párrafo contenido en una declaración conjunta firmada por los presidentes Kennedy y Betancourt, en ocasión de la visita oficial de este último a EEUU, en el mes de febrero de 1963, en donde se dice que “El Presidente de los Estados Unidos se comprometió a dar un apoyo total de su país a la República de Venezuela en la resistencia contra la lucha sin cuartel del comunismo internacional, apoyada especialmente en sus aliados cubanos, dirigidas al derrocamiento del Gobierno Constitucional del presidente Betancourt” (Guerón, 1972; MRE de Venezuela, *Libro Amarillo*, 1961, p. 24; 1963, p. 41).

Ya John F. Kennedy había estado en Venezuela en visita oficial en diciembre de 1962. En esa ocasión el presidente Betancourt dijo:

“Nosotros los venezolanos recibimos como amigos a los que son nuestros amigos y, además, a los que son nuestros aliados en la lucha por mantener en América un clima permanente de libertades públicas y de justicia social, y por impedir la infiltración en América de doctrinas totalitarias que hacen padecer a otros pueblos” (MRE de Venezuela, *Libro Amarillo*, 1961, p. 24; 1963, p. 41; Guerón, 1972).

Durante el gobierno presidido por Raúl Leoni (1964-1969), Venezuela mantuvo unas relaciones menos coincidentes con EEUU. Leoni respetó los lineamientos generales de la política venezolana hacia Washington, la promoción de la democracia en el país y en la región, y la cooperación petrolera, pero se opuso a la invasión militar norteamericana a la República Dominicana en 1965, impulsando una política exterior más amplia, pero aceptando, con limitaciones, la ayuda militar estadounidense fundamentada en la tesis de la contrainsurgencia (Martz, 1977).

Las relaciones bilaterales entre Venezuela y EEUU, en el marco de la primera presidencia de Rafael Caldera (1969-1974), se orientaron hacia los temas económicos y petroleros. La estabilización de los regímenes militares en el continente y del proceso cubano, permitió una política más flexible, la cual se conoció como la del “Pluralismo Ideológico”, tendiente a reconocer la diversidad política en la región.

La denuncia del Tratado Comercial con EEUU se hizo en 1972. Este fue negociado en 1939, con base en el Convenio Original de Comercio celebrado el 6 de noviembre de 1939, firmado como Tratado de Reciprocidad Comercial, ratificado el 24 de julio de 1940 y modificado en 1952. Por otra parte, el comienzo del proceso de reversión petrolera, tendiente a una mayor participación directa del Estado en el negocio petrolero y en la búsqueda de un trato especial de Washington hacia Venezuela, simbolizó una conducta que respondía a una situación regional poco favorable para la democracia en América Latina y para el petróleo venezolano. El presidente Caldera estuvo de visita oficial en EEUU en junio de 1970 (Machado de Acedo y Padrón, 1987; Tugwell, 1975).

Durante el primer gobierno presidido por Carlos Andrés Pérez (1974-1979), Venezuela concentró su política exterior hacia EEUU en dos direcciones: se desarrollaron unas relaciones bilaterales estables en el plano político, pero desde la perspectiva internacional, Pérez trató de no comprometerse con la posición de Washington en temas sensibles como el energético, el Nuevo Orden Económico Internacional y Cuba.

Pérez visitó EEUU del 27 de junio al 2 de julio de 1977, en donde se comprometió con el presidente James Carter a impulsar los derechos humanos en el hemisferio. Posteriormente, Pérez visitó Washington en septiembre de ese mismo año, a fin de estar presente en la firma del nuevo Tratado del Canal de Panamá, entre el gobierno de Panamá y el de EEUU. Por su parte, Carter visitó de forma oficial a Venezuela los días 28 y 29 de marzo de 1978, ocasión en que se firmó el Tratado de Delimitación de Fronteras Marítimas entre ambos países (vigente desde el 24 de noviembre de 1980) y un Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación para la Eliminación del Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y otras Drogas Nocivas (Ewell, 1996; Jimeno Malavé, 1999; MRE de Venezuela, *Libro Amarillo*, 1977, p. 43; 1978, p. 133; Tugwell, 1975).

Cabe destacar que durante este período, Venezuela discrepó de la política y posición de EEUU con relación al trato de Washington, al pretender excluir a nuestro país del "Sistema de Preferencias Arancelarias", mediante el Acta de Comercio de 1974, aprobada por el Congreso norteamericano y que incluía a los países miembros de la OPEP que no habían participado en el embargo petrolero de la Organización, llevado a cabo en 1973. Esto produjo una gran movilización por parte del Gobierno y la empresa privada venezolana a fin de presionar a la Casa Blanca para que vetara el proyecto de ley, tal como finalmente sucedió.

En el marco de la presidencia de Luis Herrera Campíns (1979-1984), Venezuela sostuvo una política de "coincidencias" con EEUU referidas al desarrollo de una propuesta regional no socialista en América Central y el Caribe. Sin embargo, hay que recordar que Venezuela no apoyó la conducta de EEUU durante la Guerra de las Malvinas, la invasión norteamericana a Granada (con base en la tesis venezolana de buscar soluciones políticas a la crisis en esa isla caribeña en 1983) y la política de hostigamiento de EEUU al gobierno sandinista en Nicaragua. Herrera Campíns visitó oficialmente EEUU del 16 al 19 de noviembre de 1981 (Lanza, 1980; MRE de Venezuela, *Libro Amarillo*, 1981, p. 724; Romero, C., 1986). El gobierno presidido por Jaime Lusinchi (1984-1989), le dio un mayor énfasis a los aspectos económicos de las relaciones, específicamente a los vinculados con la deuda externa y con la búsqueda de mejores precios y condiciones comerciales para los productos de exportación venezolanos. Lusinchi estuvo en EEUU en visita de Estado entre el 3 y el 12 de mayo de 1984;

en visita no oficial en Nueva York en abril de 1985; y participó en una visita no oficial en una conferencia hemisférica sobre el Caribe en la ciudad de Miami, Florida, los días 19 y 20 de noviembre de 1985 (Jimeno Malavé, 1999; Rojas, 1992).

En el segundo gobierno presidido por CAP (1989-1993), se enfatizó el aspecto económico de las relaciones, procurándose abrir el intercambio comercial hacia los productos no tradicionales y la entrada de Pdvsa en el mercado petrolero norteamericano. Cabe destacar durante este período, las visitas oficiales del presidente Pérez a Atlanta en marzo de 1989, a fin de asistir a una reunión hemisférica sobre la deuda externa y el Plan Brady, auspiciada por el Centro Carter, y a la ciudad de Nueva York. Pérez arribó a Washington en abril de 1990 en visita de Estado, donde se firmó un Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica y se revisaron con el presidente de EEUU George Bush algunos temas de interés en la agenda mundial, regional y bilateral.

Por su parte el presidente Bush, estuvo en Caracas en diciembre de 1990 en visita de Estado, al igual que el vicepresidente estadounidense James Quayle, el 9 de marzo de 1990, y se creó el Consejo de Comercio e Inversión Venezuela-Estados Unidos en 1991, en cuyas reuniones de trabajo efectuadas en Caracas y Washington durante marzo y abril de 1992 se estableció lo que sería por muchos años la agenda comercial entre los dos países. Los puntos a negociar fueron: los acuerdos para evitar la doble tributación; para la promoción y protección de inversiones; sobre el embargo del atún; sobre subsidios y derechos compensatorios; y para la protección de los derechos de propiedad intelectual (Jimeno Malavé, 1999; MRE de Venezuela, *Libro Amarillo*, 1990, p. 192; 1992, p. 264; Rojas, 1992).

Durante el gobierno interino presidido por Ramón J. Velásquez (1993-1994), la relación se concentró por esos meses en el apoyo norteamericano a la estabilidad del régimen democrático venezolano.

En el segundo gobierno presidido por Rafael Caldera (1994-1999), Venezuela recibió un respaldo norteamericano importante a iniciativas en temas como el de la lucha anticorrupción y la promoción de la democracia regional. De hecho, ambos gobiernos suscribieron un acuerdo para lograr la repatriación de capitales y la extradición de supuestos corruptos, y otro de asistencia mutua para la administración de justicia relacionada con las instituciones bancarias y financieras. Estados Unidos por su parte, recibió el apoyo del gobierno

venezolano en temas de interés fundamental como el del narcotráfico, apoyo que se consolidó en la visita que el presidente William J. Clinton realizó a Venezuela en octubre de 1997, y en la cual se firmó una alianza estratégica contra las drogas.

No obstante, ambos gobiernos tuvieron divergencias tácticas importantes en cuanto a la posición norteamericana frente a la Ley Helms-Burton y el bloqueo comercial a Cuba; en torno a la firma de los tratados sobre protección de inversiones y doble tributación; y con relación a la venta de gasolina reformulada, caso que derivó en una apelación formal por parte de Venezuela ante la Organización Mundial de Comercio, alegando una violación a las reglas de libre comercio y un trato discriminatorio por parte del gobierno estadounidense.

Este contexto demarca, a grandes rasgos, las relaciones entre Venezuela y EEUU hasta 1998. Desde el punto de vista político, hubo una coincidencia estratégica en cuanto a favorecer la democracia y la seguridad hemisférica, y desde el punto de vista económico, la tendencia fue procurar un intercambio bilateral equilibrado dentro del signo petrolero. Por ello, el caso venezolano se enmarcó en lo que hemos denominado “unas coincidencias estratégicas y unas diferencias tácticas”. Es decir, que si bien no existían unas diferencias estructurales de carácter bilateral, en el plano coyuntural sí se dieron algunas fricciones de consideración.

Para poder entender estas fricciones hay que tomar en cuenta que desde la restauración de la democracia en el país en 1958, las relaciones transitaban bajo los siguientes parámetros: 1) que el caso venezolano era único y diferente al resto de los países latinoamericanos, dado el peso económico del petróleo y la estabilidad del sistema político; 2) que Venezuela no calzaba bien en los diversos intentos de clasificación provenientes de los estudios sobre política comparada de origen norteamericano, referidos a América Latina; 3) que en el país no pasaba nada importante como una revolución o un intento de golpe de Estado; 4) que entre Venezuela y EEUU había una estrecha relación, dado el tradicional rol de Venezuela como suplidor seguro y estratégico de EEUU en materia petrolera. Esta estrecha relación también se dio dentro del apoyo de Washington a los líderes democráticos venezolanos, principalmente aquellos pertenecientes a los partidos Acción Democrática y Comité de Organización Política Electoral Independiente (AD-Copei). Inclusive en el plano académico

norteamericano pesó mucho la visión partidista y bipartidista del proceso político venezolano; 5) que las relaciones estaban fundamentadas en un control oficial de las mismas por ambas partes, fuertemente centralizadas entre la presidencia venezolana, el MRE de Venezuela y el Departamento de Estado; 6) que en materia de política exterior se habían dado pocas fricciones, como por ejemplo la vinculación de Venezuela a la OPEP y la falta de apoyo de EEUU a la Doctrina Betancourt, pero más que todo había una coincidencia: la lucha de Venezuela por denunciar al gobierno cubano como intervencionista (Bond, 1977; Romero, C., 1998).

Ahora por el contrario, muchos de esos elementos son los que están cuestionándose. En realidad, Venezuela es cada día más "latinoamericana" en el sentido de que ya no es un caso único; las relaciones tienen ahora un carácter complejo, participan numerosas agencias gubernamentales venezolanas y norteamericanas, hay actores nuevos privados activos, las relaciones son algo más que oficiales y en lo académico compiten diversas visiones sobre unas relaciones que ahora son más conflictivas en el plano bilateral y en el plano internacional (Álvarez, 2000; Gómez Calcaño *et al.*, 2000; Kelly y Romero, C., 2002; Romero, C., 1986).

EL DESARROLLO PUNTUAL DE LAS RELACIONES BILATERALES DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS

Diplomacia bilateral y temas democráticos

El año 1998 parecía prometedor para las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, en la medida en que se estaban solucionando los problemas tácticos en el aspecto comercial, y en la medida en que el petróleo venezolano se afianzaba como una pieza estratégica de la política exterior de Washington. Por otra parte, ese mismo año, Venezuela tuvo la visita de altos funcionarios del gobierno de Bill Clinton: en junio, de Madeleine Albright, secretaria de Estado, en ocasión de celebrarse la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA); en octubre, de Thomas McLarty, consejero presidencial, con motivo de un seminario petrolero patrocinado por Petróleos de Venezuela, S.A. (PdvsA); de Bill Richardson, secretario de Energía, durante la misma ocasión; de Peter Romero, subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos; y en septiembre, de John Dalton, secretario adjunto de la Marina de EEUU. También visitó el país el ex Presidente de los Estados Unidos, James Carter, quien vino como observador internacional para las elecciones presidenciales de diciembre de 1998 y quien proclamó más tarde que en Venezuela se había dado una “revolución electoral” (*El Nacional*, 24-1-99, p. A/6).

El gobierno de EEUU dejaba claro que Washington apoyaba el proceso electoral en Venezuela y que reconocería al ganador de las elecciones cualquiera que fuera. Así lo manifestó el embajador estadounidense en Venezuela, John Maisto, el día 6 de noviembre de 1998. Esto fue corroborado por Dalton y por Richardson en sus visitas a Venezuela. Si bien este hecho determinaba la visión geopolítica de EEUU sobre Venezuela, con base en la tesis “de un socio confiable”,

fueron los aspectos relacionados con la campaña electoral de 1998 los que determinaron la nueva importancia política del país ante los ojos de Washington.

En efecto, a pesar del incidente y de unas notas de protesta del gobierno de Venezuela sobre la presunta incursión encubierta de agentes de la Drug Enforcement Agency (DEA), en la operación antinarcótico conocida como "Casablanca" contra el blanqueo de dinero, en la que supuestamente habían participado ciudadanos de nacionalidad venezolana, y una nota de protesta del gobierno de Rafael Caldera relacionada con unas declaraciones del embajador norteamericano en Venezuela, John Maisto, sobre que el próximo presidente de Venezuela tenía que afrontar con coraje el problema de la corrupción, fueron los asuntos electorales los que marcaron las relaciones bilaterales esos meses.

Las declaraciones de Maisto se dieron en el marco de la Asamblea de Gobernadores venezolanos llevada a cabo en la ciudad de Barquisimeto, en noviembre de 1998. Maisto también se refirió a que "Venezuela no estaba preparada para tratar con la amenaza del tráfico de drogas y el crimen organizado". Estas declaraciones fueron respondidas por el canciller venezolano Miguel Ángel Burelli, quien expresó: "Yo he sido embajador y considero que una regla de oro de la diplomacia es mantener la discreción sobre los asuntos internos del país en donde uno ejerce su función" (*El Nacional*, 27-11-98, p. A/2). Días antes de las elecciones presidenciales venezolanas, el secretario de Defensa de la Administración Clinton declaraba en Cartagena, en ocasión de celebrarse la II Reunión de Ministros de la Defensa de las Américas, que "Estados Unidos respetaría la decisión del pueblo venezolano. Esperamos que las elecciones sean democráticas y que se lleven adelante como están previstas" (Romero, C., 1998).

De esta manera se deseaba disipar los rumores relacionados con que el gobierno de EEUU veía con malos ojos una victoria del teniente coronel retirado Hugo Chávez Frías en la contienda presidencial, candidato que parecía tener el favoritismo de los electores. No debe olvidarse que en ese tiempo algunos columnistas y expertos norteamericanos y latinoamericanos advertían en los medios de comunicación estadounidenses sobre un supuesto peligro que correría la estabilidad regional luego de una victoria de Chávez. De hecho, la política adoptada por la Casa Blanca fue la de "esperar y ver", a pesar de que en mayo de 1998 se le había negado la visa a Chávez a fin de cumplir con

una serie de compromisos universitarios y con *lobbies* en EEUU. En diciembre de 1998, Chávez ganó las elecciones presidenciales con el 56% de los votos. El embajador Maisto manifestó en público y en privado que su país respetaría los resultados electorales y el futuro gobierno si este fuera presidido por Chávez, ya que la voluntad de los venezolanos se expresaría mediante el voto.

Se abría así un compás de espera para saber si en Washington se mantenía esta posición y si el nuevo gobierno venezolano aceptaba la realidad del marco hemisférico y de la importancia de la relación con EEUU. En este escenario, el día miércoles 9 de diciembre de 1998, Maisto visitó al ya presidente electo llevándole un mensaje de felicitación de Clinton, quien expresaba que “En nombre del pueblo de los Estados Unidos y el mío propio, por favor, acepte mis felicitaciones por su elección como Presidente de Venezuela. La alta votación y su impresionante margen de victoria son un testimonio de la larga y fuerte convicción democrática, así como el deseo de cambio positivo que quiere Venezuela”. Días después, el gobierno del presidente Clinton concedió a Chávez la visa de entrada a EEUU y el embajador Maisto fue a visitarlo por segunda vez y le ratificó que “las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela son excelentes y estoy seguro que seguirán siéndolo, porque los dos países tienen la disposición de trabajar en temas que nosotros compartimos, no sólo en el ámbito bilateral, sino también hemisférico” (*El Nacional*, 12-12-98, p. D/2).

El 19 de diciembre de 1998, Chávez fue el invitado de honor de la Asamblea Ordinaria de la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria, VenAmCham, en donde reiteró su deseo por unas buenas relaciones con EEUU y de atraer inversiones norteamericanas a Venezuela (*El Nacional*, 20-12-98, p. E/1).

Días después, el 30 de diciembre de ese mismo año, el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Peter Romero, se entrevistó con el presidente Chávez en ocasión de una corta visita a Caracas. Romero enfatizó la posición de la Administración Clinton de apoyar todas las iniciativas bilaterales para la cooperación económica y la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. También enfatizó que Chávez “tiene su programa de reformas; nosotros somos gente reformista; y según lo que escribió mi Presidente (William Clinton) al Presidente electo en su carta de felicitaciones, nosotros estaremos con él mientras él opere dentro de los parámetros constitucionales

para reformar al país y para mejorar el bienestar de todo el mundo acá" (*El Nacional*, 31-12-98, p. A/2).

Antes de empezar su gobierno y en su condición de presidente electo, Chávez dispensó en enero de 1999 una visita privada al presidente Clinton, el 27 de ese mes, en una entrevista que duró 15 minutos, y se reunió con varios de los colaboradores del presidente norteamericano en Washington, entre otros, Strobe Talbott, secretario adjunto del Departamento de Estado, Bill Richardson, secretario de Energía y Sandy Berger, asesor presidencial para Asuntos de Seguridad Nacional. La gira duró dos días y fue la primera visita de Chávez a EEUU como ciudadano y como mandatario electo, en donde también tuvo la oportunidad de entrevistarse con representantes de instituciones financieras en Nueva York, con sectores académicos y con el presidente del Fondo Monetario Internacional, Michel Camdessus. Para el embajador Maisto, la cita de Clinton con Chávez y todas las iniciativas restantes "conformarán una visión de la realidad sobre Venezuela que ya tienen los venezolanos pero que mis compatriotas no tienen" (se refería Maisto a la distorsión de la opinión en EEUU sobre la situación en Venezuela) (*El Nacional*, 26-1-99, p. A/2).

El día 25 de enero de 1999, Venezuela y EEUU firmaron el Tratado contra la Doble Tributación, instrumento que entró en vigencia en el año 2000 y que permitiría una mayor transparencia en las actividades empresariales venezolanas en EEUU y viceversa, además que facilitaría las inversiones en cada país (*El Nacional*, 26-1-99, p. A/2).

A pesar de los malos augurios que se proyectaban en los medios de comunicación, las relaciones entre Venezuela y EEUU no tuvieron grandes problemas al comienzo de 1999. Chávez trató de mantener un marco estable para las relaciones y EEUU reiteró su tesis de "esperar y ver". De hecho, Chávez había ganado limpiamente las elecciones presidenciales e iniciaba su gobierno bajo reglas democráticas, no había ninguna señal de aspirar a regular la empresa privada y el balance en materia de derechos humanos era satisfactorio, en cuanto al respeto a la oposición política. De hecho, el jefe del Comando Sur del Ejército norteamericano, Charles E. Wilhelm, en visita a Caracas, había ofrecido la cooperación de las Fuerzas Armadas de EEUU en las labores de desarrollo en el país (*El Universal*, 15-1-00, p. 1/2).

En junio de 1999, ya como presidente constitucional, Hugo Chávez viajó a Nueva York y Houston, en donde se reunió con inversionistas y gente de las finanzas. En Nueva York, Chávez visitó el Council of

Foreign Relation, The Council of Americas, conversó con empresarios y ejecutivos de grandes corporaciones como David Rockefeller, visitó la Bolsa de Valores y tuvo una conversación con Barry MacCaffrey, director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas del gobierno norteamericano, en cuya ocasión dijo que los sobrevuelos de aviones norteamericanos sobre el espacio aéreo venezolano no hacían falta ya que “podemos coordinar otras acciones”; sostuvo una reunión con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Kofi Annan, y “lanzó la primera bola” en un juego de Grandes Ligas en el Shea Stadium de la ciudad de Nueva York (*El Nacional*, 19-5-99, p. E/1; 10-11-6-99, p. A/1; *El Universal*, 10-6-99, p. 1/2).

En Houston, el presidente Chávez visitó al ex presidente George Bush, al gobernador de Texas y entonces precandidato presidencial George W. Bush y su hermano Jeff Bush, gobernador del estado de Florida. La visita fue todo un éxito desde la perspectiva política, y al decir del presidente Chávez “nuestras metas y objetivos fueron satisfechos”, y según George Landau, presidente del Consejo para América Latina de Relaciones Internacionales de Estados Unidos, “Hay que ayudarlo para que tenga éxito, porque si no, Venezuela se hunde”; pero quedaron dudas sobre el programa económico a seguir en Venezuela (*El Nacional*, 19-5-99, p. E/1; 10-11-6-99, p. A/1; *El Universal*, 10-6-99, p. 1/2).

Durante los meses de agosto y septiembre de 1999, el proceso político en Venezuela y en especial la disputa entre la Asamblea Nacional Constituyente y el Congreso Nacional, sobre el papel de cada institución en el proceso constituyente en Venezuela atrajo la atención de los medios de comunicación de EEUU, de sectores políticos y de los llamados círculos de Washington, sobre el país.

El editorial de *The New York Times*, de fecha 21 de agosto de 1999, motivó al ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, José Vicente Rangel, a enviar una carta al editor del periódico fechada el 23 de agosto, en la cual dijo: “como periodista y admirador del *New York Times*, me sorprendió y entristeció esta desviación de la objetividad y la cuidadosa investigación que con razón ha hecho de su periódico uno de los más influyentes del mundo”, y que “me gustaría también ver en lo sucesivo una visión más equilibrada de nuestro país y de nuestro gobierno” (reproducido en *El Nacional*, 24-8-99, p. A/2). La respuesta del canciller Rangel fue secundada por una carta de Michael Nylm, presidente de la General Motors de Venezuela,

quien expresó su total desacuerdo con el objetivo del editorial, expresando que “antes de condenarlo al fracaso, a través de nuestra prensa o de algún otro medio, lo cual podría no materializarse, creo que decididamente seríamos más ricos como americanos y como seres humanos si adoptáramos una actitud de ayuda, soporte y asistencia” (reproducido en www.venezuelaanalitica.com, en su edición correspondiente a la última semana de agosto de 1999).

En lo que configuró una campaña en contra de Chávez por parte de algunos medios de comunicación social norteamericanos, visitó Caracas una delegación del gobierno anglosajón encabezada por Thomas Pickering, subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, y Peter Romero, subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, el 29 y 30 de agosto de 1999, a fin de conversar sobre temas políticos y económicos con personalidades venezolanas. Ese mismo mes arribó a Caracas una delegación del Congreso norteamericano, la cual estuvo integrada por Cass Ballenger y William Delahunt, miembros de la Cámara de Representantes (*El Universal*, 30-8-99, p. A/1).

Al mismo tiempo, una delegación conformada por tres miembros de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela visitó, a principios de septiembre, la ciudad de Washington, a fin de promocionar las labores de la Asamblea y disipar dudas sobre su legitimidad y legalidad. La delegación se entrevistó con funcionarios de la Administración Clinton, del Congreso y con diversas personalidades del mundo de los *lobbies*, visitando también distintos medios de comunicación. Los ministros de la Defensa y de Relaciones Interiores de Venezuela igualmente estuvieron en Washington en la tercera semana de septiembre, a fin de preparar la visita del presidente Chávez (*El Universal*, 15-9-99, p. A/1; MRE de Venezuela, 1999, p. 169).

Sin embargo, el acontecimiento más importante que ocurrió en estos meses fue el viaje de Chávez a EEUU entre los días 19 y 23 de septiembre de 1999, con el propósito de participar en la Asamblea General de la ONU. En esta oportunidad, Chávez regresaba a Washington y Nueva York como presidente constitucional de Venezuela. Si bien en su visita no tuvo el carácter como “invitado oficial” del gobierno de EEUU, el presidente venezolano aprovechó la ocasión para entrevistarse brevemente y en forma privada con el presidente Clinton, en la sede de la Misión Permanente de EEUU ante la ONU, visitando además instituciones públicas y privadas en Nueva York (MRE de Venezuela, 1999, p. 169).

El viaje del presidente Chávez originó muchas expectativas en los círculos políticos norteamericanos, en medios de comunicación cercanos a América Latina y en los intereses petroleros, estando a la vez el gobierno venezolano desarrollando una ofensiva de información en EEUU sobre el país, sobre los alcances de la labor de la Asamblea Constituyente, y en general sobre el cambio político que se estaba produciendo en Venezuela.

El 21 de septiembre de 1999, Chávez tuvo un almuerzo con sectores económicos privados en Nueva York, y realizó una visita al periódico *The New York Times*. En la tarde de ese mismo día, fue el primer orador de orden en la Asamblea General de la ONU. En 20 minutos, su discurso se centró en la idea de que él era “un demócrata” y de que en su país el proceso político se hacía en paz, y que venía “a garantizarle al mundo entero que en Venezuela se ha respetado, se respeta y se va a respetar la esencia de un proceso democrático que viene surgiendo de la misma voluntad del pueblo”. Al caer la tarde de ese 21 de septiembre, Chávez se entrevistó con Clinton en la sede de la misión norteamericana en las Naciones Unidas. Según el presidente Chávez, los temas tocados en la reunión entre los dos mandatarios fueron: el combate común al narcotráfico, el proceso constituyente, la voluntad democrática del gobierno venezolano y el proceso de paz en Colombia. Chávez comentó que “Estados Unidos ha comprendido nuestra posición (en cuanto a la lucha antidrogas), ahora la meta es trabajar para hacer confluir ambas posiciones”.

El 22 de septiembre el presidente Chávez se dirigió a Washington, en donde se reunió con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el Consejo Permanente de la OEA. También visitó el Colegio Interamericano de Defensa, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Sociedad Interamericana de Prensa, y a los presidentes del FMI y del Banco Mundial. El 23 de septiembre, se reunió con legisladores norteamericanos y representantes de diversos medios de comunicación y *lobbies*, regresando en la tarde de ese día a Venezuela.

Otra diferencia diplomática volvió a quebrantar las buenas relaciones entre Venezuela y EEUU a principios del año 2000. A raíz de unas declaraciones de Peter Romero, subsecretario de Estado de EEUU para Asuntos Hemisféricos, dadas al diario español *ABC*, el gobierno de Venezuela demandó a Washington una aclaratoria sobre las palabras del funcionario. En efecto, éste había manifestado en la entrevista que “no se ve un manejo del gobierno, sólo plebiscitos, referéndum,

más elecciones, y nos dicen [que] hay que esperar, pero los gringos no somos conocidos por nuestra paciencia" (*El Nacional*, 2-2-00, p. A/2). Estas y otras referencias verbales en las declaraciones de Romero, impulsaron a la Administración Chávez a llamar al embajador Maisto a la sede de la Cancillería venezolana, a fin de aclarar si las opiniones de dicho funcionario eran a título personal o reflejaban una postura de la Administración Clinton. De hecho, en palabras del canciller venezolano, José Vicente Rangel, "el gobierno venezolano considera que se trata de una declaración inamistosa y al mismo tiempo amenazante". Maisto se reunió con Rangel, explicando los alcances de las declaraciones de Romero, y el Departamento de Estado emitió una declaración oficial menos alarmista en donde se expresaba que "El gobierno de los Estados Unidos reconoce el esfuerzo del gobierno del presidente Hugo Chávez para realizar reformas constitucionales. El Secretario Asistente Encargado de Asuntos Hemisféricos Peter Romero estaba expresando la preocupación del gobierno de los Estados Unidos sobre las dificultades fiscales y la situación económica del país". Las explicaciones de Maisto y la declaración del Departamento de Estado fueron suficientes para que el canciller Rangel declarara superado el impase entre los gobiernos "por ahora", aunque expresaba que Venezuela no aceptaba "consejos ni advertencias" (*El Nacional*, ediciones de los días 2, 3, 5 y 6-2-00, p. A/2).

Si bien el incidente fue superado diplomáticamente, sectores de opinión tanto en Washington como en Caracas, coincidieron en que se había exagerado el contenido y la proyección de las declaraciones de Peter Romero, y que más importante era que ambos gobiernos se sentaran a conversar y a negociar puntos de la agenda bilateral que eran fundamentales y en donde había diferencias de opinión sobre el tipo de democracia en Venezuela, en materia hemisférica, en el tema de Colombia y en el manejo de los temas multilaterales (*El Nacional*, 7-2-00, p. A/2).

Al efectuarse las megaelecciones en la nueva fecha pautada, 30 de julio de 2002, los resultados electorales oficiales en Venezuela demostraron que las encuestas serias no se habían equivocado. En ese sentido, el presidente Chávez sacó un 59% de los votos, seguido de Francisco Arias Cárdenas con un 39%, y en tercer lugar, Claudio Fermín con un 2%. En referencia a las relaciones del Gobierno con la comunidad internacional, la celebración sin mayores problemas de las elecciones legitimó el proceso electoral y la victoria de Chávez.

De hecho, las elecciones realizadas no eran sino la certificación de un proceso y de unas tendencias definidas. Se puede decir que Venezuela era un país que ahora estaba dividido en tres sectores. El primero de ellos, el “chavismo”, que llevaba el control del país, con un 60% de las preferencias electorales; la oposición, con un 40% de las preferencias, y la abstención, con un 10%, originado por un grupo significativo de venezolanos que no les interesaba o no se sentían representados por los partidos políticos.

En este contexto, en el año 2000 Chávez siguió “navegando entre dos aguas” en materia económica mientras hubo ingresos petroleros extraordinarios, vale decir entre las tendencias populistas y las tendencias neoliberales y evitando medidas drásticas en el ámbito de la economía como el control de cambios.

Mientras tanto, en el marco de la convención presidencial del Partido Republicano norteamericano, se presentaba un documento sobre política exterior coordinado por Condoleezza Rice, George Schultz y Henry Kissinger, en donde se decía que “en Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y otros países, la democracia está tambaleándose o bajo un grave ataque”. Y *The New York Times*, en su edición del 2 de agosto de 2000 planteaba que “los venezolanos deberían desconfiar de cómo intenta usar sus nuevos poderes” (se refiere a Chávez) (*Economía Hoy*, 2-8-00, p. 15; 3-8-00, p. 15).

John Maisto preparaba en agosto de 2000 sus maletas para dejar la jefatura de la Embajada norteamericana en Venezuela. En varias ocasiones, antes de despedirse, reiteró su confianza en el porvenir de Venezuela y mantuvo su crítica moderada al gobierno de Chávez. Por una parte, dijo que “sólo abriendo un mayor espacio a la participación del sector privado, la economía venezolana podrá arrancar con energía”. Sobre si tenía un consejo para su sucesora, Donna Hrinak, Maisto manifestó que debía “tener mucho humor” (*Economía Hoy*, 4-8-00, p. 4; *El Nacional*, 28-8-00, p. A/4).

La nueva embajadora presentó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Chávez las “Copias de Estilo” que la acreditaban para el cargo, el 15 de agosto de 2000. Hrinak laboró en la sede diplomática norteamericana en Caracas entre 1987 y 1989 como ministro consejero, y luego trabajó en el Departamento de Estado y se desempeñó como embajadora de su país en la República Dominicana y en Bolivia. En la ocasión de presentarse las “Copias de Estilo”, el canciller José Vicente Rangel aseguró que la embajadora

“viene en un momento importante y en la misma tónica que Maisto, es decir para dialogar y buscar el entendimiento y para mantener la transparencia en unas relaciones en las que se dan coincidencias, del mismo modo que pueden darse desacuerdos” (*Economía Hoy*, 16-8-00, p. 16; MRE de Venezuela, 2000, p. 208).

El acontecimiento más importante para las relaciones bilaterales entre Venezuela y EEUU fue la gira del presidente Chávez a varios países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con el fin de reiterar la invitación a la II Reunión Cumbre de esa Organización, la cual se celebró en Caracas a fines de septiembre de 2000. Ante el malestar del Departamento de Estado por la visita de Chávez a Irak y su entrevista con Saddam Hussein, el vocero de ese organismo, Richard Boucher, se había referido a que ese encuentro “era particularmente irritante”, rompiendo así el bloqueo político que tenía el Presidente de Irak. El presidente Chávez contestó: “si quisiera ir al infierno y hablar con el mismo Diablo, incluso si sólo fuera para oler el sulfuro, lo haría porque somos libres y soberanos y no necesitamos que alguien nos diga adónde ir”. También el canciller Rangel se refirió a que “El presidente Chávez es libre de viajar por el mundo. El mundo no tiene policías” (*El País*, 20-8-00, p. 6). Albright, secretaria de Estado del gobierno de EEUU comentó sobre esa visita y la realizada al líder libio, Muammar Al Gaddafi, y dijo que a Chávez “habría que mandarle una crema para que no se vaya a sobreirritar”. Chávez respondió diciendo que “la revolución venezolana se abrazaba a la revolución libia”. Al mismo tiempo, Chávez planteó que “necesitamos relanzar la organización, la OPEP, pues el mundo cambia y no debemos ponernos de rodillas”, en una clara alusión a la famosa frase de Ronald Reagan (*El País*, 20-8-00, p. 6).

El 19 de agosto de 2000 el presidente Chávez se juramentó por segunda vez por un período de seis años como Presidente de Venezuela, en el marco de una nueva Constitución con la idea de comenzar “una segunda fase de la revolución”, la de las transformaciones económicas y sociales.

En ese contexto, Chávez reiteró su compromiso para desarrollar una política exterior soberana, al tiempo que días más tarde, a principios del mes de septiembre de 2000, en el marco de la Cumbre Suramericana de Presidentes convocada por el gobierno de Brasil, hacía fuertes críticas al Plan Colombia, por contener, según él, un alto tinte militar que pudiera alterar el equilibrio estratégico de la región, rei-

terando que una cosa era apoyar a Colombia y otra al Plan Colombia (esta era una iniciativa colombiana para lograr el apoyo de EEUU, Europa y América Latina, con el fin de erradicar el narcotráfico en ese país que cuenta con un fuerte respaldo de Washington, remarcado por la visita del presidente Clinton a Cartagena a fines de agosto de 2000, a objeto de solidarizarse con el entonces presidente de Colombia, Andrés Pastrana) (*El Nacional*, 2-9-00, p. A/2).

El presidente Chávez viajó a Nueva York el 4 de septiembre de 2000, para participar en la llamada “Cumbre del Milenio” de las Naciones Unidas. Allí se dirigió ante la Asamblea General de ese organismo, el día 7, en un discurso breve en donde apoyó las medidas necesarias para reestructurar la ONU y además abogó por mejorar la situación de los pobres en el mundo, a los que parafraseó como “los condenados de la tierra”, famoso título de un libro escrito por el intelectual de origen martiniqueño Frantz Fanon. Ese mismo día, Chávez tuvo varios encuentros casuales con el presidente Clinton y otros líderes mundiales.

El viernes 8 de septiembre, el presidente Chávez asistió a un desayuno con empresarios y ejecutivos organizado por VenAmCham, la Asociación Venezolana-Americana de los Estados Unidos (VAUS, por sus siglas en inglés) y el Consejo de Negocios para el Entendimiento Internacional (BCIU), en donde dijo que “ninguna empresa extranjera o nacional debe temer por la seguridad jurídica, una vez que se haya completado la primera etapa de cambios profundos en la estructura del país”. Luego, el presidente Chávez se reunió con representantes de la banca y finanzas norteamericanas y con el Consejo Editorial de *The New York Times*, y presidió un almuerzo organizado por el Council of Foreign Relations al cual asistieron empresarios, periodistas y académicos interesados en Venezuela (*El Globo*, 3-8-00, p. 16; *El Nacional*, 9-8-00, p. A/1; MRE de Venezuela, 2000, p. 208).

Entre el 27 y el 28 de septiembre de 2000, se efectuó la II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la OPEP en Caracas. El marco de esa reunión sirvió para desarrollar un objetivo de la política exterior de Chávez en cuanto a su antioccidentalismo. Sin embargo, la falta de consenso para condenar el embargo de la ONU a Irak y la ausencia de un discurso radical por parte de varios de los participantes limitó la proyección de la reunión (*El Nacional*, 29-9-00).

Entre el 16 y el 17 de octubre de 2000, Chávez hizo un corto viaje a EEUU. Se reunió en la ciudad de Houston en la mañana del día 16

con ejecutivos petroleros de las empresas Conoco, Phillips Petroleum Company, Halliburton Energy Services, CMS Energy y Lone Star Space Access (esta última tenía un proyecto para desarrollar una base aeroespacial en territorio venezolano). Al mediodía asistió a un almuerzo en esa misma ciudad con representantes de empresas norteamericanas como Greater Houston Partnership, Chase Manhattan Bank y Citgo, empresa de propiedad venezolana. En la tarde, Chávez se dirigió al estado de Lousiana a fin de realizar un recorrido por la refinería de Lake Charles y la sede de Citgo. En la noche del mismo día, asistió a un evento sobre “Desafíos a la Democracia en las Américas” en la ciudad de Atlanta, Georgia, auspiciado por el Centro Carter, donde criticó el modelo de democracia representativa. El presidente venezolano regresó a Caracas en la tarde del 17 de octubre (*El Nacional*, 18-10-00, p. E/2; MRE de Venezuela, 2000, p. 209).

El 19 de octubre del año 2000, Thomas McLarty, quien fuera jefe de gabinete de la Casa Blanca, asesor del presidente Clinton y enviado especial para América Latina del gobierno norteamericano dijo, en ocasión de una mesa redonda realizada en Nueva York, que el presidente Chávez se había trazado unas metas en Venezuela, “cuya concreción es imprescindible, y pueden llevar a incomodar a Estados Unidos y a algunos de sus vecinos latinoamericanos” (*El Nacional*, 20-10-00, p. A/2).

Durante los días 26 al 30 de octubre de 2000, el Presidente de Cuba y líder revolucionario de esa isla caribeña Fidel Castro visitó Venezuela por sexta vez desde que llegó al poder en 1959, pero en esta oportunidad, en visita oficial. Castro estuvo en varias ciudades e instituciones venezolanas y no faltó la ocasión para que defendiera la Revolución cubana, emitiera una opinión favorable sobre el proceso político venezolano y alabara el papel del presidente Chávez en la Venezuela contemporánea. En ese contexto, el presidente Castro se refirió a que si Cuba había podido sobrevivir a 90 millas del coloso, “mucho más puede hacerlo la tierra de los próceres y el continente de Bolívar, sobre todo si tiene un Chávez como timón” (*El Universal*, 27-10-00, p. 1/2).

Esta referencia indirecta a EEUU, el clima antiimperialista de la visita, la referencia de ambos mandatarios acerca de la posibilidad de desarrollar un polo de poder latinoamericano sin el concurso de esa nación, y algunos comentarios de la oposición interna sobre los efectos de esta visita para la continuación positiva de las relaciones entre EEUU y Venezuela, motivaron a que el canciller Rangel insistie-

ra en que “las relaciones entre los dos países (EEUU y Venezuela) se estaban desarrollando sin problemas” (*El Universal*, 27-10-00, p. 1/2).

The Washington Post publicó un editorial en su edición del 2 de noviembre de 2000, en donde se pronunciaba sobre la necesidad de que el próximo Presidente de EEUU debería “limitar las oportunidades de Chávez para exportar su ideología”. Para el periódico norteamericano, “las arengas de Chávez contra los Estados Unidos se han prolongado por dos años; sería una locura asumir que no creará problemas cuando pueda hacerlo” (*The Washington Post*, 2-11-00, p. 2).

La serie de incidentes entre los dos gobiernos y la opinión crítica de *The Washington Post*, fueron motivo para que la secretaria de Estado de la Administración Clinton, Madeleine Albright, sentenciara que aunque EEUU se negaba comparaba a Chávez con Castro: “sí está preocupado por algunos de los métodos que ha adoptado” (*El Nacional*, 3-11-00, p. A/2).

El 3 de noviembre del año 2000, el canciller José Vicente Rangel hizo un comentario sobre el editorial del diario *The Washington Post* y sobre las declaraciones de Albright y afirmó: “afortunadamente nosotros tenemos tanta suerte que es la propia secretaria de Estado, la señora Albright quien se encarga de desmontar las mentiras del periódico”. Y sobre los resultados de las elecciones presidenciales en EEUU, que dieran la victoria al candidato republicano George W. Bush, Rangel dijo: “El presidente Chávez es muy amigo del candidato presidencial. Además, él proviene de un estado petrolero. De ser electo seguramente tendrá una consideración muy particular sobre el petróleo” (*El Nacional*, 4-10-00, p. A/2). Las declaraciones del canciller Rangel fueron secundadas por las del presidente Chávez, quien en un programa radial manifestó que el editorial de *The Washington Post* merecía “la condena de toda Venezuela, por manipulador, ventajista y porque además se presta para un plan, y tengo pruebas, compartido por venezolanos adinerados y con poder en algunos medios de comunicación para tratar de interrumpir las relaciones entre los dos países”. En cuanto a las declaraciones de la secretaria de Estado, dijo que “esa declaración habla de la seriedad del gobierno de los Estados Unidos” (*El Nacional*, 6-10-00, p. D/1).

Por su parte, *The New York Times* publicó otro editorial dedicado al presidente Chávez el día 6 de noviembre de 2000; en ese editorial se dice que “está claro que el Presidente venezolano Hugo Chávez desea convertirse en un símbolo poderoso de resistencia a la influen-

cia de los Estados Unidos, no sólo en América Latina sino también en el resto del mundo". Al mismo tiempo, expresó que "Washington tendrá que observarlo con cautela, aunque debería evitar confrontaciones innecesarias" (reproducido en *El Nacional*, 7-10-00, p. D/1). Frente a este editorial, Chávez dijo que "Nosotros estamos obligados a mantener y cuidar mucho las relaciones con los Estados Unidos que están condenadas a ser buenas" (*El Nacional*, 7-10-00, p. D/1).

Al mismo tiempo, VenAmCham rechazaba el estado de tensión entre los dos países y reclamaba la falsedad del contenido del editorial de *The Washington Post* de la siguiente forma: "deploramos las afirmaciones injustas y erradas que exacerban las tendencias negativas y no producen ningún resultado positivo en cualquiera de las dos partes para la relación bilateral" (*El Nacional*, 7-10-00, p. D/1).

La embajadora Hrinak volvió a reiterar la necesidad de estrechar "relaciones en los primeros meses del 2001, con el fin de concretar una agenda de apoyo e intercambio" (*El Nacional*, 8-12-00, p. E-3). En esa misma dirección, Antonio Herrera Vaillant, vicepresidente de VenAmCham escribió un artículo de prensa descartando la cubanización de Venezuela o la llegada de los marines a territorio venezolano. Así, Herrera V. dijo: "Instituciones como VenAmCham, creadas para promover las mejores relaciones bilaterales, tienen que preocuparse por quienes usan en cada ocasión, [un] ejemplo o [una] excusa para fomentar mala sangre entre Venezuela y los Estados Unidos. Es prácticamente obligatoria la pregunta: ¿exactamente qué buscan tales elementos? Cualquiera que sea el escenario por ellos imaginado sobre intervenciones externas, resulta totalmente negativo para todas las partes involucradas, incluso para los intereses norteamericanos" (*El Universal*, 10-12-00, p. 2/4).

En ocasión de la consagración de George W. Bush como presidente electo de EEUU, lo que cerraba uno de los capítulos más dramáticos de la historia política de ese país, el presidente Chávez le envió una carta al entonces gobernador Bush, en la que expresó que felicitaba "al pueblo norteamericano por la muestra del buen funcionamiento de las instituciones del país, que hizo posible una satisfactoria culminación del proceso electoral", y en donde reitera "la determinación que anima a Venezuela a estrechar los vínculos y trabajar mancomunadamente, en apego a las normas del derecho internacional, por la paz, los derechos humanos y la prosperidad en esta zona del mundo" (*El Universal*, 15-12-00, p. 1/4).

En el mes de diciembre del año 2001, se conoció que EEUU enviara un nuevo embajador a nuestro país, Charles Shapiro, quien era un diplomático de carrera. Al ser interpelado en el Congreso norteamericano sobre el tema de Venezuela, Shapiro dijo que la “relación con Venezuela es compleja y presenta numerosos desafíos. Nuestra amistad con el pueblo de Venezuela data de muchos años y la apreciamos mucho. El intercambio de ideas, valores, de personas y de comercio es importante para nuestras dos naciones” (*Últimas Noticias*, 8-12-01, p. 23).

El presidente Chávez viajó a Puerto Rico, estado libre asociado de EEUU, el 2 de enero de 2001 a fin de asistir a la toma de posesión de la nueva gobernadora de la isla, María Sílvia Calderón. Durante el desarrollo de su estadía de 24 horas en Puerto Rico, Chávez no hizo alguna alusión directa al tema de la independencia de esa nación, ni ninguna referencia al tema de las pruebas militares en la isla de Vieques. En referencia al estatus de Puerto Rico dijo: “Abogamos porque Puerto Rico tome sus propias decisiones”; y en referencia al caso de Vieques comentó que eso estaba reservado “exclusivamente a Puerto Rico y Estados Unidos”. Sobre las relaciones entre Venezuela y EEUU, Chávez se refirió a que “en vista de la inteligencia y la seguridad del gobierno norteamericano, yo estoy seguro que más allá de los cuentos de carretera, en Washington me ven como lo que soy: un presidente elegido en democracia” (*El Nacional*, 3-1-01, p. A/2).

Chávez participó en la II Cumbre de las Américas, realizada en la ciudad de Québec, los días 20 y 21 abril de 2001, ocasión en la cual firmó, con reservas, la declaración final de esa Cumbre. Una mención especial merece el comportamiento de Venezuela con relación al tema del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Venezuela trató nuevamente de ser diferente, en la medida en que el gobierno de Chávez se transformó en una voz disidente durante la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno en Québec. Caracas estimó que era necesario firmar la declaración final “con el pañuelo en la nariz”, insistiendo en las reservas venezolanas sobre el tema de la democracia representativa y sobre el término de las negociaciones para firmar el acuerdo de libre comercio, previsto para enero de 2005. Chávez reservó su posición contraria al “Plan de Acción para fortalecer la democracia representativa y promover una eficiente gestión de gobierno y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales...”, como también lo hizo con respecto a que las negociaciones del ALCA concluirían a más tardar a comienzos de 2005 (Romero, C., 2005).

Si bien las “dudas” venezolanas no perjudicaron el estado de las relaciones bilaterales, y tampoco dejó de comprometer al país en las negociaciones, de hecho, el presidente Chávez firmó la declaración final de Québec, pero su posición abrió nuevamente la discusión sobre si el gobierno venezolano no tiene una actitud favorable hacia el tratado. No se debe olvidar que el ALCA no es fundamental para Venezuela, dado el carácter petrolero de las relaciones bilaterales entre el país y EEUU.

Chávez también viajó a EEUU el 22 y 23 de abril de 2001, a la ciudad de Hickory, Carolina del Norte, donde fue recibido por su anfitrión, el representante al Congreso de los Estados Unidos, Cass Ballenger. El 1° de junio de 2001, Chávez visitó la refinería de Citgo, en Corpus Christi, Texas; allí reiteró que “Venezuela estaba dispuesta y tenía la capacidad de continuar el suministro de energía confiable a los Estados Unidos” (MRE de Venezuela, 2001, p. 203).

El 21 de abril de 2001, el entonces canciller de Venezuela, Luis Alfonso Dávila, se reunió con el secretario de Estado de EEUU, Colin Powell, y solicitó oficialmente la incorporación de Venezuela como beneficiario de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA) (MRE de Venezuela, 2001, p. 203).

A raíz de los acontecimientos políticos de 2002 en el país (véase este punto más adelante), EEUU apoyó la formación de una Mesa de Negociación y Acuerdos entre el gobierno de Chávez, establecida en agosto de ese mismo año, a fin de facilitar el diálogo entre el Gobierno y la oposición patrocinada por la OEA, el Centro Carter y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la cual comenzó a operar en noviembre de 2002 y fue apoyada por el Grupo de Países Amigos del Secretario General de la OEA, formado en Quito, el 15 de enero de 2003, a fin de buscar una salida política a la crisis venezolana de esos meses. Lo que se plasmó fue la aceptación de la celebración de un plebiscito revocatorio, con base en un acuerdo firmado entre las partes el 29 de mayo de 2003, y el cual se llevó a cabo el 15 de agosto de 2004.

El gobierno de EEUU también apoyó la creación del Grupo de Países Amigos y de hecho formó parte del mismo, junto con los gobiernos de Chile, España, Portugal, México y Brasil, país que coordinó dicho grupo. El gobierno estadounidense había apoyado la Resolución N° 833 de la OEA, aprobada el 16 de diciembre de 2002, que llamaba a una solución constitucional, democrática, pacífica y electoral

a la crisis en Venezuela, y respaldó los resultados del referéndum del 15 de agosto de 2004 (US Department of State, 2005, p. 4). Un comunicado de la embajada norteamericana en Venezuela fechado el 18 de septiembre de 2002, puntualizó que “La Embajada de los Estados Unidos observa con gran preocupación el hecho de que se estén intensificando los rumores, cada día más específicos, sobre planes de recurrir a los medios violentos e inconstitucionales para resolver la crisis política actual” (*El Nacional*, 19-9-02, p. A/2).

En ese marco, y dentro del proceso de “internacionalización” del caso venezolano, cabe destacar la presencia del Centro Carter, conocida organización no gubernamental que prestó su colaboración en el desenvolvimiento de los procesos electorales y de consulta electoral de 1998, 1999, 2000 y 2004 en Venezuela; la United States Agency for International Development (Usaid), agencia de cooperación del Ejecutivo norteamericano; y la National Endowment for Democracy (NED), agencia creada por el Congreso norteamericano para la promoción de la democracia.

De igual forma han trabajado en Venezuela ONGs como el Center for International Private Enterprise (CIPE), el Free Trade Union Institute, el International Republican Institute (IRI), el National Democratic Institute for International Affairs (NDI) y la Development Alternatives Inc. (DAI), las cuales han organizado eventos y cursos de formación para la promoción de la democracia, y han financiado programas relacionados con ese tema en Venezuela.

La Usaid contrató con la DAI 67 financiamientos para programas conjuntos con ONGs venezolanas –siendo la mayoría de estas organizaciones opositoras al gobierno de Chávez– por el orden de dos millones de dólares americanos; y el NED otorgó más de 10 millones de dólares a este mismo tipo de organizaciones en el período 1999-2003. El gobierno del presidente Chávez y el oficialismo han calificado esta ayuda como un abierto apoyo del gobierno norteamericano a las fuerzas opositoras venezolanas y han hecho de esto un constante intento de manipulación política, a fin de vincular a la oposición con supuestos planes conspirativos del gobierno de Washington (Golinger, 2005; Jones y Tayler, 2005).

Dentro de esta discusión, el gobierno de Chávez pone en duda la legitimidad de algunas ONGs venezolanas que se benefician del financiamiento externo y se les define como un problema para la seguridad de la nación (Romero, C., 2005).

El representante alterno del gobierno estadounidense ante la OEA, Peter DeShazo, visitó Caracas en diciembre de 2003, ocasión en la cual el canciller venezolano Roy Chaderton, manifestó que las relaciones entre los dos países “siempre son mejorables” (*El Universal*, 3-12-03, p. 1/2).

El 5 de enero de 2004, el vicepresidente ejecutivo José Vicente Rangel, afirmó que entre EEUU y Venezuela “nos llevamos bien en algunos puntos y tenemos otras diferencias políticas” (*El Universal*, 6-1-04, p. 1/2).

El 17 de octubre de 2004, el nuevo embajador norteamericano en Venezuela, William Brownfield, dijo que las relaciones entre Venezuela y EEUU “van a mejorar en los meses sucesivos” (*El Universal*, 18-10-04, p. 1/2). Brownfield al arribar a Caracas puntualizó: “La posición del gobierno mío, diría yo, no es conciliadora tanto como realista, en el sentido de que existe un gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Es una realidad y la verdad es que ni el gobierno de los Estados Unidos ni el gobierno de cualquier otro país en el mundo va a vivir en un mundo de fantasía” (*El Nacional*, 19-10-04, p. A/8).

Más adelante, el 11 de enero de 2005, tres senadores del Congreso de EEUU, Lincoln Davenport, del estado de Rhode Island, Bill Nelson, del estado de la Florida y Christopher Dood, del estado de Connecticut, arribaron a Venezuela y sostuvieron una reunión con el presidente Chávez, en el marco de una gira por varios países latinoamericanos. En esa ocasión, Dood exclamó que “quería ver a Washington orientándose hacia una nueva página en sus relaciones con el gobierno venezolano” (*El Universal*, 12-1-05, p. 1/2).

El 23 de febrero de 2005, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Alí Rodríguez Araque participó en una sesión especial de la OEA, a fin de defender la propuesta de democracia participativa, el proyecto de la Carta Social de la Organización, y denunciar las reiteradas observaciones negativas de funcionarios del gobierno de EEUU en contra de Venezuela. Así, Rodríguez Araque puntualizó en su discurso que “se han dado reiteradas acusaciones en contra del gobierno del presidente Hugo Chávez Frías”, refiriéndose también a temas como al que hacía alusión, que Venezuela se constituía en una fuerza negativa y desestabilizadora en la región, que la OEA debía aislar a Venezuela, que el gobierno de Chávez estaba vinculado a organizaciones terroristas, y que en el país se violaba la libertad de expresión. Frente a ello, Rodríguez Araque afirmó: “por esa razón,

nosotros no podemos descartar la información de nuestros servicios de inteligencia relacionados con la posibilidad de la liquidación física de nuestro presidente" (MRE de Venezuela, 2005).

El 5 de abril de 2005, Condoleezza Rice expresó, en el marco de una nueva ola de choques verbales entre los dos gobiernos que "lo que no se desea es que la gente que sea democráticamente elegida gobierne luego antidemocráticamente" (*El Nacional*, 6-4-05, p. A-14). Ese mismo día, William Brownfield dijo que "Estados Unidos mantiene relaciones muy buenas con el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela desde hace casi 200 años, una relación larga y profunda, y mi misión es la de trabajar por una relación de menor odio y más entendimiento, de menos enfrentamiento y más acercamientos" (*El Nacional*, 6-4-05, p. A-14).

Dentro de este contexto, en lo que se percibe como altos y bajos, en las declaraciones verbales entre funcionarios de ambos gobiernos, el vicepresidente Rangel declaró que era necesaria entre ambos gobiernos "Una relación normal, civilizada, democrática y de respeto mutuo y pacífico". En el mismo tono declaraba el embajador Brownfield: "No hay confrontación por parte del gobierno que represento y el embajador debe tener una idea mejor que cualquier otra persona sobre la existencia de un supuesto plan" (en contra de Venezuela). Brownfield lamentó el retorno de comentarios públicos negativos, aunque aceptaba "que hay diferencias profundas entre los dos gobiernos" (*El Nacional*, 15-4-05, p. A/12).

El 1º de mayo de 2005, el vicepresidente Rangel planteó que si el problema entre ambos gobiernos era político, "lo normal es que discutamos las diferencias mediante el diálogo, de la misma forma como Washington discute sus diferencias con Francia, Rusia o Japón". Rangel refrendó la reciente posición conciliatoria del gobierno venezolano hacia EEUU. Sin embargo, se refirió a la persistencia de una política agresiva por parte de EEUU hacia Venezuela, y dijo que el país había logrado neutralizarla con "el amplio respaldo que el presidente Hugo Chávez tiene en la región" (*El Universal*, 2-5-05, p. 1/8).

El gobierno venezolano saludó el 5 de mayo de 2005 la intención de EEUU de mantener relaciones constructivas bilaterales con Venezuela. El canciller Rodríguez Araque calificó como "un rayo de sensatez y racionalidad" la posición asumida por el gobierno estadounidense. Consideró que es un punto de partida y tendría una respuesta positiva por parte de la nación venezolana de ser claramente definida por

la vocería de EEUU. El canciller venezolano reiteró que no le interesa “tener pleitos con nadie ni, por supuesto, con Estados Unidos, que solamente en petróleo significa un mercado importantísimo para Venezuela”. Más adelante manifestó que “Venezuela no sólo es un importantísimo proveedor de petróleo, sino uno de los pocos en el mundo que puede aumentar su producción para satisfacer la creciente demanda del mercado de EEUU” (*El Universal*, 5-5-05, p. 1/5).

El 22 de mayo de 2005, el gobierno de Washington anunció que intentaría aprobar un comité dentro de la OEA que se encargara de velar por la calidad de las instituciones y el ejercicio de poder en América Latina, al tiempo que el presidente Bush planteó, poco antes, el 19 de mayo de 2005, crear un cuerpo especial para apuntalar las democracias en el exterior, un Cuerpo de Respuestas Civiles, dentro de la tesis de la reconstrucción posterior a conflictos en Estados débiles. Estas iniciativas norteamericanas fueron rechazadas por el gobierno del presidente Chávez, apuntando que eran medidas para aislar al gobierno venezolano y para intervenir en países progresistas, respectivamente (*El Nacional*, 23-5-05, p. A/1; *El País*, 20-5-05, p. 12; Eizenstat *et al.*, 2005).

El 31 de mayo de 2005, María Corina Machado, principal dirigente de Súmate, organización venezolana de oposición no gubernamental de observación electoral, se reunió por unos minutos con el presidente Bush, en lo que se conoce como una “*photo opportunity*”, la cual originó una controversia interna en Venezuela. Para algunos analistas, el gobierno norteamericano cometió un error en esa ocasión, al apoyar a Machado, ya que se confirmaría de esta forma la existencia de un “proyecto Washington”, destinado a promover a la organización que ella representa, lo que sería manejado políticamente por el gobierno de Chávez y el oficialismo. Para otros, la visita de la señora Machado le abrió las puertas a la oposición venezolana en el mundo democrático.

Luego de la reunión, María Corina Machado dijo en el patio frontal de la Casa Blanca que “En el último mes hemos visto una tendencia muy preocupante del Gobierno a violar los principios de la democracia, como el Estado de Derecho, derechos humanos básicos y hasta la posibilidad de tener elecciones libres”. De la misma manera planteó que las otras ramas gubernamentales en Venezuela “están totalmente controladas por el Ejecutivo... Estamos muy preocupados por la tendencia por parte del gobierno a violar los principios de la democracia y la ley” (*El Universal*, 1-6-05, p. 1/4).

El canciller Rodríguez Araque dijo, a raíz de la entrevista entre Machado y el presidente Bush, que “mientras la representante de Súmate fue atendida por el gobernante de EEUU, George W. Bush, aún el embajador de Venezuela en Washington no ha sido recibido en el Departamento de Estado, por lo que preguntó: ¿es así cómo pueden establecerse relaciones bilaterales constructivas?”. Y añadió que eso formaba parte de una política de presión sobre el gobierno del presidente Chávez, aclarando que “El gobierno norteamericano ha tratado insistentemente de introducir modificaciones en la Carta Democrática Interamericana, y todo tiene un objetivo muy preciso e imposible de ocultar: Venezuela” (*El Universal*, 2-6-05, p. 1/4).

El gobierno norteamericano por su parte destacó, a través del vocero del Departamento de Estado, Scott McClellan, que “Al Presidente le dio gusto reunirse con ella (la señora Machado). El presidente Bush quería escuchar sus preocupaciones y escuchar sobre lo que está sucediendo en Venezuela, y el encuentro fue una oportunidad para ello” (*El Universal*, 2-6-05, p. 1/4). Frente a las evaluaciones recibidas por su reunión con el presidente Bush, Machado dijo que “el Gobierno ha evidenciado su intolerancia a las personas que piensan distinto en Venezuela. Las críticas en contra de mi persona muestran a la comunidad internacional que existe un gobierno que no acepta la disidencia” (*El Universal*, 3-6-05, p. 1/2).

En el marco de lo que se percibió como un peldaño más en el deterioro de las relaciones entre Venezuela y EEUU, el canciller Rodríguez Araque aclaró que no se hablaba de ruptura con Washington, en cuanto a que, “Revisar y romper son dos cosas distintas (...) no hay relaciones interrumpidas sino que de hecho las interrumpen” (*Últimas Noticias*, 4-5-05, p. 12). Con relación a este punto, el embajador Brownfield ripostó que debemos “aceptar que tenemos áreas de diferencia en las que no coincidimos, por lo que se hace necesario aceptar que posiblemente no vayamos a coincidir totalmente en el futuro” (*El Nacional*, 4-5-05, p. A/6).

El presidente Chávez dijo en su programa de radio y televisión semanal, “Aló Presidente”, a propósito de la XXXV Asamblea Anual de la OEA, realizada en Fort Lauderdale, EEUU, que “Atrás quedaron los días en los cuales la OEA era un instrumento de Washington. La América Latina de hoy no es la de antes, que se estaba arrodillando a los mandatos de la Casa Blanca. De una vez lo podemos decir: el presidente George Bush fracasó en sus planes de monitorear nuestra

democracia" (*El Nacional*, 6-6-05, p. A/2). De igual modo, en esa reunión, Rice, la secretaria de Estado del gobierno del presidente Bush, reiteró la tesis de que "juntos debemos insistir en que los líderes que fueron elegidos democráticamente deben gobernar democráticamente, y los que no cumplan con este compromiso deben responder ante la OEA" (*El Nacional*, 6-6-05, p. A/10).

En esa misma dirección, Rodríguez Araque planteó en su discurso ante los delegados a la XXXV Asamblea Anual de la OEA (reunión en la cual Condoleezza Rice también dialogó por unos minutos con María Corina Machado, quien formó parte de una delegación de 10 representantes de ONGs que charlaron con la secretaria de Estado), que "La OEA no está facultada para hacer evaluaciones sobre el estado de la democracia en los diferentes países. Esta es una materia que compete de manera exclusiva e intransferible al único legitimado como soberano para evaluar y decidir sobre su sistema político y sobre su desempeño: esto es, el pueblo de cada uno de nuestros países" (*El Nacional*, 7-6-05, p. A/11).

Al término de la XXXV Asamblea Anual de la OEA, se aprobó la Declaración de Florida, en donde no se incluyó la propuesta del gobierno de EEUU de propiciar un mecanismo de supervisión de las democracias y de prevención de crisis. La propuesta del gobierno del presidente Bush encontró una fuerte oposición de la mayoría de los gobiernos del hemisferio, por considerar que ella era un intento de injerencia e intervención en los asuntos internos de los países miembros de la OEA.

Sin embargo se introdujo en la Declaración una propuesta menos controversial: que el secretario general de la Organización proponga, cuando sea necesario y previa consulta del Consejo Permanente de la OEA, iniciativas de cooperación para acudir en la ayuda de los gobiernos que experimenten crisis políticas, pero sólo a invitación de éstos (*El Universal*, 8-6-05, p. 1-4).

En ese contexto, y ante la crisis que experimentaba Bolivia por la renuncia del presidente de ese país, Carlos Mesa, el subsecretario de Estado para América Latina del Departamento de Estado norteamericano, Roger Noriega, dijo que "El rol del presidente Chávez en los acontecimientos de Bolivia es obvio para todo el mundo, porque ha expresado su papel de trabajar con varios sectores... El papel de Chávez es evidente y habla por sí mismo". El canciller Rodríguez Araque le contestó a Noriega, afirmando que si el funcionario estado-

unidense contaba con “algún elemento que pueda demostrar que nosotros tenemos una participación que no sea para tratar de ayudar y a solicitud, que lo planteo y lo discutimos”. A continuación Noriega reiteró que “ese tipo de señalamientos lo que hace es alejar más cualquier posibilidad de mantener una buena relación con Estados Unidos” (*El Universal*, 8-6-05, p. 1/5).

El 8 de julio de 2005, el Departamento de Estado expresó su “descontento con la decisión del día anterior por parte de un juez venezolano, de emitir cargos en contra de cuatro dirigentes de Súmate por recibir un financiamiento del National Endowment for Democracy”, y reiteró su concepto agregando que “esas acciones judiciales eran una prueba más de la campaña del gobierno venezolano diseñada para intimidar a miembros de la sociedad civil por ejercer sus derechos democráticos” (US Department of State, 8-7-05).

El 27 de julio de 2005, en el marco de la reactivación de las críticas del gobierno de Bush a Venezuela, el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos del gobierno de Bush, Nicholas Burns expresó en un claro distanciamiento con el gobierno de Chávez que “Venezuela no es para Estados Unidos el centro del universo”, agregando que “nuestra concentración de esfuerzos en Latinoamérica es con nuestros amigos. Es una relación con Estados demócratas...”. De igual forma, Roger Noriega, subsecretario de Estado para América Latina afirmó durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes que “Durante el último año, nuestro acceso a altos funcionarios venezolanos fue limitado, y esta falta de acceso está teniendo el efecto de enfriar también nuestros contactos a niveles de trabajo con el gobierno de Caracas” (*El Nacional*, 28-7-05, p. A/12).

El viernes 5 de agosto de 2005, el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano emitió un comunicado en donde se le exigían pruebas al gobierno de EEUU sobre su supuesta intervención en otros países, al responderle a una serie de declaraciones emitidas por funcionarios del gobierno de Bush. Así, se expresa en el comunicado que “el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela demanda del gobierno de Estados Unidos presentar las pruebas que dice tener el subsecretario para Asuntos Legislativos, Matthew Reynolds, cuando señala que halló crecientes pruebas de que Venezuela está utilizando activamente la riqueza de su petróleo para desestabilizar a sus vecinos democráticos...”. De igual forma, en el comunicado se dice

que “El Ejecutivo venezolano le sugiere a la Administración Bush que interprete la realidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños, ya que tal vez así pueda comprender por qué cada vez es mayor el acercamiento entre las naciones de la región, y cada vez más creciente la hermandad y solidaridad con Venezuela” (*El Universal*, 6-8-05, p. 1-8).

El 19 de agosto de 2005 se efectuó una importante reunión entre el presidente Chávez, el senador del Congreso norteamericano, Arlen Specter y el embajador del gobierno de Bush en Venezuela, William Brownfield. En dicho encuentro, se acordó realizar un esfuerzo para lograr la normalización de las relaciones entre los dos países. Según el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Rodríguez Araque, “se han acordado nuevas reuniones y aspiramos que, sobre la base del respeto mutuo, podamos establecer un clima normal en las relaciones bilaterales para avanzar hacia nuevos ámbitos en una interrelación que puede ser altamente positiva” (*El Universal*, 20-8-05, p. 1/5). De igual modo, en una carta dirigida al secretario de Defensa del gobierno de Bush, Donald H. Rumsfeld, el senador Specter le pidió que bajara su retórica en contra del presidente Chávez, a fin de obtener el apoyo del gobierno de Venezuela en el combate al narcotráfico (*El Universal*, 20-8-05, p. 1/5).

Sin embargo, ese clima de distensión se vio empañado por las declaraciones del reverendo evangélico norteamericano Pat Robertson, quien en un programa televisivo manifestó que el gobierno norteamericano tenía que pasearse por la posibilidad de asesinar al presidente Chávez. Específicamente Robertson dijo: “yo no sé acerca de la doctrina de asesinato, pero yo pienso que si él piensa que nosotros estamos tratando de asesinarlo, debemos entonces realmente seguir adelante y hacerlo. Nosotros tenemos las condiciones para sacarlo y pienso que ha llegado el momento de ejercer tal habilidad”. El comentario de Robertson produjo una reacción en cadena en su contra, tanto en EEUU como en Venezuela, y el presidente Chávez no perdió la oportunidad para acusar al presidente Bush de cualquier cosa que le pasara personalmente, e invitó al reverendo Jesse Jackson a visitar el país, declarando que había dos Estados Unidos, el que representaba Robertson y el que representaba Jackson (*The Daily Journal*, 27-8-05, p. 16).

Chávez utilizó la plataforma de las Naciones Unidas para proyectar su figura y su política exterior, en lo que se ha considerado como un paso adelante en su autoproyección como líder mundial. El 15 de septiembre de 2005, el presidente Chávez dio un discurso en la

Sexagésima Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante el cual reiteró sus críticas al gobierno de EEUU y enfatizó su molestia por la conducción de la propia Organización.

En dicho discurso, Chávez propuso la creación de una ciudad internacional que esté situada al sur del mundo, para que se mude la sede de la ONU ya que ésta debería salir “de Estados Unidos si es que continúan las violaciones a la legalidad internacional por parte de ese país” (Discurso del presidente Chávez ante la Asamblea Anual de las Naciones Unidas reproducido en *El Universal*, 16-9-05, p. 3/10).

Chávez destacó también en ese discurso los resultados de la labor de su gobierno, lo que según su óptica se hacía “en medio de agresiones internas y externas, que incluyeron un golpe militar y un golpe petrolero facturados en Washington, pese a las conspiraciones, a las calumnias del poder mediático, y la permanente amenaza del imperio y sus aliados que hasta estimula el magnicidio. El único país donde una persona se puede dar el lujo de pedir el magnicidio de un Jefe de Estado, es Estados Unidos, como ocurrió con un reverendo llamado Pat Robertson, muy amigo de la Casa Blanca: pidió mi asesinato y anda libre. ¡Eso es terrorismo internacional!” (Discurso del presidente Chávez..., cit.).

Las referencias del presidente Chávez en el discurso mencionado sobre el gobierno de EEUU, y las críticas del mismo a la conducta de la Casa Blanca frente a las secuelas del huracán Katrina, agrietaron aún más las relaciones bilaterales (Discurso del presidente Chávez..., cit.).

La IV Cumbre de las Américas se inauguró el 4 de noviembre de 2005 en medio de tensiones por los desacuerdos en torno al ALCA, acompañado esto con el desarrollo de protestas anti-ALCA y una marcha anti-Bush que recorrió parte de Argentina y que culminó con un acto de masas organizado por “La II Cumbre de los Pueblos” en la ciudad de Mar del Plata. Fueron tres las posiciones que se presentaron en la mesa de negociaciones: la tesis venezolana de que al ALCA se le debía dar un acta de defunción y avanzar hacia el ALBA (véase más adelante); la posición norteamericana respaldada por la mayoría de los países americanos de continuar las negociaciones y la tesis de los países miembros del Mercosur, tendiente a rechazar el ALCA hasta que EEUU rebaje y elimine sus barreras arancelarias y sus políticas proteccionistas.

La reunión fue convocada bajo el tema del combate a la pobreza y la generación de empleo, pero sobre lo que menos se negoció fue lo

referido a esos aspectos. En realidad, la Cumbre se convirtió en un escenario de confrontación entre el presidente Chávez y el presidente Bush, con relación a la postura venezolana de evitar que el tema del ALCA se incorporara en la agenda final del evento.

Durante las deliberaciones, 29 jefes de Estado y de Gobierno manifestaron su propósito de seguir negociando el ALCA, aunque 5 de ellos dijeron que no lo harían: los mandatarios de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. A pesar de estas discrepancias, los 34 países votaron sin reservas la Declaración Final y se logró un consenso en torno a aceptar las posiciones iniciales de los países que no encuentran ningún obstáculo en continuar las negociaciones dentro del ALCA; los que señalaban que no están dadas las condiciones para seguir con dichas negociaciones y la tesis del presidente de Colombia de promover una reunión de funcionarios técnicos a fin de evaluar la situación general del Acuerdo (*El Nacional*, 5, 6 y 7-11-05, pp. A/8 y A/12).

Chávez no logró su cometido dentro de las negociaciones formales, pero sí se convirtió en la *vedette* del evento en la medida en que acaparó la atención internacional por su discurso radical, por su asistencia al acto organizado por la III Cumbre Social en donde se dieron cita diversos líderes de la izquierda americana y por insistir en su proyecto del ALBA. Sin embargo, el presidente Bush no le prestó la más mínima atención al presidente Chávez, prácticamente lo ignoró durante el evento, y una mayoría de 29 gobiernos votaron a favor de continuar con las negociaciones. No obstante, Chávez dijo que la Cumbre se había constituido en una victoria moral para los países del Sur y que Bush había recibido un nocaute fulminante en la reunión. Por el contrario, el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos del gobierno de Bush, Thomas Shannon, dijo que el ALCA “había resucitado como Lázaro” y el propio presidente Bush, en una visita posterior a la Cumbre en Brasil, dijo que “Asegurar la justicia social en las Américas requiere elegir entre dos visiones rivales”, en una clara alusión a las propuestas venezolanas (*El Nacional*, 5, 6 y 7-11-05, pp. A/8 y A/12).

En el marco de la visita del presidente Bush a Argentina, Brasil y Panamá quedó claro que EEUU y Venezuela representan dos opciones políticas que el propio Bush definió de la siguiente manera: “Una de esas visiones ofrece esperanza. Está fundamentada en gobiernos representativos, integración en la comunidad mundial y fe en el poder transformador de la libertad en las vidas individuales (...) La otra busca revertir los logros democráticos de las últimas dos décadas

apelando al miedo, al enfrentamiento ente vecinos y culpar a otros por sus propios fracasos en dar prosperidad a sus pueblos" (*El Nacional*, 7-11-05, p. A/12).

El 17 de noviembre de 2005, el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Thomas Shannon, se refirió a Venezuela en el contexto de una comparecencia suya ante el Subcomité de Asuntos Hemisféricos de la Cámara de Representantes del Congreso de EEUU, y dijo que el presidente Chávez "está subvirtiendo las instituciones democráticas, usándolas a fin de limitar los derechos de aquellos que no están de acuerdo con esa conducta gubernamental, restringiendo poco a poco la libertad económica y rechazando las oportunidades que brinda la globalización". Shannon advirtió, a su vez, sobre "la amenaza a la estabilidad regional que significa la compra de armas por el gobierno de Venezuela y su apoyo a movimientos políticos radicales" (*The Daily Journal*, 18-11-05, p. 1). Tales advertencias fueron respondidas por Chávez, quien manifestó que "El pueblo de los Estados Unidos es gobernado por un asesino, un genocida y un loco" (*The Daily Journal*, 19-11-05, p. 2). El embajador Brownfield exclamó: "Nosotros tenemos áreas en las cuales debemos colaborar, como lo son el comercio, drogas ilícitas, el crimen internacional y el terrorismo. Su trabajo, según el embajador, está dedicado a manejar materias más importantes entre los dos países y no asuntos menores" (*The Daily Journal*, 19-11-05, p. 2). El canciller venezolano Alí Rodríguez manifestó estar sorprendido por las declaraciones de Shannon y reiteró que a los miembros del gobierno de Chávez "no nos encontrarán inermes, si se comete la 'locura' de atacar a Venezuela" (*El Universal*, 19-11-05, p. 1/6).

Sobre cuestiones militares y el tema del terrorismo

A pesar del disgusto de Washington por la posición de Venezuela en contra de la operación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Kosovo, las relaciones militares ente los dos países no tuvieron un mayor contratiempo en 1999. Sin embargo, en el mes de diciembre de ese año, Venezuela experimentó la llamada "Tragedia del Litoral Central" o "Tragedia del estado Vargas". La franja terrestre que está frente al mar y cercana a Caracas, separada de ésta por un sistema de montañas, sufrió a causa de torrenciales lluvias y un mal tiempo desarrollado durante varias semanas una mezcla de inun-

daciones y derrumbes que desoló más de 25 kilómetros de costa, y dejó más de 30.000 muertos y más de 200.000 damnificados.

En estas circunstancias, los miembros de la comunidad internacional, entre ellos, el gobierno y la sociedad civil norteamericana, prestaron la ayuda material y de recursos humanos necesaria en estos casos. El secretario de la Defensa de EEUU, William Cohen, firmó una orden para el despliegue de dos buques militares con ayuda técnica, maquinaria, 46 oficiales y 787 individuos de tropa, a fin de colaborar en la reconstrucción vial de ese litoral. No obstante, el gobierno de Venezuela consideró que este tipo de ayuda, sobre todo el posible despliegue de militares norteamericanos que venían en una misión de paz, no era necesaria y que se prestaba a rumores relacionados con una posible acción desestabilizadora. El gobierno de EEUU desmintió este propósito y se ordenó el regreso de la misión antes de que llegara a Venezuela, originándose un disgusto entre los dos países (*El Universal*, 13-9-00, pp. 1/2 y 1/8).

El canciller venezolano para ese momento, José Vicente Rangel, visitó la ciudad de Washington en abril del año 2000, a fin de tomar parte en una reunión sobre la democracia participativa en el seno de la OEA. En dicha ocasión, Rangel se entrevistó con funcionarios del Departamento de Estado, entre ellos, Arturo Valenzuela, asesor para Asuntos de América Latina del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y el subsecretario de Estado, Thomas Pickering; con integrantes de la ONG Human Rights Watch y varios representantes norteamericanos, quienes formaron un grupo de amigos de Venezuela en el Congreso de EEUU. El canciller Rangel reiteró la posición de no permitir los vuelos de naves norteamericanas sobre el espacio aéreo venezolano, al tiempo que insistió en que las relaciones de Venezuela con EEUU no padecían de “fiebre ni de recalentamiento” (*El Nacional*, 11-4-00, p. A/2).

Durante el mes de julio de 2000, surgió otra polémica entre Venezuela y EEUU. Ante la eventualidad de que el gobierno de Guyana otorgara una concesión internacional a una empresa norteamericana, la “Beal Industries”, en territorio reclamado por Venezuela (el Territorio Esequibo), el gobierno venezolano le pidió explicaciones a Washington. El embajador norteamericano John Maisto declaró que el acto entre la Beal Industries y el gobierno de Guyana era de naturaleza privada. Sin embargo, el gobierno venezolano reiteró su disgusto por el otorgamiento de esa concesión en una zona en disputa,

en especial el título 10 del contrato, que se refiere a que las instalaciones estarían custodiadas por efectivos militares norteamericanos y que llevaría a una cesión de soberanía precisamente en un territorio, que si bien se encuentra bajo la soberanía de Guyana, está siendo reclamado por Venezuela (*El Nacional*, 21-7-00, p. A/3).

En este contexto, Rangel manifestó en un artículo de prensa que “sin duda, ... para naciones como Estados Unidos y Venezuela, con una tradición de excelentes relaciones, se abriría una peligrosa brecha –inconveniente para ambas– a la luz de un contrato como el suscrito entre la Beal y Guyana para instalar la base de cohetes en el Esequibo” (*El Nacional*, 27-7-00, p. A/5).

En noviembre del año 2000 se conoció en la opinión pública la existencia de un informe-ponencia, conocido como “El Comportamiento Militar Latinoamericano y la Seguridad Hemisférica”, que el Ministerio de la Defensa de Venezuela había repartido a varios gobiernos de la región, en el marco de la Cumbre de Ejércitos Latinoamericanos, realizada en la ciudad brasileña de Manaus en octubre de 2000, en donde se justificaba la idea del presidente Chávez de impulsar una Confederación de Ejércitos Latinoamericanos sin la participación de EEUU. El documento fue llevado a la IV Cumbre de Ministros de la Defensa hemisféricos y en él se dice que desde 1823, a partir de la Doctrina Monroe, “es posible identificar en América Latina el predominio del poder militar norteamericano por la vía de una política exterior imperialista, de expansión territorial, de conquista militar y de construcción de una comunidad americana bajo su óptica”. Al mismo tiempo se expresa en el documento que “América Latina está obligada a definir una nueva concepción de seguridad hemisférica, y dentro de ella los mecanismos regionales necesarios para facilitar una cooperación que no persiga únicamente satisfacer intereses coyunturales, sino que interprete a los Estados-Nación como unidades con igualdad política internacional dentro de la región”. En el documento también se habla de la necesidad de reconocer las nuevas dimensiones no militares de la seguridad y el papel cívico-militar que deben jugar las Fuerzas Armadas de la región: “En referencia específica al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, se propone su eliminación” (*El Nacional*, 11-11-00, p. A/2).

Otro punto de esta controversia fue el papel de los militares en Venezuela. Esto se refiere a la visión en medios castrenses venezolanos sobre el papel estratégico de EEUU en América Latina. Por una

parte, se dice en el documento que EEUU cree que “su seguridad será mayor cuanto más extendida y dominante sea su presencia en el ambiente latinoamericano, acompañando tal creencia con la búsqueda incesante de una transculturización y una imposición económica para la explotación y producción de materias primas de su vital interés, para la obtención de mano de obra barata o para la exportación de industrias altamente contaminantes del ecosistema” (*El Nacional*, 11-11-00, p. A/2).

En otro documento, esta vez emanado de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior y Justicia de Venezuela, la Disip (policía política venezolana), se expresa que “Desde hace algún tiempo, EEUU abandonó su cautela frente a los procesos políticos latinoamericanos –el denominado *Wait and See*– para comenzar a incidir en ellos de manera directa, siendo Colombia el nudo fundamental de los inconvenientes más importantes”. Al mismo tiempo se dice que “los Estados Unidos van a cometer otro error en Colombia repitiendo el esquema de lucha directa contra el narcotráfico”. A esto hay que añadirle el comentario del entonces director de la Disip, Eliécer Otaiza, en un artículo publicado en la prensa nacional, en donde se refiere a las elecciones norteamericanas, criticando el sistema de los colegios electorales de ese país, y planteó que “el pueblo venezolano ejerce una democracia participativa, lucha por volcarse al humanismo, el soberano hace un esfuerzo por apearse a la solidaridad, a la ética y a la responsabilidad. Gringo *come back*: Bienvenido a la revolución bolivariana. *The New York Times*, *The Washington Post* ya están haciendo su trabajo” (*El Nacional*, 11-11-00, p. D/6; *El Universal*, 11-11-00, p. 1/6).

El 5 de diciembre del año 2000, el presidente Chávez se entrevistó con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Pace, estando presentes también la embajadora norteamericana en Venezuela, Donna Hrinak, el canciller José Vicente Rangel, el ministro de la Defensa y el Alto Mando Militar venezolano. Este y otros funcionarios del Departamento de Estado que visitaron Caracas esa semana, insistieron en que EEUU quería colaborar con Venezuela en la lucha contra el narcotráfico, y que el Plan Colombia no era exclusivamente un plan de naturaleza militar (*El Nacional*, 6, 7 y 8-12-00, p. A-2).

El 11 de septiembre de 2001, el gobierno venezolano emitió un comunicado con relación a los actos terroristas en Nueva York y Washington acaecidos ese mismo día, en el cual dijo que expresaba “su más enérgica condena a estos atentados terroristas”, y que deseaba

manifiestar “al Gobierno de los Estados Unidos de América y al pueblo estadounidense su profunda solidaridad en los actuales momentos en que ese país se ha visto afectado por la criminal acción terrorista que ha cobrado la pérdida de vidas humanas inocentes y cuantiosos daños materiales” (MRE de Venezuela, 2001, p. 883).

Las reservas norteamericanas sobre el gobierno de Venezuela y el presidente Chávez volvieron a estar en el tapete, en el momento en que el gobierno de Bush tuvo una actitud ambivalente con respecto al golpe de Estado que llevó, por breve tiempo, a sacar del poder a Chávez y a colocar en la Presidencia de la República tan sólo por unas horas al empresario Pedro Carmona, durante el mes de abril de 2002. El gobierno del presidente Bush, si bien no apoyó directamente la salida de Chávez del poder, al menos aceptó que había habido un cambio de presidente en Venezuela. De paso, era conocido que varios dirigentes empresariales, sindicales y de partidos políticos venezolanos habían visitado Washington semanas antes de los sucesos de abril.

Al reinstalarse Chávez en el Gobierno, al cabo de casi 40 horas, la conducta del gobierno norteamericano estuvo bajo la lupa de periodistas y analistas tanto en EEUU como en Venezuela, ya que hubo quienes de inmediato trataron de conectar la actitud de Washington con un supuesto apoyo a los sectores que se alzaron en contra del presidente venezolano, dado el débil respaldo ofrecido por Caracas ante los sucesos del 11 de septiembre de 2001, y las críticas de Venezuela a la invasión norteamericana a Afganistán. Se debe recordar la reacción del gobierno norteamericano de llamar a su país a la embajadora en Caracas por las declaraciones de Chávez sobre la guerra antiterrorista en Afganistán el 3 de noviembre de 2001. El presidente Chávez en esa ocasión mostró fotos de niños afganos muertos por los bombardeos de EEUU en su lucha contra el terrorismo y pidió el cese de la guerra, que según él había cobrado la vida a civiles inocentes, y la búsqueda de una solución pacífica (Golinger, 2005).

De acuerdo con la *Background Note* del mes de febrero de 2005, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado del gobierno norteamericano hizo el siguiente análisis de lo que había sucedido:

... en abril de 2002, el país experimentó una alteración temporal del orden constitucional. Cuando un estimado de entre 400.000 y 600.000 personas

participaban en una marcha en el centro de Caracas demandando la renuncia del Presidente Chávez, se dio un tiroteo, resultando 18 muertos y más de 100 heridos en ambos lados. Un grupo de oficiales militares tomó al presidente Chávez bajo custodia y el líder empresarial Pedro Carmona se juramentó a sí mismo como presidente interino. El 14 de abril, tropas militares leales a Chávez lo devolvieron al poder (US Department of State, 2005, p. 4).

Según el gobierno de Venezuela y diversas publicaciones norteamericanas, la Administración Bush aceptó inmediatamente al gobierno de Carmona, como se establece en un comunicado fechado el 12 de abril de 2002, en donde se culpa a Chávez por su caída del poder. De la misma forma, según estas fuentes, diversos líderes de la oposición venezolana habían estado en Washington manteniendo contactos con funcionarios norteamericanos y analistas de varios *think tanks* establecidos en la capital de EEUU (Youngers, 2003).

Ahora bien, es cierto que la mayoría de los funcionarios del gobierno de Bush apoyaron el retiro momentáneo del presidente venezolano. Pero al no darse su renuncia, cuando sectores leales a Chávez retoman el poder, los sectores antichavistas se dividieron, se dio un apoyo mayoritario popular para el regreso del primer mandatario y se aplicó la Carta Democrática de la OEA para relegitimarlo. Estados Unidos apoya la resolución de la OEA del sábado 13 de abril de 2002, que condenaba la alteración del orden constitucional en Venezuela y el golpe de Estado (según la óptica del gobierno del presidente Chávez) del 11 de abril de 2002 (Youngers, 2003).

En este contexto, se pueden observar los cambios en la posición norteamericana de acuerdo con declaraciones sucesivas de sus funcionarios. El gobierno estadounidense, a través del portavoz de la Casa Blanca Ari Fisher, en una rueda de prensa desarrollada el 12 de abril de 2002, puntualizó:

Permítanme compartir con ustedes el pensamiento de la Administración acerca de lo que está pasando en Venezuela. Se tiene una situación fluida. Pero los eventos en Venezuela resultaron en un cambio en el gobierno y la asunción de una autoridad transitoria hasta que se puedan realizar unas nuevas elecciones (...) Los detalles están no claros. Nosotros conocemos que la acción tomada por el gobierno de Chávez provocó esta crisis. De acuerdo a la mejor información que tenemos el gobierno de Chávez suprimió unas demostraciones pacíficas. Los partidarios del gobierno, con base en órdenes del gobierno de Chávez dispararon sobre

manifestantes desarmados que protestaban pacíficamente, resultando 10 muertos y cien heridos. Los militares y la policía venezolanos se negaron a disparar en contra de los manifestantes pacíficos y se negaron a apoyar el papel del gobierno en esas violaciones de los derechos humanos. El gobierno también trató de prevenir las noticias independientes de los medios al reportar esos acontecimientos (TheWhite House, 4-2002).

Asimismo, el 14 de abril de 2002, día del regreso de Chávez al poder, Fisher dijo en un comunicado que “El pueblo de Venezuela le ha enviado un claro mensaje al presidente Chávez sobre que ellos quieren democracia y reformas. La administración de Chávez tiene la oportunidad de responder a este mensaje corrigiendo su curso y gobernando de una manera totalmente democrática” (The White House, 4-2002).

De igual forma, Fisher manifestó que: “Nosotros celebramos y apoyamos la decisión de la Organización de los Estados Americanos de enviar inmediatamente una misión encabezada por el Secretario General, César Gaviria, a Venezuela para apoyar el restablecimiento de la democracia, con garantías para los ciudadanos y respeto por las libertades fundamentales, dentro del marco de la Carta Democrática Interamericana” (The White House, 4-2002). El 16 de abril de 2002, Fisher dijo que “Los Estados Unidos continuaban diciendo a todos, a la oposición, al presidente interino Carmona, al igual que a aquellas personas leales al presidente Chávez, que los Estados Unidos esperaban que los problemas se resolvieran por una vía democrática” (The White House, 4-2002).

Sin embargo, para Chávez y sus seguidores, EEUU había apoyado a los llamados golpistas, y el Gobierno y el oficialismo se dedicaron desde entonces a tratar de demostrarlo, en medio de una campaña sostenida de acusaciones en contra de la injerencia norteamericana en los asuntos internos de Venezuela, conducta que se mantiene hasta nuestros días.

En una entrevista concedida por el comandante general del Ejército de Venezuela, Raúl Baduel, éste dijo que los días 11 y 12 de abril de 2002 se pudo ver “una evidencia irrefutable y categórica [de] que hubo barcos de guerra y aviones militares en aguas territoriales venezolanas, a 10 millas de la costa en el estado Falcón, cerca del norte de la Península de Paraguaná” (Dieterich, 2004; Golinger, 2005).

Paralelamente, un importante académico norteamericano plantea en un reciente artículo, como

en abril de 2002, un intento de golpe de Estado intentó derrotar al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Algunos alegan que el gobierno norteamericano apoyó tal golpe. La propia administración dice que no fue así. Desafortunadamente, si uno le creyera a la administración, la conclusión final es que el gobierno norteamericano se condujo en ese momento con una profunda ineptitud e incapacidad para comunicar sus visiones pro-democráticas a todo el mundo y sin la oportunidad de combatir impresiones contrarias (Domínguez, 2005).

Desde entonces, el gobierno de Bush estuvo menos comprometido con los sucesos venezolanos. La huelga empresarial-sindical de la oposición en noviembre y diciembre de 2002, y la huelga petrolera de enero-marzo del año 2003, así como la actitud de los oficiales militares que se declararon en desobediencia civil durante esos meses, no provocaron ninguna declaración a favor de la oposición venezolana por parte de Washington.

Es importante señalar la visita a Colombia en agosto de 2003 del general Richard Myers, jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA de EEUU, ocasión en la cual Myers calificó a Colombia como “un aliado recio de Estados Unidos”, y en donde dijo, en una clara alusión al gobierno de Chávez, que “Cualquier vecino que dé asistencia y comodidades a los terroristas está del lado equivocado de la guerra, y vamos a tener que desarrollar inteligencia y trabajar con los gobiernos vecinos para que eso no ocurra” (*El Nacional*, 13-8-03, p. B/5).

El 9 de octubre de 2003, el vicepresidente de la República José Vicente Rangel, opinó que “el gobierno estadounidense es muy imprudente” (*El Universal*, 10-10-03, p. 1/4). El 20 de octubre de 2003, el general James T. Hill, jefe del Comando Sur de las FFAA de EEUU, aseguró que su gobierno no tenía pruebas para demostrar que la guerrilla colombiana obtenía ayuda de Venezuela (*El Universal*, 21-10-03, p. 1/8). Posteriormente, el 30 de octubre de 2003, el enviado especial de la Casa Blanca para los Asuntos del Hemisferio Occidental, Otto Reich, denunció la presencia de miembros de la inteligencia cubana en Venezuela (*El Universal*, 31-10-03, p. 1/2).

El 30 de abril de 2004, la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado dijo en un reporte que Venezuela tenía varias fallas en la lucha contra el terrorismo, y que “los esfuerzos de Venezuela para combatir el terrorismo eran inconsistentes, que las críticas del presidente Chávez a la política antiterrorista norteamericana eran exageradas y que se retractaban del límite de la cooperación que existe

entre especialistas y técnicos de las dos naciones". Esto produjo una reacción de la Embajada de Venezuela en EEUU, la cual emitió una nota de prensa donde se reitera que "no es nuestro punto de vista que el deseo de cooperar con los Estados Unidos, de acuerdo al Departamento de Estado se ha reducido u oscurecido. Por el contrario, estamos abiertos a desarrollar dicha cooperación" (Embajada de Venezuela en los Estados Unidos de América, 2004).

A partir del año 2005 se ha renovado el interés norteamericano por la situación interna venezolana, principalmente en lo relativo al tema de las relaciones cívico-militares. Por otra parte, el gobierno de Venezuela ha profundizado su visión negativa sobre la participación de EEUU en los sucesos de abril de 2002, y con respecto al rol del gobierno del presidente Bush en la actual situación internacional, regional y nacional.

De esta forma, las divergencias en los temas de seguridad y defensa, en la medida en que la agenda energética juega un papel fundamental dentro de los planes estratégicos de Washington, son tan importantes como las divergencias sobre si el mundo es unipolar o multipolar, y si EEUU es imperialista, según la óptica del gobierno de Chávez.

Bajo estos parámetros, se observan notables cambios doctrinarios en el tema de la seguridad venezolana señalados anteriormente, las compras militares a proveedores no tradicionales, la nueva doctrina de seguridad y militar, el manejo de la hipótesis de conflicto con EEUU en relación con la guerra asimétrica, y la guerra de cuarta generación psicológica, lo que da cuenta de un "choque de culturas estratégicas" entre los dos países, en donde el gobierno de Chávez utiliza el tema norteamericano como un instrumento para alcanzar un "poder negativo", con el ejercicio paralelo de rearmar las FFAA y diseñar un plan estratégico que tiene como base preparar a las FFAA y a la población venezolana para enfrentar una hipotética guerra asimétrica con varios escalones de defensa: Fuerza Armada, Reserva, Pueblo y repliegue.

La guerra asimétrica es una estrategia bélica en la cual un contrincante en inferioridad de condiciones se despliega para enfrentar a un enemigo, cuyas fuerzas militares le superen abiertamente, no sólo en lo cuantitativo y convencional, sino también en lo tecnológico. La asimetría supone la aplicación de tácticas no convencionales, como la guerra de guerrillas y el terrorismo. En este marco, el presi-

dente Chávez anunció para el año 2005 ejercicios cívico-militares para guerra asimétrica y unas maniobras conjuntas entre la Fuerza Armada y la población civil.

El 22 de enero de 2005, el vicepresidente Rangel reaccionó a unas declaraciones del coordinador para la lucha contra el terrorismo del Departamento de Estado del gobierno de EEUU, Joseph Cofer, quien dijo que “Venezuela no hacía lo suficiente para atacar al terrorismo”. Rangel le contestó que “la lucha contra el terrorismo debe ser global y debe incluir a todos los países de igual manera. Nosotros le hemos pedido más cooperación a los Estados Unidos a fin de hacer justicia con aquellos que han cometido actos terroristas en Venezuela y que están en los Estados Unidos pidiendo asilo” (Venezuelanalysis.com., 23-1-2004).

Días más tarde, el 8 de febrero de 2005, Rangel calificó de “impertinentes” las declaraciones del secretario de Estado adjunto de EEUU, Roger Noriega, en las cuales mostró preocupación por la compra de armas rusas por parte de Venezuela (*El Universal*, 9-2-05, p. 1/2).

Luego, ante las acusaciones del presidente Chávez de que se preparaba un atentado en contra de él con el beneplácito de Washington, el secretario de Defensa del gobierno de Bush, Donald Rumsfeld, declaró que tales acusaciones “son simplemente ridículas”, al tiempo que expresaba que “Si uno se pregunta cuáles son los países que están ayudando a Colombia uno no pondría a Venezuela en la lista” (*El Nacional*, 7-4-05, p. A/4). Del mismo modo, el subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Roger Noriega, declaró que: “Si Estados Unidos y los vecinos de Venezuela ignoran la cuestionable afinidad del presidente Chávez por los principios democráticos muy pronto pudiéramos ver una Venezuela más pobre, menos libre y sin esperanzas, que busca exportar su fallido modelo a otros países de la región”. Al mismo tiempo, según él, “Chávez ha acumulado antecedentes preocupantes por sus esfuerzos en concentrar localmente el poder, sus sospechosas relaciones con fuerzas desestabilizadoras de la región y sus planes para la compra de armas” (*El Universal*, 16-4-05, p. 1/6).

El 9 de abril de 2005, el ministro de Información del gobierno de Chávez, Andrés Izarra, declaró que “Venezuela no descarta ningún escenario de agresión por el gobierno de Estados Unidos, incluso el militar”. Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Richard Myers, descartó el 19 de abril, en Bogotá,

que existan intenciones de su país para atacar o invadir a Venezuela (*El Universal*, 20-4-05, p. 1/6).

El 11 de abril de 2005, Myers declaró que “Puedo decir con relación a algunas expresiones o comentarios que he visto en la prensa acerca de rumores de que Estados Unidos atacaría o invadiría a Venezuela, que nada está tan lejos de la realidad” (*El Nacional*, 12-4-05, p. A/10).

El 21 de abril de 2005, el vicepresidente Rangel respondió al jefe del Estado Mayor Conjunto: “Vamos a hacerle un reconocimiento al general Myers, un premio Nobel de la Paz”. Previamente, el presidente Chávez dijo el 7 de abril de 2005 que desearía desactivar un conflicto con EEUU, pero advirtió que “tendría que ser dignamente porque no se arrodillará ante nadie” (*El Universal*, 8 y 14-4-05, p. 1/4).

Ante las declaraciones de funcionarios norteamericanos Chávez dijo, en ocasión de la activación del Comando Unificado de la Reserva Militar, que “El imperio norteamericano vino por el petróleo y trató de derrocar a un gobierno democrático, pero se estrelló, y si el Imperio pretende venir de nuevo se estrellaría contra el pueblo y la FAN. De ahí la importancia de la Reserva” (*El Universal*, 14-4-05, p. 1/4).

El 17 de abril de 2005, Chávez comentó que veía al gobierno de EEUU como “Mister Danger” (famoso personaje de la novela venezolana *Doña Bárbara*). Según él, “El modelo fracasado es el modelo del capitalismo, el modelo fracasado es el del neoliberalismo, que ellos han impuesto al mundo muchísimas veces a punta de cañonazos, de invasiones, de bombardeos” (*El Universal*, 18-4-05, p. 1/9). De igual forma, Chávez dijo que el ataque de los funcionarios norteamericanos en contra de Venezuela “es la estrategia imperialista de divide y reinarás (...). El verdadero desestabilizador de este continente siempre ha sido Estados Unidos, generador de violencia y guerra entre nosotros mismos, para pretender, como pretenden continuar, manejándonos como sus colonias, sus patios traseros” (*El Universal*, 19-4-05, p. 1/9).

Un comunicado de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela fechado el 22 de abril de 2005, dio cuenta de que el gobierno del presidente Chávez, a través del Ministerio de la Defensa, había suspendido en forma parcial el intercambio de educación militar que por más de 35 años había tenido con Venezuela. Esto significó que una parte de 90 oficiales venezolanos radicados en EEUU comenzaran a regresar al país, y a su vez cinco oficiales norteamericanos tuvieron

que dejar las instalaciones militares venezolanas. Previamente, en el año 2001, ya se habían retirado los oficiales enlaces de la Misión Militar norteamericana en Venezuela de sus instalaciones en el Fuerte Tiuna, y en mayo de 2004, lo hicieron los enlaces norteamericanos. Desde 1951, EEUU tenía una oficina en la sede capitalina del Fuerte, donde también está el Ministerio de la Defensa. La medida fue considerada por Washington como “abrupta” (*El Universal*, 23-4-05, p. 1/8). Aún permanecen en Venezuela 13 agregados militares norteamericanos y 4 oficiales en labores técnicas, además del personal de seguridad como miembros de la embajada norteamericana en Caracas.

Chávez manifestó en su programa dominical del 24 de abril de 2005, que se había suspendido el programa ya que “los mandan es a calentarles las orejas a los muchachos nuestros” y estaban “hablando mal del presidente de Venezuela” (*El Universal*, 25-4-05, p. 1/12). El análisis que siguió a esta explicación es que, según el Ministerio de la Defensa de Venezuela, los oficiales norteamericanos estaban promoviendo una conducta crítica a Chávez en las aulas y en los pasillos de las escuelas militares. El gobierno de EEUU, a través del portavoz del Departamento de Estado, Adam Ereli, manifestó que “Lamentamos que Venezuela haya decidido dismantelar lo que ha sido una relación fructífera” (*El Universal*, 25-4-05, p. 1/12).

Ese mismo día, el general de división Melvin López Hidalgo, secretario del Consejo de Defensa de la Nación (Codena), dijo que se manejaban varios escenarios en las relaciones entre Venezuela y EEUU, “que van desde el más optimista-normalización, hasta una posible intervención de los *marines* en territorio venezolano, por lo que decidimos activar la Reserva” (*Últimas Noticias*, 2-5-05, p. 9).

El 4 de mayo de 2005 el mismo López Hidalgo, en la oportunidad de comparecer ante la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, exclamó que “Sabemos que aquí el gobierno de los Estados Unidos a través del Plan Colombia lo que trata es de generar un conflicto entre Colombia y Venezuela para poder intervenir. Esto sonará feo, sonará extraño, pero es una realidad” (*El Universal*, 5-5-05, p. 1/5).

El 6 de mayo de 2005, el presidente norteamericano George W. Bush se refirió a la compra por Venezuela de rifles rusos y puntualizó: “Estamos muy preocupados porque esas armas podrían terminar, por ejemplo, en manos de las FARC, una fuerza muy desestabilizadora en Suramérica” (*El Universal*, 7-5-05, p. 1/8). El presidente Chávez

ante tal aseveración ripostó: “Venezuela tiene razones para preocuparse por la presencia de militares norteamericanos en Colombia” (*El Universal*, 7-5-05, p. 1/8).

Dentro del marco de la cumbre de los países de América del Sur y los países árabes promovida por el presidente brasileño Luis Inácio Da Silva, Chávez aprovechó la ocasión para reiterar sus ataques verbales contra EEUU. El presidente de Venezuela, en su alocución ante los participantes de la I Cumbre América del Sur-Países Árabes, realizada en Brasilia en mayo de 2005, acusó a Washington de querer “adueñarse del mundo” y de pretender “obligarnos a punta de cañones a adoptar su modelo”. De igual modo, Chávez reiteró que “Venezuela está amenazada por el imperialismo norteamericano” (*El Universal*, 11-5-05, p. 1/2). En dicha ocasión, Venezuela reconoció diplomáticamente al nuevo gobierno de Irak, junto con los países miembros y asociados del Mercosur, sin dejar de manifestar su rechazo a la invasión norteamericana a esa nación y a la tesis de la guerra preventiva (*El Nacional*, 11-5-05, p. A/10).

Luego de confirmarse la detención del terrorista cubano anticastista Luis Posada Carriles por las autoridades del gobierno de EEUU, el 17 de mayo de 2005 en el estado de Florida, el gobierno del presidente Chávez solicitó formalmente su extradición a Venezuela. Posada Carriles fue condenado a prisión, por estar supuestamente involucrado en los sucesos de la voladura de un avión cubano en pleno vuelo en la ruta Bridgetown (Barbados)-La Habana, en 1976. Posada Carriles fue juzgado y condenado en Venezuela, pero se escapó de una cárcel venezolana en 1985.

En el año 2005, Posada Carriles llegó clandestinamente a territorio norteamericano y pidió asilo político. Ahora, el gobierno de EEUU debía responder a la solicitud de extradición por parte del gobierno venezolano (*El Universal*, 18-5-05, p. 1/8). Con relación a este tema, la Asamblea Nacional de Venezuela había solicitado el 6 de mayo de 2005 que el Congreso estadounidense ratificara su rechazo al terrorismo y su decisión de apoyar la extradición de Posada Carriles, de acuerdo con un documento emitido por el Tribunal Supremo de Justicia en Caracas demandando la extradición de Posada por parte del gobierno norteamericano (*El Universal*, 18-5-05, p. 1/8).

El 20 de mayo de 2005, el embajador de EEUU en Venezuela, William Brownfield, comentó con relación al caso Posada que “Washington trata este caso de acuerdo a nuestras normas internas y nuestras obli-

gaciones internacionales". De paso, Brownfield dijo que rechazaba las vinculaciones de militares norteamericanos con una supuesta conspiración en contra del presidente Chávez y que exigía "respeto para el profesionalismo de las Fuerzas Armadas de EEUU" (*El Universal*, 21-5-05, p. 1/7).

Ese mismo día el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Chávez emitió un comunicado en donde se dijo que:

Como es ya de público conocimiento, el reo de la justicia venezolana Luis Posada Carriles se encuentra en calidad de detenido en manos de las autoridades inmigratorias de los Estados Unidos de Norteamérica, (...) El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reclama el estricto cumplimiento por parte de las autoridades norteamericanas de las obligaciones legales establecidas en las leyes internacionales y, particularmente, del Acuerdo de Extradición vigente; no hay excusa legal o de cualquiera otra naturaleza para el incumplimiento de tales obligaciones (*El Nacional*, 21-5-05, p. A/4).

También el 20 de mayo, Brownfield exclamó que el caso "es, sin ninguna duda, un elemento problemático en la relación bilateral" entre Washington y Caracas. Sin embargo, señaló que "hay muchos más elementos en esa relación y vamos a ver si podemos superar esto y progresar en otros asuntos. Lo importante es reducir las tensiones y para ello hay que tener más comunicación" (*El Nacional*, 21-5-05, p. A/2). Chávez por su parte había manifestado que "Washington no tiene escapatoria: o lo manda a Venezuela o queda ante el mundo como protegiendo al terrorismo internacional", en clara referencia a Posada Carriles (*El Nacional*, 21-5-05, p. A/2).

El 22 de mayo de 2005, el presidente Chávez fijó su posición sobre el caso Posada Carriles, diciendo que "Hay que esperar unos días, pero todo indica que el gobierno de los Estados Unidos no tiene la más mínima intención de extraditar a Posada. Si no lo hicieran en el plazo, vamos a colocar en revisión integral nuestras relaciones con los Estados Unidos". Del mismo modo Chávez consideró que es "difícil mantener relaciones diplomáticas con un país que descaradamente oculte y proteja al terrorismo internacional". Por ello, "Habría que evaluar si valdría la pena tener embajada en los Estados Unidos y si valdría la pena que ellos tuvieran embajada en Venezuela. ¿Embajada para qué? ¿Para aparentar qué? Las cosas son como son" (*El Nacional*, 23-5-05, p. A/2).

De igual modo, Chávez anunció que se podría desarrollar un programa nuclear junto con Irán, en lo que se percibió como un claro enfrentamiento con EEUU. Así, el presidente Chávez dijo, en un abierto desafío al gobierno norteamericano, que Venezuela debe “comenzar a trabajar en el tema nuclear” con fines pacíficos. “Estamos interesados en el tema nuclear. Podemos perfectamente, junto con Brasil, junto con la Argentina, junto con los países de América Latina, adelantar investigaciones en el área nuclear y pedir apoyo a países como Irán” (*El Nacional*, 23-5-05, p. A/2).

Uno de los temas más controversiales que se tienen en la agenda del gobierno de Chávez es el referido a la pretensión de Venezuela de obtener un reactor atómico y los materiales energéticos indispensables para desarrollar un programa de energía atómica en el país.

Venezuela no ha sido considerada un país potencialmente nuclear. Apenas se tiene desde la década de los 50 del siglo pasado un pequeño reactor atómico en el Instituto de Investigaciones Científicas (IVIC), capaz de generar un megavatio de energía nuclear, y que tecnológicamente ha quedado obsoleto, de acuerdo con los estándares actuales. De hecho, este es un pequeño reactor nuclear RV1 que fue inutilizado hace 10 años y que ahora sólo se usa para fines de investigación médica y alimentaria-genérica.

La pretensión de obtener capacidad nuclear es un viejo sueño de la Fuerza Armada venezolana. Desde los años 60 del siglo pasado, se han elaborado planes para la obtención de materiales radioactivos, tecnología nuclear y eventualmente capacidad de fusión. Pero estos temas se han elaborado y discutido en pequeños círculos de especialistas, tanto médicos como oficiales de las FFAA y algunos civiles, que partiendo de una perspectiva estratégica han analizado los pro y los contra del uso de la tecnología nuclear en Venezuela.

Desde la llegada al poder del presidente Chávez, el Gobierno comenzó a gestionar un programa nuclear y elaboró un documento que indicaba el atraso del país en este tema y la necesidad de adelantar un proyecto de desarrollo que tuviera dos objetivos paralelos. Por una parte, la búsqueda de uno o varios socios que pudieran ofrecer a Venezuela la tecnología pertinente para el despliegue de esa iniciativa; y en segundo lugar, la búsqueda de algún país que pudiera suministrar materia prima para este sector.

En ese contexto, la Cancillería venezolana ha adelantado las conversaciones con los gobiernos de Brasil y de Argentina a fin de obtener

a mediano plazo un reactor nuclear, que bajo la tesis de uso pacífico para el uso eléctrico de la actividad petrolera y gasífera, se convierta en un primer paso encaminado a la obtención de energía nuclear para la defensa del país ante un eventual ataque de EEUU.

Los cálculos de los expertos es que Venezuela tardaría unos cinco años en estudiar las posibilidades de este programa, pero ya se observan algunos indicios que conducirían a cumplir con este objetivo. Por una parte, Venezuela ha votado en contra de las resoluciones de la ONU criticando el programa nuclear de Irán y la necesidad que tiene este país de reportar su programa al Consejo de Seguridad de ese organismo. En segundo lugar, la Cancillería venezolana ha sondeado algunos gobiernos latinoamericanos sobre la necesidad de revisar el Tratado de No Proliferación Nuclear firmado por todos los países americanos, inclusive Cuba que lo hizo más tarde, y de denunciar la carrera armamentista nuclear de EEUU en el seno de la misma ONU.

Esto ha venido acompañado de las gestiones para adquirir un reactor nuclear en Argentina de tecnología canadiense tipo Candu, de 700 megavatios, además de instrumentos de tecnología nuclear francesa que no requiere enriquecimiento y sólo usa uranio natural, material que pudiera ser vendido por Níger, que está en conversaciones con Venezuela para establecer relaciones diplomáticas en enero de 2006 (Venezuela le ha donado más de 2 millones de dólares a Níger para combatir la hambruna que sufre ese país).

El gobierno de Bush ha planteado su posición hemisférica que está en contra de cualquier iniciativa latinoamericana de desarrollar un programa de energía nuclear con fines militares y ha reiterado que se opondrá a las iniciativas venezolanas si no es aplicada la tecnología para fines pacíficos (*El Nacional*, 3-11-05, p. A/12).

El 24 de mayo de 2005, el presidente Chávez recibió a los congresistas norteamericanos Bill Delahunt, Gregory Meeks y Dan Burton, integrantes del Grupo Boston de amistad parlamentario Venezuela-EEUU, quienes le manifestaron su preocupación por la tensión diplomática entre los dos países. Al mismo tiempo, 20 parlamentarios norteamericanos apoyaron, a través de una carta enviada al presidente Bush el 17 de mayo de 2005 y reproducida en Caracas, en aviso pagado por el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano, la propuesta del gobierno de Chávez de extraditar a Posada Carriles a Venezuela. Los congresistas argumentaron que “en consideración de

todas las familias afectadas por el terrorismo en los Estados Unidos y alrededor del mundo, no se le garantice asilo a Luis Posada Carriles en los Estados Unidos, y que sea debidamente extraditado a Venezuela donde enfrentará la justicia" (*El Universal*, 25-5-05, p. 4/3).

El 27 de mayo de 2005, se conoció que el Departamento de Estado del gobierno de EEUU había negado, por falta de pruebas, el arresto preventivo de Posada Carriles, lo que ocasionó que la Embajada de Venezuela en Washington replicara diciendo que "según la nota enviada, la no procedencia del arresto en esta oportunidad no impide la solicitud de extradición de este ciudadano de nacionalidad venezolana, de acuerdo con el Tratado de Extradición existente entre los dos países" (*El Nacional*, 28-5-05, p. A/1).

Frente a la opinión de que las relaciones entre los dos países estaban en un punto muerto, el ministro consejero de la Embajada de EEUU en Venezuela, Stephen McFarland, destacó que "Nosotros no tenemos la intención de romper relaciones, quien empezó fue el presidente Hugo Chávez (...) Son ellos los culpables del desgaste o de la caída del nivel de las relaciones. Nosotros quisiéramos recuperar unas relaciones normales de respeto" (*El Nacional*, 28-5-05, p. A/2).

En esa misma dirección se expresó el jefe del Comando Sur de EEUU, John B. Craddock, quien dijo que "sin duda hay tensión, porque los venezolanos están viendo las cosas de una manera distinta a nosotros. En el plano de la cooperación militar, por lo menos, las cosas continúan como antes (...) todavía tengo un grupo de militares en Caracas y los venezolanos tienen como unos 80 aquí, entrenándose o trabajando" (*El Nacional*, 29-5-05, p. A/13).

El 12 de junio de 2005, Chávez volvió a plantear que si el gobierno de EEUU no extraditaba a Posada Carriles, evaluaría la posibilidad de romper relaciones diplomáticas. El presidente Chávez afirmó: "Si Estados Unidos no lo extradita, nosotros pondríamos en revisión integral y severa las relaciones con este gobierno, porque no estamos dispuestos a continuar aceptando atropellos a los derechos humanos" (*El Nacional*, 13-6-05, p. A/2).

El inspector general de la Fuerza Armada y ex secretario del Consejo de Defensa Nacional, el general del Ejército Melvin López Hidalgo manifestó que "A veces hemos llegado a entendimientos y de repente vemos que hay un cambio de actitud. Consideramos que ese cambio es por presión, porque eso es lo que está dispuesto por las autoridades que manejan el Plan Colombia. Es decir, es una voluntad extra-sobe-

rana de Colombia. Es complejo mantener unas relaciones con un país que está recibiendo instrucciones de un país hegemónico, de un imperio, por decirlo más claro" (*El Universal*, 13-9-05, p. 1/4).

En la situación actual, y dentro de los acontecimientos analizados, no hay ningún elemento empírico que demuestre que se haya llegado más allá de este cúmulo de amenazas. Pareciera que todavía Venezuela no constituye una amenaza fundamental para EEUU, mientras no se rompan las relaciones bilaterales, no se deje de enviar el suministro petrolero y no se confisquen las propiedades norteamericanas en Venezuela.

El 2 de noviembre de 2005, el presidente Chávez alertó que si el gobierno norteamericano no le prestaba asistencia técnica para repotenciar la flotilla de los F-16 se vería obligado a pedir ayuda técnica a Cuba y a China. La amenaza de Chávez fue respondida por el embajador de EEUU en Venezuela, William Brownfield, el cual recordó que el contrato de venta de los F-16 obliga a Venezuela a consultar con Washington la transferencia de esos aviones a terceros países (*El Universal*, 3-11-05, p. 1/6).

Derechos humanos

La primera ocasión en que el gobierno del presidente Chávez tuvo un deslinde internacional con EEUU, ocurrió durante la votación en contra que efectuó Venezuela sobre el informe de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, en donde se presentó un reporte negativo relacionado con el estado de los derechos humanos en Cuba, Irán y China.

En febrero del año 2000, el Departamento de Estado publicó el Informe Anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo. Al referirse a Venezuela, el documento expresa que los derechos humanos "siguen siendo pobres" y que "las fuerzas de seguridad continúan cometiendo crímenes extrajudiciales" (*El Nacional*, 26-2-00, p. A/2). A los pocos días, la Cancillería venezolana envió una carta al embajador Maisto, rechazando la evaluación hecha por dicho Departamento con respecto a la situación de los derechos humanos en el país. En dicha carta, firmada por el canciller José Vicente Rangel, se estima que esos señalamientos "responden a evaluaciones unilaterales que el Gobierno de un Estado tenga respecto a las actuaciones de otro", y que el Informe estaba desactualizado y además

“resta importancia a las transformaciones y logros que se han obtenido en el proceso de reforma política que actualmente adelanta el Gobierno nacional” (la carta está reproducida en *El Nacional*, 8-3-00, p. A/2).

El Departamento de Estado además publicó el Informe Anual 2005 sobre tráfico de personas en el mundo, que monitorea casos de explotación sexual, diferentes formas de esclavitud y de violaciones laborales, en el cual se señala que “Venezuela es fuente, destino y territorio de tránsito, de tráfico de mujeres y niños, para propósitos de explotación sexual y trabajos forzados” (*El Universal*, 4-6-05, p. B/15). El gobierno venezolano respondió estas aseveraciones a través de un comunicado de la Embajada de Venezuela en Washington, estimando que la evaluación dada por el Departamento de Estado “era una triste demostración de cómo el gobierno del presidente Bush, ha politizado su trabajo en derechos humanos” (*El Universal*, 4-6-05, p. B/15). Venezuela fue clasificada con el *status Tier 3* en el reporte del Departamento de Estado sobre tráfico de personas. El *status Tier 3* indica falta de esfuerzo para combatir el tráfico de personas (US Department of State, 2005, p. 8).

Combate al narcotráfico

El gobierno de Venezuela dejó claro que no estaba satisfecho con la permanencia de aviones de guerra norteamericanos en las islas vecinas de Curazao y Aruba (en el marco de las Forward Operating Locations, en las Antillas Neerlandesas) y que no temía represalias por negar el paso de los aviones. A juicio del canciller Rangel, “esa es una decisión absolutamente soberana” (*El Nacional*, 18, 21, 22 y 26-5-99, p. A/2).

Cabe mencionar, en primer lugar, que el gobierno de Chávez no aceptó el sobrevuelo de aviones de guerra estadounidenses en el espacio aéreo venezolano (aunque para febrero de 2000 se habían autorizado 3 de 37 peticiones norteamericanas y se hablaba de una pronta solución al problema); igualmente existía una crítica por parte de Venezuela a la puesta en práctica del patrullaje marítimo conjunto entre el Reino de los Países Bajos y EEUU en áreas limítrofes con Venezuela; en segundo lugar, el gobierno venezolano no aceptó el patrullaje de naves norteamericanas en su mar territorial; en tercer lugar, se realizó una entrevista entre el presidente Chávez con Barry

MacCaffrey en la ciudad de Nueva York, el 10 de junio de 1999, en donde se reiteró la búsqueda de algunas formas de cooperación en el ámbito global y regional (*El Nacional*, 23-2-00, p. A/2; MRE de Venezuela, 1999, p. 170).

Durante la XXIX Asamblea General de la OEA, realizada en Ciudad de Guatemala, en junio de 1999, el canciller Rangel criticó la política antidrogas norteamericana y enfatizó que “si bien el gobierno de los Estados Unidos estaba preocupado por el tráfico de drogas en América Latina y el Caribe, Venezuela estaba preocupada por el consumo de estupefacientes en aquel país”. La delegación venezolana presentó también, en esa misma ocasión, un proyecto de declaración acogida por unanimidad sobre “Democracia Participativa”, que contrastó con la propuesta de EEUU de fortalecer la tesis de la democracia representativa y el proyecto de crear un grupo de países miembros de la OEA a fin de prestar asistencia institucional a naciones con problemas políticos. Aunque el debate fue de naturaleza retórica, no dejó de tener su importancia, ya que Venezuela se apartaba de una iniciativa norteamericana presentada en el seno del organismo (*El Nacional*, 20-6-99, p. A/2).

En julio de 1999, visitó Caracas una delegación del Departamento de Estado y otras dependencias del gobierno norteamericano presidida por Peter Romero, subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos; Thomas Umberg, director adjunto de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas; y Arturo Valenzuela, director de Asuntos Interamericanos del Consejo de Seguridad Nacional, a fin de llegar a un acuerdo sobre cooperación antidroga. La delegación estadounidense sostuvo varias reuniones con altos funcionarios gubernamentales de Venezuela y con el propio presidente Chávez. El objetivo concreto de la visita estuvo en presionarlos a fin de permitir el paso de aviones sobre el espacio aéreo venezolano dentro del marco general de la política norteamericana hemisférica de combate al narcotráfico (*El Nacional*, 8-7-99, p. A/2). Durante el mismo mes de julio de 1999, también visitó Caracas el general Barry McCaffrey, director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas del gobierno de Clinton (Jimeno Malavé, 1999, p. 475).

Los días 14 y 15 de febrero de 2000, visitó Caracas un día y medio Thomas Pickering, subsecretario de Asuntos Políticos del Departamento de Estado. Estuvo acompañado de otros altos funcionarios del Departamento de Estado en una gira por Colombia, Venezuela,

Ecuador y Brasil. En Caracas, la delegación se entrevistó con el vicepresidente ejecutivo del gobierno de Chávez, Isaías Rodríguez; el presidente de la Comisión Legislativa, Luis Miquilena; el ministro de Relaciones Exteriores, José Vicente Rangel; y el ministro de Relaciones Interiores, Luis Alfonso Dávila. En ocasión de esa visita, relacionada con el tema de la cooperación en la lucha antinarcóticos, Pickering reiteró el apoyo del gobierno norteamericano al proceso interno venezolano. En este contexto, apuntó que Washington respaldaba “la forma como el gobierno, la Asamblea Nacional Constituyente y el Congreso han consultado al pueblo de Venezuela a lo largo del proceso fundamental de grandes reformas económicas y políticas” (*El Nacional*, 16-2-00, p. A/2).

Dos días antes, la embajadora de EEUU en Venezuela Donna Hrinak, había declarado que “para cooperar en la lucha antidrogas no he visto un compromiso. No he observado todavía una respuesta comprensiva, coherente, con respecto a un plan regional” (*El Universal*, 5-10-00, p. 1-14).

En octubre de 2000 se conoció que aparentemente un buque militar de EEUU adscrito al Comando de Guardacostas de ese país, el USCG “Gantian”, había navegado con tripulación norteamericana y de otros países vecinos a Venezuela en aguas territoriales venezolanas, cerca de la desembocadura del río Orinoco, específicamente en la Boca de Serpiente, el 2 de octubre de 2000, lo que motivó una solicitud de explicación por parte del gobierno de Venezuela al Departamento de Estado, a través de una nota diplomática, fechada el 11 de octubre. En esa nota, el gobierno venezolano expresó que “Ante tal circunstancia, el Gobierno Nacional presenta su protesta formal y solicita al Ilustrado Gobierno de los Estados Unidos de América realizar las investigaciones del caso y apreciará conocer el resultado de las mismas” (MRE de Venezuela, 2000, p. 638).

El 22 de octubre de 2000 se conoció que el USCG “Reliance” también había navegado presuntamente por aguas interiores del Golfo de Venezuela. De ser así, se pudiera deducir que EEUU estaba desconociendo el criterio histórico de Venezuela de defender como aguas interiores las del Golfo. El gobierno del presidente Clinton negó que esas dos naves norteamericanas hubieran navegado en aguas territoriales e interiores venezolanas (*El Universal*, 27-10-00, p. 1/16). El gobierno de Washington elevó una protesta el 30 de octubre de 2000, respondiendo a la nota venezolana y aduciendo que dos aviones F-16

de Venezuela, habían sobrevolado agresivamente al USCG “Reliance”, como medida de presión para que abandonara las “aguas interiores venezolanas” y que ese buque ejercía el derecho de “paso inocente” contemplado en el derecho internacional. Posteriormente, el gobierno de Chávez manifestó en otra nota diplomática, fechada el 31 de octubre de 2000, que “El gobierno de Venezuela rechaza esas alegaciones por inaceptables, contrarias al Derecho y atentatorias a la soberanía, autoridad y posesión que Venezuela ejerce y siempre ha ejercido de forma manifiesta, efectiva, ininterrumpida y permanente sobre el Golfo de Venezuela, no sólo a través de actos físicos de presencia y control, sino también a través de numerosas manifestaciones formales y de índole legal” (*El Universal*, 31-10-00, p. 1/16; MRE de Venezuela, 2000, pp. 638-639).

Con estos incidentes y con las alusiones del presidente cubano Fidel Castro relacionadas con la resistencia venezolana a las presiones del país del Norte, el canciller Rangel ratificó que “no estamos siendo presionados en este momento por los Estados Unidos; tampoco estamos en plan de competir o enfrentar a ese país” (*El Nacional*, 28-10-00, p. A/2).

Al final, el incidente no pasó del envío de las notas de protesta diplomática, y en una reunión privada entre el canciller venezolano y la embajadora norteamericana en Caracas, se limaron las asperezas de lo que para algunos fue un llamado de atención, una provocación o simplemente una presión de EEUU frente a la visita de Castro al país o debido a la falta de correspondencia de Venezuela en la lucha regional antinarcótico. Para el canciller Rangel, “al gobierno de Clinton le había quedado claro que para Venezuela el Golfo de Venezuela era una bahía histórica” (*El Nacional*, 3-11-00, p. A/2).

En marzo de 2005, se conoció el Reporte sobre el Control Internacional de Narcóticos publicado por la Oficina de Asuntos sobre el Control de Narcóticos a Nivel Internacional y de Aplicación de la Ley. En dicho informe se estableció que Venezuela mejoró su cooperación en la materia durante el año 2004 y que se dieron importantes progresos en la captura de alijos de cocaína, gracias en gran parte a varias confiscaciones por las autoridades venezolanas, que contaron con la ayuda de las norteamericanas. Del mismo modo, “varias organizaciones relacionadas con el tráfico de cocaína y heroína fueron efectivamente atacadas durante 2004 y se hicieron varias extradicciones” (*El Universal*, 15-3-05, p. 1/5).

Sin embargo, se echa de menos en el reporte la aprobación de una ley en Venezuela en contra del narcotráfico, y se denuncia la corrupción y complicidad de funcionarios civiles y militares de nivel medio en el contrabando de droga por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y otros aeropuertos y puertos venezolanos. Al mismo tiempo, se favorece la cooperación bilateral en los planes de seguridad en los aeropuertos y puertos, en el control del corredor Táchira-Puerto Cabello, usado frecuentemente como salida de la droga, la ayuda de dos inspectores de aduana norteamericanos y la colocación de equipos de rayos x de alta tecnología (*El Universal*, 15-3-05, p. 1/5).

Ahora bien, el 21 de mayo de 2005, el embajador de EEUU en Venezuela, William Brownfield admitió que había problemas en la cooperación bilateral entre los dos países para combatir el narcotráfico, y que la ayuda norteamericana se había reducido dado el abandono de la unidad conjunta integrada por la Guardia Nacional, el Ministerio Público venezolano y la DEA. En esa ocasión Brownfield dijo que “se manejaban cifras que sugerían un aumento en el tráfico de estupefacientes y que mucha de la droga que se produce y sale de Colombia, con destino a Europa o Estados Unidos, pasa por Venezuela” (*El Universal*, 21-5-05, p. 1/7).

El 20 de junio de 2005, el ministro del Interior y Justicia del gobierno de Chávez, Jesse Chacón, planteó que el gobierno venezolano trabajaba con las agencias gubernamentales norteamericanas de la Drug Enforcement Administration (DEA) y el Federal Bureau of Investigation (FBI) pero no con la Central Intelligence Agency (CIA), ya que “difícilmente podemos trabajar con la CIA, que tumbó gobiernos en Chile, Guatemala, Granada, Nicaragua y pretende tumbar éste” (*El Universal*, 21-6-05, p. 1/6).

El 8 de agosto de 2005, el presidente Chávez anunció que su gobierno suspendía los convenios de cooperación con la DEA. Para él, “El asunto de la DEA es un asunto de soberanía; veníamos haciendo un seguimiento y resulta que la DEA estaba utilizando como máscara la lucha contra el narcotráfico para incluso apoyar el narcotráfico, para hacer inteligencia en Venezuela en contra del gobierno” (*El Universal*, 8-8-05, p. 1/8).

El gobierno de EEUU, a través del vocero del Departamento de Estado, Adan Ereli, dijo que “el corte de la cooperación del gobierno de Venezuela con la DEA era ‘lamentable’ y que en los últimos meses

se había visto un firme deterioro en el compromiso del gobierno de Venezuela en ese frente". El funcionario dio como ejemplo de ese deterioro "la resistencia de Chávez a la implementación de normas contra el lavado de dinero para detectar la corrupción derivada del tráfico de drogas, compartir información sobre vuelos de aviones o movimientos marítimos ilícitos, interceptar ese tipo de tráfico y cumplir las leyes y tratados antidrogas" (*El Universal*, 9-8-05, p. 1/8).

A fines del mes de agosto de 2005, se anunció que se revisarían los términos de la cooperación entre la DEA y el gobierno de Venezuela, entendiéndose que para futuras operaciones antinarcóticos en Venezuela, la DEA no participaría directamente, en lo que se entendió como un tipo de arreglo entre las dos naciones y la búsqueda de la firma de un nuevo convenio que detendría una eventual decertificación de Venezuela por parte del gobierno de EEUU (*El Universal*, 2-9-05, p. 1/8).

El presidente Bush envió al Congreso de su país, el 15 de septiembre de 2005, el Informe Anual sobre Tráfico Mundial de Droga, donde se estima que Venezuela no hizo esfuerzos suficientes en el último año para combatir el narcotráfico. Así, Venezuela fue incluida dentro de un grupo de países por los que transita droga y que no prestan una colaboración plena en la lucha contra ese flagelo.

Se dice en el informe que "Venezuela ha fracasado en forma demostrable durante los últimos doce meses en cumplir con sus obligaciones conforme a los acuerdos antinarcóticos". La aseveración del gobierno de EEUU originó la decertificación de Venezuela, pero con la aplicación simultánea de una excepción, un "*waiver*", a fin de mantener los programas de asistencia y cooperación con sectores de la oposición en Venezuela y de acuerdo con "intereses vitales" del gobierno de Bush (*El Universal*, 16-9-05, p. 1/5).

Diversos analistas coincidieron en que el gobierno del presidente Chávez no esperaba la decertificación, aunque pudiera decirse que la posición estadounidense fue benevolente, "*light*", al decir de algunos analistas, en términos de una medida que no contempla penalizaciones, originando así una especie de alerta sobre la conducta de Venezuela, como consecuencia de la posición crítica del gobierno de Chávez sobre el trabajo de la DEA en el país, la falta de colaboración bilateral sobre el tema, y por la posición general del gobierno de Bush de aplicar el "torniquete" a un gobierno que no busca negociar la agenda bilateral sino la confrontación, según el punto de vista de la Casa Blanca.

ASPECTOS ESTRATÉGICOS VINCULADOS A LOS TEMAS ECONÓMICO-COMERCIALES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Aspectos generales

Dentro de la teoría de las relaciones internacionales, ha tomado cuerpo la idea de colocar los temas económicos como parte de la agenda de seguridad de los países. La tradicional visión realista consideraba que lo económico y lo comercial eran temas secundarios, pero la crisis petrolera de los años 70 abrió el compás de los intereses estratégicos y de seguridad, al considerar que los temas económicos y comerciales tenían igual importancia para la política exterior de los países y para las políticas de seguridad, en cuanto sirven para proyectarse en la economía y en el comercio mundiales o como instrumentos de poder en materia de sanciones, proteccionismo, limitaciones y otros factores económicos. En este marco, los temas de integración, del desarrollo, de los recursos naturales, de las capacidades estratégicas de una nación, de la geoeconomía, por mencionar sólo algunos de ellos, fueron objeto de atención de los interesados en la materia que nos ocupa. En el caso de Venezuela el petróleo y en general los temas energéticos se han considerado de carácter estratégico, y en medio de ello las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela pasan por los temas económicos y comerciales. Es por ello que resulta indispensable analizar este plano de las relaciones, y para ello se da cuenta de estos aspectos en los últimos años.

En cuanto a la secuencia histórica, tenemos que en octubre de 1994 el Departamento de Comercio de EEUU amenazó con aplicar la Sección 301 de la Ley de Comercio, a fin de imponer sanciones comerciales a Venezuela y a otros productores de banano que habían firmado un acuerdo marco con la Unión Europea (UE) sobre la comercialización

de ese producto. A fines del mes de abril de 1997, se conoció que la Organización Mundial de Comercio (OMC) había desaprobado el sistema de cuotas convenido entre la UE y los países signatarios de ese acuerdo marco. Posteriormente, en noviembre de ese mismo año, EEUU condicionó la entrega de trigo a Venezuela. Dada la investigación *anti-dumping* que agencias del gobierno venezolano llevaron adelante sobre el trigo norteamericano subsidiado, y dada la prohibición de Venezuela desde 1993 a la importación de productos avícolas, porcinos y vacunos de igual origen, el Departamento de Comercio condicionó la inclusión de la nación suramericana en el Programa de Promoción de Exportaciones (EEP, por sus siglas en inglés), del Departamento de Agricultura de EEUU. De igual modo, Venezuela trató de evitar el embargo de los camarones producidos en el país, ante la denuncia del Departamento mencionado sobre la mortandad de tortugas. A este respecto, el gobierno venezolano, conjuntamente con funcionarios norteamericanos, inspeccionaron las flotas camaroneras que se encontraban en puertos venezolanos, sin detectar irregularidades en la conservación de las tortugas marinas. Posteriormente, el 28 de abril de 1995, el gobierno de EEUU otorgó a Venezuela la certificación necesaria para seguir exportando camarones hasta mayo de 1996, lo que se repitió en 2004 (MRE de Venezuela, 1999).

En mayo de 1995, se conoció que Venezuela no fue incluida en la Priority Watch List (Lista de Países Prioritarios en Observación), de la Sección Especial 301 de la Ley Ómnibus de Comercio y Competitividad, pero sí en la Watch List, pese a la entrada en vigencia de las decisiones 344 y 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, referentes a las leyes sobre Propiedad Industrial y Derechos de Autor. Es decir, que Venezuela continuó dentro de la lista de 24 países en observación desde 1990. Al mismo tiempo, se recalcó que no se había establecido la oficina para atender los casos sobre derechos de autor en el país, ni se había revisado el régimen sobre uso de patentes y el reglamento sobre propiedad industrial (*Economía Hoy*, 6-5-95, p. 23 y 19-5-95, p. 23).

Por otra parte, Venezuela, en su condición de miembro de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), firmó junto con EEUU y otros países una declaración de carácter regional en Ciudad de Panamá sobre la necesidad de reducir progresivamente la mortandad de delfines. Este hecho se consideró como un avance para suspender el embargo al atún venezolano (*Economía Hoy*, 12-10-95, p. 22).

En los mismos términos, Venezuela confrontó otros problemas comerciales con EEUU, como el de la investigación sobre el cumplimiento del Acuerdo de Suspensión de Subsidios a las exportaciones venezolanas de cemento tipo Clinker y Portland. Al mismo tiempo, se permitió la entrada a EEUU de los Carbon Steel Welded Pipe Fittings, producto elaborado en Venezuela a partir del hierro, el cual estaba suspendido, y se aprobó el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) por un período de cinco años. Este sistema permitió que productos venezolanos petroquímicos y químicos, así como hierro, cemento y camarones pudieran ser exportados sin problemas al mercado norteamericano.

En abril de 1996, se dio a conocer el Informe Anual del Departamento de Comercio de EEUU al Congreso norteamericano, en donde nuevamente se indicaba que Venezuela imponía barreras comerciales a productos y servicios de esa nación, al tiempo que se subrayó que Caracas no había perfeccionado los mecanismos pertinentes para combatir la piratería comercial (*El Nacional*, 1-4-96, p. D/4).

Por otra parte, EEUU colocó nuevamente a Venezuela en la lista de observación de países que no protegían adecuadamente los derechos de autor y la propiedad intelectual, según el informe presentado por la Oficina del Representante Comercial de ese país. En este sentido, se dice en ese informe que "los esfuerzos del Gobierno venezolano siguen siendo modestos en lo que respecta a represión de la piratería", y se expresa que "Venezuela no ha aprobado para esa fecha la Ley de Propiedad Intelectual". Por otra parte, "se observan diferencias en el sistema de marcas y patentes, una ausencia de normas contra las importaciones paralelas, y la implementación parcial de las normas contempladas en los Trips (Acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio), consagrados en el Tratado de la OMC" (*El Nacional*, 24-5-96, p. E/5).

En la segunda mitad de 1996, se tuvo conocimiento del creciente descontento de la Agencia Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento de Transporte del gobierno norteamericano, sobre el escaso cumplimiento por parte de las líneas aéreas venezolanas de las regulaciones federales de aviación estadounidenses. Sin embargo, la FAA ratificó a Venezuela en la categoría 2, amenazó con pasarla a la categoría 3, y suspendió los vuelos comerciales de líneas de bandera venezolana entre ese país y EEUU el 8 de agosto de 1996.

Luego de varios días de negociaciones, Venezuela se comprometió a cumplir con las normas de la FAA, y esta agencia del gobierno estadounidense dio un plazo de 30 días de prueba a las líneas aéreas venezolanas, a las que se les permitió operar nuevamente, certificándolas en la categoría 2. Posteriormente, en 2005, Venezuela permanecía en la categoría 2, vale decir, que sus líneas aéreas estaban autorizadas a efectuar operaciones en EEUU, pero debían someterse a mayores inspecciones y supervisiones (*El Nacional*, 7-7-96, p. E/6; *El Nacional*, 7-8-96, p. A/1; 8-8-96, p. E/1; 9-8-96, p. E/2; 25-9-96, p. E/3).

A fines de 1996, se conoció que el Eximbank restituiría los préstamos al sector público venezolano, suspendidos desde principios de 1995, como consecuencia de la nueva política económica de apertura iniciada en marzo de 1996, por el gobierno del presidente Rafael Caldera. Ese mismo año, varios bancos y otros entes financieros norteamericanos como el JP Morgan, Bank of Boston, Citicorp, NBD, Bancorp, First Fidelity, Chase y Liberty Mutual, comenzaron a operar en Venezuela y se asociaron con la banca y otras instituciones financieras venezolanas. Este proceso se complementó con la política de Petróleos de Venezuela (Pdvs), de expandir su participación accionaria en refinerías norteamericanas a fin de asegurarse un mercado para el petróleo pesado venezolano. Así, se ratificó la participación accionaria de Pdvs en las compañías petroleras norteamericanas Citgo (con totalidad accionaria venezolana), Chaplin y Unoven, y se negoció la compra de refinerías en los estados de Texas, Illinois y Louisiana (*El Nacional*, 15-1-97, p. D/17).

A raíz de la visita del presidente Bill Clinton a Caracas, en octubre de 1997, los gobiernos venezolano y norteamericano llegaron a algunos acuerdos sobre materia comercial y a su vez postergaron otros de igual índole. Para esa fecha, se había superado el bloqueo del gobierno de EEUU al atún venezolano; se había suspendido el reclamo de ese país sobre la presunta práctica desleal del alambión fabricado por Sidor; el gobierno estadounidense había ratificado la permanencia de Venezuela en el Sistema Generalizado de Preferencias; y se habían superado los problemas técnicos y comerciales con respecto a la gasolina reformulada (sobre este último punto, véase más adelante).

Ahora bien, los obstáculos para la firma de un tratado de promoción y protección de inversiones entre Venezuela y EEUU continuaron por varios meses más. En primer lugar, desde la óptica de

Washington, Venezuela estaba retrasada con relación a la adopción de los cánones internacionales sobre propiedad intelectual. Cabe recordar que Venezuela tenía plazo hasta el año 2000 para acogerse integralmente a los Trips suscritos ante la OMC. En segundo lugar, Venezuela se negó a incluir en las negociaciones sobre el tratado los temas laboral y ambiental, ya que esto podía perjudicar la posibilidad de la aprobación del *Fast-Track* en el Congreso norteamericano para beneficiar el Área de Libre Comercio de las Américas. Por último, EEUU insistía en relacionar la posibilidad de la firma de un tratado de esta naturaleza con el tema de la propiedad intelectual. En este sentido, Washington exigía el cabal funcionamiento del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, la revisión de la Decisión 344 ante la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e impulsar al Poder Legislativo de Venezuela para que sus parlamentarios aprobaran los proyectos de Ley de Propiedad Intelectual y la Ley Orgánica de Aduanas.

En cuanto a la posibilidad de la firma de un tratado de doble tributación, este tampoco se pudo formalizar en ocasión de la visita del presidente Clinton a Caracas, aunque se firmó finalmente en enero de 1999 y se puso en práctica en enero del año 2000, con la excepción referida a los temas de la renta global y de la fuente de enriquecimiento. Venezuela defiende la tesis de que la fuente que grava es el lugar donde se produce el enriquecimiento. Por el contrario, EEUU sostiene que debe aplicarse el principio de la renta mundial, que indica que toda empresa norteamericana debe pagar impuestos en EEUU, sin importar en cuál país se origina el enriquecimiento.

En julio de 1997 concluyeron las negociaciones del Tratado de Asistencia Mutua en el campo penal entre EEUU y Venezuela, firmado por los presidentes Caldera y Clinton en ocasión de la visita de este último a la nación suramericana. Sobre este tema, hay que recordar que el fiscal general de Venezuela planteó, en 1995, un convenio de extradición que contemplara los delitos bancarios. El gobierno norteamericano lo consideró innecesario, ya que ambos países habían suscrito un acuerdo multilateral sobre el tema en el marco de la "Convención Interamericana Sobre Ayuda Mutua en Cuestiones Penales", aprobado en 1992. Ya en marzo de 1995, ambos gobiernos suscribieron un "Acuerdo de Asistencia Mutua" para la administración de justicia, a fin de procesar las detenciones, los juicios y las extradiciones de ciudadanos venezolanos residentes en EEUU incurso en delitos bancarios y financieros (MRE de Venezuela, 1995; 1998).

Durante 1999, los negocios norteamericanos en Venezuela tuvieron una reducción en cuanto a la inversión directa, dada la recesión económica y la desaceleración de la apertura petrolera. En octubre de 1999 se comentó de nuevo la posibilidad de que Venezuela pudiera ingresar al grupo de países que gozan de reducciones arancelarias si se prorrogaba la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, posibilidad que se volvió a discutir en el año 2000, pero sin resultados favorables para ese país. Al mismo tiempo, en diciembre de 1999, se conoció que las inversiones estadounidenses en Venezuela habían caído en un 73%, aunque compañías norteamericanas tomaron parte en el proceso de privatización de industrias estatales, como fue el caso de la Cantv, compañía nacional de teléfonos, o en el caso de las compañías de telefonía celular, al igual que centrales azucareras, empresas ligadas al turismo y otras áreas de la economía, conformando así el 40% de las inversiones totales extranjeras en el país para 1999 (*El Nacional*, 16-12-99, p. E/1).

En enero del año 2000 se conoció que había entrado en vigencia el Tratado sobre Doble Tributación, suscrito en enero de 1999, el cual regiría por un período de cinco años, con la posibilidad de renovarlo. El acuerdo para evitar la doble tributación comenzaba a implementarse casi en la totalidad de sus partes, en referencia al intercambio de información fiscal y tributaria, así como en materia de establecimiento permanente (más de 183 días) o temporal, que se impone a empresas de ambos países para que paguen los impuestos en donde se originó la actividad. Sin embargo, el tema de pechar la exportación de capitales a EEUU fue diferido, a fin de evitar la misma a un sistema tributario de menor impacto como es el estadounidense, hasta tanto no se modificara la Ley del Impuesto sobre la Renta en Venezuela. Con relación a este último punto, se estimaba que había más de 150.000 millones de dólares depositados en EEUU, propiedad de empresas privadas y de particulares venezolanos (*El Nacional*, 2-1-00, p. E/1).

Un hecho singular fue el que en febrero del año 2000, varios venezolanos residenciados en Florida pidieran el apoyo del gobierno de Venezuela a fin de conseguir que el gobierno norteamericano les otorgara un "Estatus de Protección Temporal", una medida administrativa contemplada en la legislación estadounidense para beneficiarse con un permiso para trabajar y obtener la seguridad social en EEUU por 18 meses. Este estatus le es concedido a los ciudadanos que sufren las consecuencias de desastres naturales o confrontaciones bélicas

en sus países de origen. La búsqueda de apoyo por parte de este grupo de venezolanos, constituyó la primera acción colectiva de esa índole que hacían los inmigrantes provenientes de Venezuela que se encuentran en EEUU, y reveló el creciente número de ellos que vive en el estado de Florida. Se calculaba que había más de 150.000 venezolanos en EEUU para el año 2000 (*El Nacional*, 14-2-00, p. A/2).

Durante el año 2000 las exportaciones no tradicionales de Venezuela a EEUU aumentaron en un 40% con respecto a 1999. El monto fue del orden de los 1.760 millones de dólares americanos, siendo los principales productos colocados en EEUU aceites derivados del petróleo o mineral bituminoso, productos férreos, aleaciones de aluminio, éter, cemento y mariscos.

En cuanto a las exportaciones no tradicionales hacia Venezuela, estas tuvieron un monto de 4.543 millones de dólares americanos, un 15,1% menos que en 1999, siendo los principales productos importados por Venezuela aparatos de radiofonía, vehículos automotores y maquinarias industriales (*El Universal*, 11-3-01, p. 2/1).

Al mismo tiempo, a finales del año 2000 se reiteró el compromiso por parte de ambos gobiernos de seguir conversando sobre la posibilidad de la firma del Tratado de Promoción Recíproca de Inversiones, cuyas negociaciones estaban suspendidas desde 1998.

Entre los años 2001 y 2002 las relaciones comerciales siguieron su curso y cabe destacar que se presentaron menos problemas tácticos entre ambos países durante esos años. De hecho, las divergencias entre Venezuela y EEUU se trasladaron más del plano comercial hacia el plano económico, en cuanto a las diferencias doctrinales con relación al papel del Estado en la economía. Cabe destacar la firma entre ambos gobiernos de la renovación del acuerdo para la constitución de una Comisión de Agricultura Venezuela-EEUU, sellado en diciembre de 1984. La renovación se firmó el 21 de junio de 2002 mediante unas Notas Reversales, por un período de cuatro años adicionales (MRE de Venezuela, 2002, p. 381).

Una misión técnica del gobierno de Venezuela visitó Washington los días 12 y 13 de junio de 2003, a fin de revertir los efectos de la decisión tomada por el Eximbank de suspender las líneas de crédito a Venezuela. Es decir que para el gobierno del presidente Hugo Chávez, en el año 2003, se habían restringido las líneas de crédito al país y se había evaluado su economía negativamente por parte de las agencias clasificadoras de riesgos (MRE de Venezuela, 2003, p. 344).

La repercusión económica del turismo venezolano en el estado de Florida, específicamente en Miami, se estima en un millardo de dólares. Este nuevo auge turístico, se debe principalmente a los altos precios internacionales del petróleo, lo que genera una mayor circulación de dinero en la economía venezolana, y a su vez, estimula las compras en el exterior, a pesar del control de cambio de las divisas que entró en vigencia desde febrero de 2002. Según la Cámara Venezolano-Americana de la Florida, las inversiones privadas venezolanas repuntaron en el año 2004, principalmente en el área de la construcción, así como también las importaciones desde ese estado hacia Venezuela (*El Universal*, 7-12-04, p. 1/14).

Las inversiones directas totales de EEUU en Venezuela llegaron a alcanzar la cifra de 47 millones en el período enero-septiembre de 2004, lo que significó una caída de un 34% con relación al mismo período del año 2003 (*El Nacional*, 17-12-04, p. A/20). Por otra parte, la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (VenAmCham), afirmó en su balance anual del año 2004 que las exportaciones venezolanas no petroleras a EEUU crecieron en un 9% los primeros nueve meses de ese año (<http://embajadausa.org.ve>).

En materia comercial bilateral, el año 2004 cerró, aproximadamente, en 7.500 millones de dólares de importaciones venezolanas de EEUU y 12.000 millones de dólares de exportaciones venezolanas a EEUU, algo relativamente superior al compararse con el año 2003, cuando las importaciones venezolanas desde ese país se redujeron a 6.840 millones de dólares; asimismo se observó un crecimiento en la frecuencia de viajeros y mayores inversiones extranjeras directas.

En el año 2004, Venezuela tuvo un flujo de inversiones extranjeras no petroleras por el orden de los 492 millones de dólares, de los cuales 174 millones fueron aportados por inversiones provenientes de EEUU (Romero, C., 2005).

El 30 de mayo de 2005, el viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Producción y Comercio de Venezuela, Roger Figueroa, anunció que a finales del mes de junio de 2005 se realizaría la macrorueda de negocios con empresarios de EEUU, a través de la cual se aspiraba a aumentar las exportaciones no petroleras venezolanas al país del Norte y en igual término aumentar las inversiones norteamericanas en Venezuela.

Dentro de ese contexto de la rueda de negocios bilateral, el viceministro reiteró que “Venezuela está muy preocupada por los lazos

comerciales con EEUU, con los empresarios norteamericanos" (*El Universal*, 31-5-05, p. 2/1).

La rueda con EEUU se realizó el 31 de junio de 2005 y contó con la asistencia de más de 165 compañías norteamericanas y más de 300 empresas venezolanas, bajo la expectativa de generar más de 300 millones de dólares de intercambio comercial no tradicional.

El embajador de EEUU en Venezuela al referirse a este evento dijo: "... no importa[n] las otras diferencias. La lógica sugiere que vamos a colaborar en asuntos comerciales" (*El Universal*, 1-7-05, p. 2/4). Y por su parte, el presidente Chávez, al dar las palabras de cierre de ese evento señaló:

Créanme que me gustaría acompañarlos en una rueda de negocios en EEUU y retomar el intercambio profundo con universidades, con deportistas, militares, con gobernadores, diputados, ministros, presidente y el gobierno (...)

Si EEUU diera un giro de verdad a su política exterior..., y cuando digo EEUU me refiero al Gobierno (*El Nacional*, 2-7-05, p. A/2).

En el plano hemisférico la situación es de mayor tensión, ya que esta se ha mantenido signada por la negativa de Venezuela de apoyar plenamente el ALCA (el tema se trató previamente en este trabajo). Venezuela ha manifestado serias reservas sobre los temas de acceso a mercados, propiedad intelectual y *dumping*; ha promovido un cuestionamiento sobre el papel de los organismos multilaterales de carácter financiero (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial); ha criticado la implementación de esquemas neoliberales en las economías nacionales; ha alentado la ayuda especial en materia energética y comercial otorgada a Cuba; y ha presentado una alternativa al ALCA que vaya más allá de lo comercial y que incluya materias políticas, culturales, sociales y de infraestructura, denominada Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) (Kelly y Romero, C., 2002).

En un futuro, son de particular interés para el análisis de las relaciones bilaterales económicas y comerciales entre los dos países, el creciente espacio transnacional migratorio de venezolanos en y desde EEUU, con comportamientos parecidos a los de otras experiencias regionales: remesas de dinero, transculturización, ayuda transnacional y flujos migratorios sistemáticos entre Venezuela y EEUU (Kelly y Romero, C., 2002).

La cuestión energética

Se debe mencionar que el tema que caracterizó las tensiones comerciales entre ambos países durante los años 90 fue el de la gasolina reformulada. El problema se originó a fines de 1993, cuando la agencia gubernamental norteamericana Environment Protection Agency (EPA), reglamentó los “componentes y aditivos para combustibles: pautas para la gasolina reformulada y convencional”, lo que afectaría las gasolinas reformuladas y convencionales venezolanas que se exportaban a la Costa Este de EEUU. El reglamento, basado en la ley norteamericana de Purificación del Ambiente, afectaba un producto que ya había alcanzado sus propios parámetros de limpieza desde 1990: 22% de olefina, 6,4% de azufre, y bajos niveles de benceno. El gobierno de Venezuela alertó que el tema de la gasolina reformulada reflejaba las diferencias existentes entre el Congreso norteamericano, la EPA y el Gobierno Federal sobre el comercio con Venezuela, y utilizó como argumento la puesta en marcha de un proyecto de inversión en las refinerías (*El Diario de Caracas*, 26-4-94, p. 15).

En febrero de 1994, Venezuela procuró llegar a un acuerdo sobre el caso con el gobierno del presidente Clinton y en principio se vislumbraba la posibilidad de una solución, al decretarse en abril de ese año una reglamentación transitoria que favorecía a la gasolina reformulada, al evitarse las sanciones al combustible venezolano. En septiembre de 1994, se conoció que el Congreso de EEUU había decidido mantener las restricciones aplicadas a la gasolina reformulada y bloquear los fondos para cambiar el reglamento de 1993, lo que en la práctica significaba retirar la gasolina venezolana del mercado norteamericano de la Costa Este.

Desde la óptica norteamericana, la gasolina venezolana era objetable por la EPA, tras alegar que el combustible no cumplía con los requisitos de protección ambiental al contener altos niveles de olefina. Esto motivó a que el gobierno de Venezuela decidiera plantear el caso junto con Brasil en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés). El 8 de septiembre de 1994, el gobierno venezolano denunció la medida exigiendo un trato igualitario, ante lo que consideraba una discriminación a los productos de exportación en el marco de “un proteccionismo comercial disfrazado de ambiental” (*El Diario de Caracas*, 7-9-94; 15-9-94, p. 3; 20-9-04, p. 16; 21-10-94, p. 29; 7-12-94, p. 4).

El GATT admitió la demanda de Venezuela el 4 de octubre de ese mismo año y el gobierno del presidente Caldera amenazó con no comprar más trigo proveniente de EEUU, en respuesta a la decisión del Congreso norteamericano. El 25 de octubre de 1994, Venezuela y EEUU acordaron la constitución del panel del GATT conformado por tres expertos de Hong Kong, Nueva Zelanda y Finlandia. Dicho proceso fue suspendido al terminarse la labor del GATT y al comenzar la actuación de la OMC. Venezuela y Brasil introdujeron en marzo de 1995 una denuncia ante la Organización, solicitando el establecimiento de un grupo especial para la solución de controversias, según las disposiciones de ese organismo, al no llegarse a un acuerdo amistoso en el ámbito bilateral. Esta acción fue la primera realizada por dos países miembros ante la nueva organización internacional, y se concretó en la constitución de un Grupo Especial formado por los expertos ya escogidos en la etapa final del GATT (MRE de Venezuela, 1995).

De esta forma, la demanda de Venezuela y Brasil introducida en abril de 1995 y decretada como procedente por un panel de expertos, fue ratificada por una instancia superior, ya que la interpretación que hacía el gobierno norteamericano de la ley de ese país, la Clean Air Act, era injustificable y restringía de manera disfrazada el comercio internacional.

A partir de esa resolución de la OMC se le indicó a EEUU que debía informar sobre las medidas necesarias para cambiar las reglas vinculadas a la importación de gasolina reformulada y reparar los daños comerciales ocasionados a Venezuela y Brasil. El 29 de abril de 1996, el panel de apelaciones de la OMC afirmó que ciertas normas ambientales de EEUU obstaculizaban la importación de la gasolina venezolana y brasileña, en lo que se consideró como una limitación al libre comercio. En este sentido, en mayo de 1997 se conoció que el Congreso norteamericano no estaría dispuesto a enmendar a tiempo la reglamentación de la EPA, para lo cual tenía plazo hasta el 20 de agosto de ese mismo año.

A fines del mes de abril de 1996, la legislatura del estado de Florida aprobó una resolución vetando la posibilidad de que la Florida Power and Light Company pudiera refinar orimulsión venezolana, lo que produjo la pérdida transitoria de ese mercado y el retraso de la entrada de ese combustible pesado a EEUU (*El Nacional*, 30-4-96, p. D/4).

Al mismo tiempo, compañías petroleras norteamericanas como Mobil, Arco, Philips, Conoco, Amoco, Chevron-Texaco y Exxon par-

ticipaban en convenios operativos, de asociación estratégica y de ganancias compartidas, en *joint-ventures* y en contratos de otra índole, como los convenios de exploración a riesgo con Pdvsa y sus filiales. De igual forma, se iniciaron las conversaciones para trabajar conjuntamente a fin de evitar el lavado de dinero y promover la legitimación de capitales (*El Nacional*, 1-11-96, p. E/12; 5-11-96, p. A/4; 30-12-96, p. E/8).

Desde el punto de vista táctico, se puede identificar una serie de problemas bilaterales que no se resolvieron a fines del segundo gobierno del presidente Caldera: la amenaza de una prohibición de envío de gasolina reformulada venezolana al mercado de la Costa Este, dada la disposición ambiental correspondiente, y la continua amenaza de restringir la importación de gasolina, a pesar del dictamen de la OMC.

Ante el aumento de los precios del petróleo en el año 2000, el gobierno del presidente Clinton exhortó a los países productores a que elevaran la producción de barriles diarios para disminuir la cotización del crudo, que había llegado a 30 dólares por barril. Ante la advertencia del presidente Clinton sobre la posibilidad de usar la Reserva Estratégica norteamericana, el canciller venezolano exclamó que ni eso ni las presiones para aumentar la producción por parte de Washington le daban “ni frío ni calor”. Sin embargo, en un encuentro en Londres, el secretario de Energía de EEUU, Bill Richardson y el ministro de Energía y Minas de Venezuela, Alí Rodríguez, firmaron una declaración conjunta en la cual coincidían en que la volatilidad de los precios en los mercados mundiales “era perjudicial para las naciones productoras y consumidoras” (*El Universal*, 18-2-00, p. 2/1, *El Nacional*, 1-3-00, p. D/5).

Una delegación de parlamentarios norteamericanos y técnicos pertenecientes al Comité Ejecutivo del Consejo de Energía de EEUU, así como un grupo de empresarios norteamericanos visitaron Venezuela en junio del año 2000, con el fin de intensificar el intercambio bilateral en materia energética. La visita coincidió con la celebración de un seminario sobre integración hemisférica energética y la política oficial de promover asociaciones entre empresas venezolanas y norteamericanas en petróleo y gas (Venezuela está afiliada al Consejo de Energía desde 1997).

El 21 de octubre del año 2000, el secretario de Energía Bill Richardson visitó Venezuela, entrevistándose con el ministro de Energía y

Minas y presidente de la OPEP, Alí Rodríguez. Durante la reunión con su homólogo venezolano, Richardson insistió en la preocupación del gobierno de Clinton sobre los altos precios del petróleo y conversó también sobre la situación en el Medio Oriente, reiterando el apoyo de Washington a una reunión que se llevaría a efecto el 17 de noviembre de ese mismo año entre países productores y países consumidores de petróleo (*El Nacional*, 22-10-00, p. E/1).

El 12 de septiembre de 2002, visitó Caracas el subsecretario adjunto para Asuntos Económicos, Empresariales y de Agricultura, Alan P. Larson, y se reunió con varios funcionarios del gobierno de Venezuela. En las reuniones de trabajo se destacó la discusión sobre temas energéticos referidos al nuevo marco legal del sector petrolero y energético, señalándose una vez más la necesidad de desarrollar otras oportunidades de cooperación energética dentro del compromiso de Venezuela como suplidor confiable y seguro de petróleo a EEUU (MRE de Venezuela, 2002, p. 382).

Lo energético constituye el núcleo central en la materia económica y comercial bilateral. Venezuela tiene las reservas probadas más grandes de petróleo en el hemisferio occidental: 78.000 millones de barriles de crudo liviano y 235.000 millones de crudo pesado y extrapesado, así como tiene 148 trillones de pies cúbicos ([tcf, por sus siglas en inglés] equivalentes a 3.9 trillones de metros cúbicos) de gas asociado o no asociado con yacimientos petrolíferos, lo que la ubica en el séptimo lugar de importancia en el mundo y en el segundo en el hemisferio, después de EEUU.

La capacidad actual de producción de Pdvsa es de 2.7 millones de barriles diarios. Esta cifra incluye las asociaciones estratégicas y los acuerdos operacionales. Se sabe que Pdvsa se encuentra entre las corporaciones más importantes en lo que se refiere al negocio de refinación, con una red de 24 refinерías: 6 complejos en Venezuela, 1 en el Caribe, 7 en EEUU y 9 en Europa. La compañía norteamericana propiedad de Pdvsa, Citgo, por su parte, procesa de manera directa u opera sobre 859.000 barriles diarios. Las refinерías que pertenecen a Citgo producen un amplio margen de gasolinas convencionales y reformuladas: 140 millones de barriles diarios de gasolina, 55 millones de barriles diarios de destilados y 30 millones de barriles anuales de *fuel* para aeronaves. Los complejos refineros de Citgo (algunos en asociación) en EEUU son los siguientes: Lake Charles, Corpus Christi, Lemont, Lyondell-Citgo, Paulsbor, Chalmette y Savannah.

Citgo es una compañía refinadora y de transporte que comercializa combustibles, lubricantes y productos petroquímicos, ceras refinadas, asfalto y otros productos industriales, y posee 12.300 estaciones de gasolina en territorio estadounidense. Citgo declaró dividendos por 400 millones de dólares en el año 2004, en el marco de una discusión dentro del gobierno de Venezuela y en Pdvsa de vender esa empresa a un corto plazo (Romero, C., 2005).

Venezuela obtuvo un valor en promedio anual durante 2004 de 33,61 dólares el barril de petróleo, y durante el mes de julio de 2005, de alrededor de 47 dólares por barril. Se proyecta para el año 2010 una producción venezolana de 6 millones de barriles diarios de petróleo crudo y sintético, aunque se tienen serias dudas por parte de los sectores energéticos privados de que se siga adelante con los planes conjuntos de inversión en el 2005, dada la disminución de la actividad petrolera y gasífera aguas arriba (exploración y perforación) y aguas abajo (refinación).

En cuanto a EEUU, este país tiene unas reservas probadas por el orden de los 30.7 billones de barriles de crudo y unas reservas probadas de gas de 187 tcf.

Durante el mes de abril de 2005 Pdvsa anunció que se preveían inversiones de 20 millardos en la búsqueda de gas y petróleo costa afuera. Se estima encontrar 100 billones de pies cúbicos de gas y 18.5 millardos de barriles de petróleo en un área de 500.000 millones de Km², en la plataforma continental en el Golfo de Venezuela, Falcón noreste, Bonaire/Golfo Triste (Proyecto Rafael Urdaneta), La Blanquilla, Carúpano, Norte de Paria (Proyecto Mariscal Sucre), Golfo de Paria, este/oeste y Plataforma Deltana (*El Nacional*, 9-4-05, p. A/8). La compañía estadounidense Chevron obtuvo la concesión del Bloque Cardón III del Proyecto Rafael Urdaneta, con una licencia de exploración y explotación por 30 años a fin de producir gas para el mercado interno y eventualmente para el mercado externo (*El Nacional*, 9-9-05, p. A/22).

En mayo de 2005 se conoció que el Ministerio de Energía y Petróleo aumentaría la tasa de regalía a las 22 empresas multinacionales que operan en Venezuela, mediante convenios operativos a un 50% de propiedad para cada una de las partes dentro del esquema de empresas mixtas. De igual forma, el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (Seniat), comenzó a revisar la contabilidad de esas empresas bajo el supuesto de insuficiencias en el pago de los

impuestos respectivos. Esta medida fue interpretada como una decisión controversial, lo que llevó al Departamento de Estado a plantear que “como principio general, nos habría preocupado seriamente un impuesto que es aplicado en forma discriminatoria contra empresas de EEUU” (*El Universal*, 13-5-05, p. 2/2).

Posteriormente, el ministro de Energía y Petróleo de Venezuela Rafael Ramírez, puntualizó que la “relación de depredación del petróleo venezolano que por décadas mantuvieron empresas extranjeras en el proceso de internacionalización de hidrocarburos tiene sus días contados” (*El Nacional*, 12-6-05, p. A/27). Se refería Ramírez a presuntas irregularidades cometidas por esas empresas en el desarrollo de los convenios operativos, las asociaciones estratégicas y los negocios de internacionalización entre Pdvsa y empresas extranjeras.

En abril de 2005 se conoció que, dados los altos precios del barril de petróleo, el gobierno venezolano cambiaría los términos de la relación impositiva con algunas compañías petroleras establecidas en el país, ya que se estaba modificando el esquema de contratos operativos y de asociaciones estratégicas en campos recuperados o marginales (con 500.000 barriles diarios del total de 2.700.000 de la producción de Venezuela), a negocios basados en compañías mixtas (que prevé la Ley Orgánica de Hidrocarburos vigente desde el año 2001), en donde Pdvsa se reserva el 51% del capital accionario. Previamente se había tomado la decisión de elevar al 50% la tasa del impuesto sobre la renta a los proyectos operativos bajo la forma de contratos de servicios. A fines de 2004, se habían elevado las regalías de 1% a 16% para proyectos dirigidos a extraer crudo pesado de la Faja del Orinoco (*El Nacional*, 25-4-05, p. A/16).

Con relación a un comentario del presidente Bush referido a que era necesario aprobar la expansión de la extracción de crudo en el estado de Alaska, lo que significaría reducir a más de la mitad el que se importa de Venezuela, el vicepresidente José Vicente Rangel opinó que “el gobierno norteamericano puede quitarse de encima la preocupación de que puede haber un corte de suministro petrolero por parte de Venezuela”, y comentó que era difícil explotar petróleo en Alaska, ya que “allí ha habido problemas con esa explotación por razones ambientales” (*El Universal*, 23-4-05, p. 1/8).

Venezuela está en capacidad de desarrollar aún más su papel como proveedor confiable para Washington, en el marco de la política de apertura petrolera, gasífera y carbonífera, lo cual ha permitido la

presencia en el país de compañías como Exxon Mobil, Conoco-Phillips y Chevron-Texaco (desde el año 2005 denominada Chevron), bajo el esquema de empresas mixtas; en la exploración y futura explotación de gas *offshore* para exportar a EEUU, a corto plazo, en la Plataforma Deltana, en el Golfo de Venezuela y en las costas del estado Falcón, a través de tanqueros que transporten gas natural licuado (LNG, por sus siglas en inglés); y, a mediano plazo, mediante un gasoducto por Colombia, o uno subterráneo a través del Mar Caribe hacia el estado de Florida, conjuntamente con Trinidad y Tobago. Este país caribeño ya tiene, por cierto, su industria gasífera en plena expansión, y ocupa el primer puesto como proveedor hemisférico de LNG importado a EEUU (378 billones de pies cúbicos [bcf, por sus siglas en inglés]). Venezuela tuvo una producción para el año 2004 de 1.4 bcf, y se estima que para el 2009 sea de 160 bcf.

Recordemos que el aumento del consumo global de gas entre 1998 y 2003 creció un 13,2%, y el consumo global de petróleo aumentó un 7,0%, lo que demuestra la importancia futura de la industria del gas. En materia de precios, su cotización ronda los 8 dólares por millón de unidades termales británicas (BTU, por sus siglas en inglés).

El consumo de EEUU gira alrededor de 20 millones de barriles diarios de petróleo y depende en un 62% de crudo importado para satisfacer su demanda del hidrocarburo (según cifras del año 2004). De sus importaciones, un total de 12.2 millones de barriles diarios, Venezuela aporta 1.3 millones, lo que la convierte en el cuarto país suplidor de petróleo y derivados de esa nación, después de Canadá, Arabia Saudita y México. Venezuela aporta aproximadamente el 10% del consumo total de gasolina de EEUU, y EEUU requiere de un 15% de gas importado para su demanda interna, según cifras del año 2003 (Romero, C., 2005).

Las relaciones entre Venezuela y EEUU tienen un perfil energético muy determinante. Específicamente el petróleo y sus derivados, y en un futuro cercano el gas, son los únicos productos por los que Venezuela posee un valor trascendental para Washington. La política común de reducir la dependencia energética hemisférica, el aumento del flujo comercial, la inversión y la cooperación en esta área económica así lo indican. El Acuerdo de Cooperación Energética firmado por ambos gobiernos, en ocasión de la visita del presidente Clinton a Caracas en 1997, permite ampliar la materia hacia nuevas áreas tales como energías renovables, eficiencia energética, desarrollo del gas natural e integración de recursos energéticos.

Venezuela, a través de Pdvsa, ha invertido más de 7 millardos de dólares en EEUU y, a través de empresas de su propiedad, es la principal distribuidora de combustible en la Costa Este de ese país. Según estadísticas del Departamento de Energía de EEUU, las exportaciones venezolanas de crudo y derivados aumentaron en febrero del año 2005 a 1,69 millones de barriles por día.

CONCLUSIONES Y PROYECCIONES

La globalización, el petróleo y la política exterior son tres variables que condicionan la participación de Venezuela en el mundo y en el hemisferio. Su interrelación y procesos tienen que ver con una estructura internacional cambiante, con una reevaluación de sus aproximaciones teóricas y con una economía y un sistema político en pleno proceso de transformación, en donde las actuales respuestas públicas son las de reivindicar lo energético como la palanca central de desarrollo, a través de la internacionalización de la industria petrolera, la ampliación de la industria del gas, del carbón y de la energía eléctrica, y la superación del modelo de democracia representativa y del esquema económico mixto.

Venezuela ha mantenido un perfil activo en las relaciones internacionales. La participación de los sucesivos gobiernos, desde la independencia del país, en la política internacional, salvo contadas excepciones, originaron adhesiones pero también suspicacias a escala continental. El papel jugado por Simón Bolívar en la independencia de las repúblicas americanas, las disputas territoriales, el ansia de reconocimiento por parte de unos gobiernos medianamente constituidos y las relaciones de estos con otros gobiernos y sectores políticos extranacionales, propiciaron una plataforma internacional que, luego de la aparición del petróleo y del desarrollo de la industria petrolera, consolidaron una segunda fase de la política exterior de Venezuela.

Si a la primera fase le asignamos el nombre de *una Venezuela sin petróleo* en búsqueda del reconocimiento, a esta segunda etapa le asignamos el nombre de *una Venezuela con petróleo*, que buscaba fortalecer su rol internacional. A esta singularidad económica, debe agregarse desde 1945, pero sobre todo, desde 1958, la fachada democrática,

constituyéndose así dos pilares en donde se sustenta una diplomacia que se proyectó mundialmente de forma activa.

Esta política exterior generó a su vez un creciente papel para el Presidente de la República en cuanto a la toma de decisiones diplomáticas y comerciales en el área internacional, y también un creciente consenso sobre las prioridades internacionales de Venezuela, excepción hecha de los temas fronterizos.

En esta perspectiva tenemos que Venezuela orientó su diplomacia hacia la consecución y estabilidad de su sistema democrático, y para ello tuvo como prioridad el reconocimiento de la comunidad internacional así como también la utilización del petróleo en tanto instrumento en la promoción del país, en un mundo cada día más interconectado, donde los temas políticos se entremezclan con los temas económicos.

En este marco, el país fomentó a partir de 1958 unas relaciones normales con EEUU, y unas relaciones comprometidas con los países fronterizos a fin de cooperar con ellos en todos los planos, sin renunciar a sus reclamaciones y disputas territoriales; vale decir, los contenciosos mantenidos con Colombia sobre la demarcación de la frontera terrestre y la delimitación de las áreas marinas y submarinas contiguas con ese país, la demarcación territorial con Brasil, el acercamiento al Caribe poscolonial y la firma o búsqueda de la firma de tratados de delimitación de áreas marinas y submarinas, junto con el mantenimiento del reclamo venezolano sobre parte del territorio que pertenece a la República de Guyana.

Del mismo modo, Venezuela ha permanecido en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y ha fomentado una política petrolera tendiente a conservar la propiedad del subsuelo y el control sobre la producción, las regalías y la renta de esa industria. Este escenario se complementa con la nacionalización negociada de las propiedades petroleras extranjeras en 1976 y con la creación de la compañía estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvs).

A mediados de la década de los 80 la política exterior de Venezuela sufrió una importante transformación, al igual que otros ámbitos de la vida nacional. En tanto se originaba un mayor disenso sobre los medios y los fines aplicados y buscados en la diplomacia, se notaba el creciente hiperactivismo de la política exterior y el exagerado papel presidencial sobre la toma de decisiones en esta área, al tiempo que se desarrollaba una opinión pública crítica del manejo discrecional

de la diplomacia y de la rigidez con que se mantenía el carácter estatista de la industria petrolera, todo lo cual originó un ensayo de apertura del país acorde con la tesis conocida como el “Consenso de Washington”, ensayo que estimuló, como efecto no deseado, un proceso de inestabilidad interna que desembocó en una revuelta social de magnitudes importantes en 1989, dos intentos de golpe militar en 1992, y la salida del Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, antes de cumplirse su período presidencial en 1993.

Estos años de convulsión doméstica, estuvieron acompañados por los cambios globales y la profundización de procesos de integración económica, en donde, a su vez, el nuevo gobierno presidido por Rafael Caldera, en 1994, a la par que esgrimía la causa de la estabilidad de la democracia y de la reconciliación nacional, proyectó una internacionalización de la industria petrolera, lo cual plantea *grosso modo* una tercera etapa de la diplomacia venezolana, la de *la Venezuela energética*.

Esta Venezuela energética tiene como característica principal su propio impacto mundial, en cuanto a que los ojos de la comunidad internacional se focalizan en un país que se había proyectado como una experiencia estable y pacífica y que ahora llama poderosamente la atención. Así tenemos para fines de la década de los 90 la importancia del tema venezolano en la agenda mundial, tanto por las transformaciones domésticas que se asientan y la internacionalización y apertura de la industria petrolera, como por la generación de unas relaciones difíciles con gobiernos extranjeros.

Este “momento” internacional de Venezuela, conoce, a su vez, la implantación de una nueva experiencia política liderada por Hugo Chávez Frías, quien de ser el actor principal de una de las asonadas militares de 1992, se convirtió en presidente constitucional de la República por decisión de una mayoría de venezolanos que lo hacen candidato ganador en las elecciones presidenciales de 1998.

Tanto en la campaña electoral como en los primeros meses de su gobierno, Chávez prometió, y efectivamente transformó, las bases constitucionales del país, promovió un desplazamiento de élites en el Estado venezolano, comenzó a cambiar las directrices económicas de la nación y a transformar gradualmente a la diplomacia venezolana. De esta forma, el presidente Chávez y sus aliados, entre ellos un importante sector militar, aprobaron una nueva Constitución para Venezuela en 1999, desarrollan una diplomacia más activa que la de sus antecesores pero con mayor énfasis en temas y en socios tercer-

mundistas, y revirtieron la posición de Venezuela hacia Cuba, que deja de ser el enemigo de los años 60 y el socio de los años 70 y 80 para pasar a ser un país amigo y aliado.

En esta medida, la agenda bilateral entre Venezuela y EEUU comienza a tener diferencias estratégicas sobre cómo ambos gobiernos perciben las relaciones internacionales, sobre el papel mundial de EEUU con relación a las relaciones hemisféricas, y en referencia al propio orden interno venezolano.

A su vez estas circunstancias están acompañadas de la generación de una diplomacia “dual”, en la que con la mano derecha se mantienen relaciones formales, diplomáticas y comerciales con los gobiernos, y con la mano izquierda se promueven partidos y líderes que coinciden con los planteamientos venezolanos.

A partir del año 2004 y de acuerdo con los cambios observados internamente, la política exterior de Venezuela ha profundizado su sesgo antioccidental, a la vez que ha consolidado su alianza con Cuba. Por otra parte, el gobierno de Chávez se ha apartado, en medio de grandes controversias mediáticas, del gobierno del presidente George W. Bush, ha mantenido una “*entente cordiale*” con el gobierno de Colombia, y ha promovido una serie de alianzas estratégicas con gobiernos afines, como los de Argentina y Brasil.

La comunidad internacional sigue con interés el caso venezolano, manteniendo una serie de preocupaciones sobre el agotamiento de la vida democrática en Venezuela, al igual que tiene sus reservas sobre una diplomacia que se ha radicalizado y que se apresta para lograr los intereses domésticos que el presidente Chávez se ha trazado.

Cabe destacar también en Venezuela la existencia de una orientación cada día más estatista de la vida política y en el aspecto económico, llamando la atención el creciente control estatal sobre lo económico, en desmedro de la iniciativa privada. Esto dentro de la promulgación de una serie de tesis políticas interesantes y a su vez muy controversiales como lo son: la guerra asimétrica, planteada sobre la hipótesis de una eventual invasión estadounidense; la guerra de “cuarta” generación, relacionada con el impacto de los medios de comunicación y electrónicos; el desarrollo endógeno, basado en la idea del fortalecimiento de una economía interna no capitalista y la reducción de la dependencia del extranjero; y la del socialismo del siglo XXI, argumento basado en la crítica al capitalismo y en la promoción de nuevas formas de cooperación social.

Estas tesis van acompañadas de un movimiento cada día más nítido de consolidación de un régimen semidemocrático, en donde la política exterior juega un papel principal en cuanto a fortalecer la estabilidad internacional y nacional del país, logrando mayoritariamente apoyos u omisiones de los gobiernos y generando un debate mundial sobre esta experiencia. Por otra parte, si bien esta política ha heredado algunas características anteriores, como el activismo y el hiperpresidencialismo en la conducción de la diplomacia, ahora le han dado algunos tintes diferentes: la condición revolucionaria y la pretensión de combinar viejas tesis geopolíticas con la soberanía, el interés nacional y el papel central de los Estados en las relaciones internacionales, con tesis definidas como revolucionarias, como el concepto de la diplomacia de los pueblos.

Dentro de este escenario general analizado, Venezuela ha desarrollado unas relaciones bilaterales complejas con EEUU. Desde el punto de vista estratégico, los gobiernos de ambos países reiteran sus coincidencias históricas, ya que Venezuela es un importante proveedor de petróleo para EEUU y es considerado, todavía por Washington, como un socio confiable. De hecho, Venezuela no figura en ningún plano particular de la estrategia de seguridad norteamericana, salvo en la materia energética.

En este contexto, la configuración de un espacio no tradicional entre ambos países, signado anteriormente por la vinculación petrolera, se proyecta ahora como una vinculación energética que va más allá de lo meramente marítimo, del mar Caribe como puente, a una vinculación más amplia, incluyendo la relación terrestre por el establecimiento de futuros gasoductos y poliductos.

Esto no impide que en las actuales circunstancias se den algunas diferencias de carácter internacional que planteen, por primera vez desde 1958, unas diferencias estratégicas y no tácticas. En términos generales se puede argumentar que en la medida que se han dado políticas bilaterales consensuales han bajado las percepciones negativas; y cuando Washington ha querido imponer políticas regionales a Venezuela, han aumentado las percepciones negativas en el país. A Venezuela no le conviene que EEUU "latinoamericanice" las relaciones, es decir, que Caracas no pierda su condición de socio privilegiado, pero al mismo tiempo se presenta como una alternativa regional (Kelly y Romero, C., 2002).

En medio de este panorama, sobresalen las diferencias relacionadas con los temas de apertura petrolera, la OPEP, los sobrevuelos de

naves norteamericanas en territorio venezolano, las relaciones de Venezuela con gobiernos considerados por EEUU como países “parias”, la posición venezolana sobre el conflicto colombiano y el Plan Colombia, las relaciones especiales con Cuba, el tipo de votación en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la permanencia de Venezuela en el Grupo de los 21 y la crítica venezolana al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) (San Juan, 2004, p. 319).

La posibilidad de profundizar una visión multipolar de la política exterior de Venezuela por parte del gobierno del presidente Chávez, junto con el acercamiento venezolano a Cuba, Rusia y China, la promoción de un esquema de seguridad hemisférica sin la participación de EEUU, la idea de reimpulsar a la OPEP, el tratamiento particular por parte del gobierno de Venezuela del conflicto colombiano, las supuestas iniciativas del gobierno norteamericano para derrocar al presidente Chávez y las reservas venezolanas sobre la política comercial hemisférica, se convierten en ingredientes de una relación cada día más difícil de pronosticar.

No se puede dejar de mencionar que la política sectorial, no energética, que mejor funciona en el marco bilateral, es la política antinarcóticos. Basta decir que está firmado un acuerdo antinarcóticos, renovado en el año 2004, con apoyo financiero de 12.5 millones de dólares, y Venezuela se ha convertido en el país andino con más frecuencia de capturas de cargamentos de drogas, tanto de alijos como de personas “mulas” en los aeropuertos y puertos del país (Romero, C., 2005).

También, en referencia a este tema, el Departamento de Estado ha mencionado que Venezuela no es un país tan importante en el tráfico de cocaína y coca, pero sí uno de tránsito para la cocaína y la heroína. El lavado de dinero y la corrupción judicial son objeto de preocupación para Washington.

En materia de política exterior, Chávez se ha deslindado de una doctrina pro-occidental que caracterizó a los gobiernos anteriores y comenzó a definir una acción externa más multipolar, fuertemente acompañada de gestos tercermundistas. En materia económica, el nuevo gobierno mantiene una política mixta, de Estado y mercado, pero con tendencias populistas y estatistas en materia de distribución de recursos, a través de planes sociales de asistencia directa. Esto ha dado lugar a que se suscite un conjunto de malentendidos entre Venezuela y EEUU basado en: 1) *diferentes visiones del mundo*: el gobierno del presidente Chávez plantea un mundo multilateral. En EEUU se

reafirma la idea de la búsqueda de soluciones unilaterales y/o en alianza con otros países occidentales; Chávez se opone a la presunta violación del principio de no intervención y EEUU refuerza la idea de la intervención por causas humanitarias, y para desarrollar acciones colectivas que faciliten la protección, defensa y promoción de la democracia, así como también la reconstrucción democrática de países que presenten una crisis interna (Kelly y Romero, C., 2002) *diferentes visiones hemisféricas*: el gobierno del presidente venezolano se opone a la participación, no regulada, de los observadores internacionales en los procesos electorales, mientras que Washington la promueve y apoya la defensa de la democracia representativa; Chávez insiste en la prioridad de la no intervención y la soberanía; Washington plantea que las amenazas principales a la democracia son de carácter interno (corrupción, fraude electoral); Venezuela plantea que las amenazas principales son de carácter externo (capitalismo salvaje, mundo unipolar); 3) *diferentes visiones sobre las relaciones bilaterales*: para EEUU, el gobierno del presidente Chávez no ha formulado una respuesta sólida, relativa a los temas de la transparencia electoral, la seguridad jurídica para los negocios privados, y sobre el rol de la empresa privada en el desarrollo de Venezuela. Para el gobierno venezolano, en el gobierno norteamericano hay un grupo de decisores y gente con influencia que aspiran a sacar a Chávez del poder por cualquier medio (Golinger, 2005).

Por los momentos, EEUU transita de una política de “esperar y ver” a una de “reservas” sobre la actuación internacional y doméstica del gobierno de Chávez, en cuanto hasta qué punto Venezuela permanecerá dentro de los límites democráticos y capitalistas, tratando de evitar que el proceso que allí se adelanta se radicalice. De hecho, las relaciones entre Venezuela y EEUU se mantienen en un nivel estable, a pesar de la actitud autocalificada de nacionalista del gobierno del presidente venezolano y el incremento de percepciones mutuas negativas.

Venezuela posee, cada día más, ventajas comparativas en cuanto a los recursos energéticos, en términos de la seguridad global de EEUU. Para Washington, las reservas y la industria del petróleo, el gas y el carbón venezolanos tienen un carácter estratégico (Ferraro, 2000, pp. 23-24; Vilorio, 2004, pp. 97-98).

Sin embargo, esto no es una garantía para unas relaciones óptimas entre ambos países, ya que, por un lado, en Washington se tienen

serias dudas sobre el carácter democrático del gobierno de Chávez, sobre su política de profundizar la revolución en Venezuela, y sobre su deseo de exportarla al continente. Por el otro, el gobierno venezolano mantiene algunas reservas sobre la conducta del gobierno norteamericano en el hemisferio y sobre su participación en la crisis política de abril de 2002, cuando Chávez salió del poder por unas pocas horas.

En los meses transcurridos del año 2005, el Gobierno ha planteado la discusión sobre la fase socialista de la revolución venezolana, la cual, en términos generales, significaría la profundización de los esquemas estatistas y cooperativistas de la economía y la transformación del esquema de las relaciones cívico-militares a favor de la creación y el desarrollo de las reservas militares.

Temas sensibles como el Plan Colombia, el acercamiento de Caracas hacia el régimen de Fidel Castro, la actitud venezolana de colaboración limitada a la política de combate al narcotráfico, las alusiones a la necesidad de crear un polo de poder regional y una confederación de ejércitos latinoamericanos sin el concurso de EEUU, las referencias y definiciones tercermundistas y antiimperialistas, más el acercamiento político a los países miembros de la OPEP y a los países árabes, son apenas algunas de las iniciativas venezolanas que preocupan a Washington.

En este momento, Venezuela se encuentra en una fase de reevaluación sobre los alcances de su relación con EEUU, lo que nos permite afirmar que de “socios” con un fin común, ambos países están pasando a ser “amigos con reservas”.

Desde el punto de vista internacional, cabe destacar la agudización de las tensiones diplomáticas y políticas entre Venezuela y EEUU, por el caso de Luis Posada Carriles, las críticas del presidente Chávez a lo que él considera la política imperial norteamericana, las presuntas implicaciones de Washington en un plan de magnicidio en contra de su persona, y la confrontación a nivel hemisférico entre los dos gobiernos, tanto en referencia al destino del ALCA, como en relación con la elección del nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el destino de esa Organización, por el debate sobre la necesidad de una Carta Social de la OEA y la búsqueda de un mecanismo de control de las democracias, tesis sostenidas respectivamente por Caracas y Washington, así como también por la presunta injerencia de Venezuela en la crisis de los países andinos, de acuerdo con la óptica estadounidense.

Al mismo tiempo, el presidente Chávez no ha alterado las relaciones de producción, a pesar de la aplicación selectiva de la Ley de Tierras, es decir, no ha nacionalizado alguna empresa extranjera, y más bien se han fortalecido las inversiones extranjeras estadounidenses directas este semestre, con un crecimiento de 227,1% interanual, al igual que las importaciones, y se ha dado un crecimiento del PIB de un 7,6% en el primer trimestre del año.

Con estos datos y unas reservas internacionales que están llegando los 30.000 millones de dólares, se puede pronosticar que la situación general del país seguirá dentro de lo que hemos denominado "*una crisis sin solución*", en donde se profundizarán los esquemas estatistas pero a un gran costo, dado su carácter asistencial y dependiente de un ingreso en divisas petroleras.

En cuanto a la conducta de la oposición venezolana, lo que trasluce es una gran división interna y una falta de consenso sobre cómo oponerse al Gobierno y sus programas, cómo competir electoralmente y cómo denunciar las supuestas violaciones a los derechos humanos y a la democracia ante la comunidad internacional y en especial en EEUU.

Es por ello que se pueden pronosticar algunos retos que tiene el gobierno del presidente Chávez: ¿cómo mantener unos precios del barril de petróleo altos?; ¿cómo controlar el gasto social de Pdvsa en desmedro de las inversiones que requiere la expansión petrolera?; ¿cómo controlar la corrupción y la espiral inflacionaria?

La oposición, por su parte tiene ante sí los retos de lograr una candidatura única para el año 2006 y convencer a la comunidad internacional de que este es un gobierno antidemocrático y objeto de fiscalización hemisférica.

En este contexto, se abren múltiples posibilidades para la proyección de las relaciones entre Venezuela y EEUU desde la perspectiva de seguridad y defensa. Dentro de ellas, se destacan tres escenarios: 1) que se den las condiciones para reconstruir las relaciones, con base en mecanismos generadores de una confianza mutua; 2) que se profundicen las diferencias entre ambos países y se dé una ruptura definitiva; 3) que la situación se mantenga dentro de un plano inestable, pero que no genere necesariamente la ruptura entre los dos países.

En cuanto al primer escenario, las particularidades de los vínculos bilaterales de Venezuela con EEUU generan una plataforma de diálogo y de compromisos mutuos que, desde el punto de vista bila-

teral, como desde el punto de vista hemisférico, sirve de amortiguación frente a cualquier episodio negativo en las relaciones. Dentro de este panorama, el petróleo, el compromiso democrático del gobierno de Chávez, y la proyección de sus compromisos internacionales son factores clave para garantizar el desarrollo de una vinculación estable.

En cuanto al segundo escenario, la puesta en práctica de unas políticas exteriores diferentes y con visiones distintas han profundizado las divergencias entre los dos países, a la par que se han generado algunos desencuentros en torno a la situación interna de Venezuela. Pudiera pensarse entonces, a manera de conjetura, en un momento de crisis definitiva entre los dos gobiernos.

El tercer escenario, que es el que se está observando en estos meses, es el más difícil de predecir, por su complejidad y falta de precisión, en cuanto se estima que las relaciones se orientan, en una especie de zig-zag, hacia un marco de cooperación y/o hacia un marco de enfrentamiento. Lo cierto es que en la actualidad, este es el escenario más viable, el cual está ligado fuertemente a condicionamientos externos e internos, de tipo coyuntural, tal como se presentan la situación política hemisférica y el proceso político doméstico en Venezuela. Para EEUU es paradójico reconocer que esta nación suramericana se encuentra estable bajo el gobierno de Chávez y que no se ha interrumpido el suministro de petróleo.

Frente a estos escenarios, quedan algunas interrogantes por constatar, tales como la conducta del gobierno de EEUU ante el cambio político en la región, y el eventual establecimiento de un "cerco" a la proyección venezolana en el hemisferio; la conducta de Venezuela en cuanto a la concreción de sus alianzas internacionales y el propio desarrollo democrático en el país.

En este papel de trabajo se han evaluado las relaciones entre Venezuela y EEUU en los últimos años, lo que permite establecer varias condiciones en las cuales los gobiernos de cada país pueden fijar parámetros de cooperación o de conflicto.

Debido a la creciente interconexión de esas relaciones, de sus asimetrías y problemas que se acentúan en el marco de los cambios globales, resulta fundamental la promoción de un diálogo entre los dos actores que facilite un mínimo de condiciones que haga posible la negociación entre las partes y la normalización de las relaciones, superando así la posibilidad de un conflicto.

La construcción de un diálogo racional entre Caracas y Washington enfrenta, sin embargo, varios obstáculos. Observamos el desencuentro de diversas posiciones políticas, percepciones mutuas negativas, la carencia de estímulos para la confianza de ambas partes y el choque de intereses distintos en cuanto a la concreción de sus agendas exteriores. Pero al mismo tiempo, el gobierno de EEUU no percibe una amenaza real del gobierno de Chávez, en cuanto no se han roto las relaciones diplomáticas ni se ha interrumpido el suministro de petróleo y de derivados al mercado norteamericano.

Con esta perspectiva por delante, aún es posible explorar y estimular unas propuestas orientadas a superar lo que por diversas razones dejaron de ser unas relaciones con un consenso estratégico y pocas diferencias tácticas, para ser unas relaciones con disensos estratégicos y mayores diferencias tácticas.

REFERENCIAS

Libros

- Álvarez, Ángel (coord.): *El sistema político venezolano: crisis y transformaciones*, Instituto de Estudios Políticos-UCV, Caracas, 1997.
- Ardila, Martha; Cardona, Diego; Tickner, Arlene: *Prioridades y desafíos de la política exterior de Colombia*, Fescol-Colombia/Hans Seidel Sttufung, Santafé de Bogotá, 2002.
- Blasier, Cole: *The Hovering Giant: U.S. Responses to Revolutionary Change in Latin America*, Pittsburgh University Press, Pittsburgh, 1976.
- Bodemer, Klaus (ed.): *El escenario de (in)seguridad en América Latina. ¿Amenaza para la democracia?*, Recal/IIK/Flacso-Chile/Nueva Sociedad, Caracas, 2003.
- Bond, Robert (ed.): *Contemporary Venezuela and its Role in International Affairs*, New York University Press, Nueva York, 1977.
- Cámara Venezolana-Americana de Comercio e Industria (VenAmCham): *Venezuela y Estados Unidos a través de dos siglos*, VenAmCham, Caracas, 2000.
- Cardona, Diego et al.: *Encrucijadas de la seguridad en Europa y las Américas*, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario/CEPI, Santafé de Bogotá, 2004.
- Cardozo, Elsa: *Continuidad y consistencia en quince años de política exterior venezolana, 1969-1984*, CDCH-UCV, Caracas, 1992.
- Cardozo, Elsa: *Latinoamérica en transición. En busca del Aleph*, Panapo, Caracas, 1995.
- Consalvi, Simón Alberto: *El perfil y la sombra*, Tierra de Gracia Editorial, Caracas, 1997.
- Cottam, Richard: *Competitive Interference and Twentieth Century Diplomacy*, Pittsburgh University Press, Pittsburgh, 1967.
- Jesay, Anthony: *El Estado. La lógica del poder político*, Alianza Editorial, Madrid, 1993.
- Ewell, Judith: *Venezuela and the United States. From Monroe's Hemisphere to Petroleum's Empire*, The University of Georgia Press, Athens, 1996.
- Ferraro, Ricardo A.: *La Marcha de los Locos. Entre las nuevas tareas, los nuevos empleos y las nuevas empresas*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2000.
- Franco, Andrés (ed.): *Estados Unidos y los países andinos, 1993-1997. Poder y desintegración*, Centro Editorial Javeriana-CEJA, Santafé de Bogotá, 1998.
- Frum, David: *The Right Man: The Surprise Presidency of George W. Bush*, Weidenfeld, Londres, 2003.

- Fukuyama, Francis: *La construcción del Estado. Hacia un Nuevo Orden Mundial en el siglo XXI*, Ediciones B, Barcelona, España, 2004.
- Fundación Manuel García Pelayo: *Constitución y constitucionalismo hoy*, Fundación Manuel García Pelayo, Caracas, 2000.
- Golinger, Eva: *El Código Chávez. Descifrando la intervención de los Estados Unidos en Venezuela*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2005.
- Kagan, Robert: *Of Paradise and Power. America and Europe in the New World Order*, Alfred A. Knopf Londres, 2003.
- Karl, Terry Lynn: *The Paradox of Plenty. Oil Booms and Petro-States*, University of California Press, Berkeley, 1997.
- Kelly, Janet; Romero, Carlos: *The United States and Venezuela. Rethinking a Relationship*, Routledge, Nueva York, 2002.
- Lanza, Eloy: *El sub-imperialismo venezolano*, Fondo Editorial Carlos Aponte, Caracas, 1980.
- Liss, Sheldon: *Diplomacy and Dependency: Venezuela, The United States and the Americas*, N.C.: Documentary Publications, Salisbury, 1978.
- Machado de Acedo, Clemy; Padrón, Marisela: *La diplomacia de López Contreras y el Tratado de Reciprocidad Comercial con los Estados Unidos*, Ministerio de Relaciones Exteriores, Caracas, 1987.
- Martz, John; Myers, David (eds.): *Venezuela: the Democratic Experience*, Preger Publishers, Nueva York, 1977.
- McCoy, Jennifer; Serbin, Andrés; Smith, William C.; Stambouli, Andrés: *Venezuelan Democracy Under Stress*, Transaction Publishers, New Brunswick, 1994.
- Petráš, Vilma: *Venezuela y los Estados Unidos: orígenes y evolución de una relación especial*, EXD Editores, Caracas, 2000.
- Petráš, Vilma; Ramos, Eira (eds.): *Cambio, contradicción y complejidad en la política internacional del fin de siglo*, Faces-UCV/Nueva Sociedad, Caracas, 1998.
- Pockenham, Robert: *Liberal America and the Third World. Political Development Ideas in Foreign Aid and Social Science*, Princeton University Press, Princeton, 1993.
- Romero, Carlos A. (coord.): *Reforma y política exterior*, Invesp/Copre/Nueva Sociedad, Caracas, 1992a.
- Romero, Carlos A.: *Las relaciones entre Venezuela y la Unión Soviética. Diplomacia o revolución*, Universidad Central de Venezuela-CDCH, Caracas, 1992b.
- Salamanca, Luis; Viciano Pastor, Roberto (coords.): *El sistema político en la Constitución Bolivariana de Venezuela*, CEPS/Vadell Hermanos/IEP-UCV, Caracas, 2004.
- Salvatore, Dominick: *Economía internacional*, Prentice Hall, México, 6ª ed., 1998.
- Serbin, Andrés; Stambouli, A.; McCoy, J.; Smith, W. (eds.): *Venezuela: la democracia bajo presión*, Invesp North-South Center/University of Miami/Nueva Sociedad, Caracas, 1997.
- Toro Hardy, Alfredo: *El desafío venezolano. Cómo influir en las decisiones políticas estadounidenses*, Instituto de Altos Estudios de América Latina-Universidad Simón Bolívar, Caracas, 1988.
- Tugwell, Franklin: *La política del petróleo en Venezuela*, Monte Ávila Editores, Caracas, 1975.
- Viloria, Enrique: *Neopopulismo y neopatrimonialismo. Chávez y los mitos americanos*, Unimet/Celaup/Ceias, Caracas, 2004.
- Vivas G., Freddy: *Venezuela-Estados Unidos 1939-1945: La coyuntura decisiva. Las relaciones políticas y militares entre Venezuela y los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial*, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1993.
- Zakaria, Fareed: *El futuro de la libertad*, Taurus, Madrid, 2003.
- Williamson, Roger: *Some Corner of a Foreign Field. Intervention and World Order*, St. Martin's Press, Nueva York, 1998.
- Wolin, Sheldon: *Política y perspectiva*, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1974.

Artículos

- Álvarez, Ángel: "La democracia delegativa y muerte de la Constitución", en *Constitución y constitucionalismo hoy*, Fundación Manuel García Pelayo, Caracas, 2000, pp. 743-759.
- Atlas, James: "A Classicist's Legacy: New Empire Builders", en *The New York Times Weekly in Review*, Sunday, May 4, 2003, Vol. CLII, N° 52.473, pp. 1 y 3.
- Baker, Russell: "The Awful Truth", en *The New York Review of Books*, November 6, 2003, Vol. I, N° 17, pp. 6-12.
- Blanco, Carlos: "La odisea de Hugo Chávez", en *El Universal*, 7-9-05, p. 1/8.
- Calvo, José Manuel: "Bush propone crear un cuerpo especial para apuntalar democracias en el exterior", en *El País*, 20-5-05, p. 4.
- Cardona, Diego; Duarte, Ivonne; Jiménez, Nathaly: "La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en la Administración de Bush: una lectura desde América Latina", en Cardona, Diego et al.: *Encrucijadas de la seguridad en Europa y las Américas*, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario-CEPI, Santafé de Bogotá, 2004, pp. 193-243.
- Cardozo, Elsa: "Repensando políticamente el Mercosur desde Venezuela", en *Política Internacional*, Vol. X, N° 12, abril-junio, 1996, pp. 9-13.
- Cardozo, Elsa: "Cuarenta años después: la política exterior que tuvimos y la que necesitamos", en *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura*, Vol. IV, N° 1, Faces, 1998, pp. 35-47.
- Carvajal, Leonardo; Pardo, Rodrigo: "La internacionalización del conflicto doméstico y los procesos de paz. Historia reciente y principales desafíos", en Ardila, Martha; Cardona, Diego; Tickner, Arlene (ed.): *Prioridades y desafíos de la política exterior de Colombia*, Fescol-Colombia/Hans Seidel Sttufung, Santafé de Bogotá, 2002, pp. 181-236.
- Consalvi, Simón Alberto: "La relación Venezuela-Estados Unidos durante la primera mitad del siglo xx", en *Venezuela y Estados Unidos a través de dos siglos*, VenAmCham, Caracas, 2000, pp. 137-319.
- Del Arenal, Celestino: "EE.UU. y la política latinoamericana de España", en *Política Exterior*, Vol. XVII, mayo-junio, 2003, pp. 183-193.
- Dieterich, Hans: "Habla el comandante del ejército venezolano, general Raúl Baduel", en <www.rebelion.org>, 7 de marzo de 2004.
- Domínguez, Jorge: "Bush Administration Policy. A View toward Latin America", en *ReVista. Harvard Review of Latin America*, Spring-Summer, 2005, Cambridge, EEUU, pp. 3-5.
- Drew, Elizabeth: "The Neocoms in Power", en *The New York Review of Books*, Vol. I, N° 10, 2003, pp. 20-22.
- Einzenstat, Stuart; Porter, John E.; Weinstein, Jeremy: "La reconstrucción de Estados débiles", en *Foreign Affairs en Español*, ITAM, México, Vol. 5, N° 2, 2005, pp. 133-148.
- Ellner, Steve: "Recent Venezuelan Political Studies: A Return to Third World Realities", en *Latin American Research Review*, Vol. 32, N° 2, 1997, pp. 201-218.
- Franco, Andrés: "La cooperación fragmentada como una nueva forma de diplomacia. Las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos en los noventa", en Franco, Andrés (ed.): *Estados Unidos y los países andinos, 1993-1997. Poder y desintegración*, Centro Editorial Javeriana-Ceja, Santafé de Bogotá, 1998, pp. 37-80.
- Gamarra, Eduardo: "Las relaciones entre Estados Unidos y Bolivia durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada", en Franco, Andrés (ed.): *Estados Unidos y los países andinos, 1993-1997. Poder y desintegración*, Centro Editorial Javeriana-CEJA, Santafé de Bogotá, 1998, pp. 100-133.
- Gómez Calcaño, Luis; Patruyo, Thanalf: "Entre la esperanza popular y la crisis económica. Transición política en Venezuela", en *Cuadernos del Cendes*, Dossier: Globalización, reestructuración y transformación territorial, Año 17, 2ª época, N° 1, Caracas, enero-abril, 2000, pp. 199-246.

- Guerón, Carlos: "La Doctrina Betancourt y el papel de la teoría en política exterior", en *Politeia 1*, Instituto de Estudios Políticos-UCV, Caracas, 1972, pp. 231-243.
- Jimeno Malavé, Odahilda Eunice: "Relaciones diplomáticas entre Venezuela y los Estados Unidos de América (1834-1999)", en *Boletín del Archivo de la Casa Amarilla*, Año VI, N° 6, 1999, pp. 337-485.
- Jones, Bart; Tayler, Letta: "Funds to Opposition Raise Questions", en *The Daily Journal*, edición de fin de semana del 7 al 13 de mayo de 2005, p. 4.
- Kamat, Sangeeta: "NGO's and the New Democracy", en *Harvard International Review*, Spring 2003, Vol. XXV, N° 1, pp. 65-69.
- Marglin, Stephen A.: "Development as Poison. Rethinking the Western Model of Modernity", en *Harvard International Review*, Spring 2003, Vol. XXV, N° 1, pp. 70-75.
- Martz, John: "Venezuela's Foreign Policy Toward Latin America", en Robert Bond: *Contemporary Venezuela and Its Role in International Affairs*, New York University Press, Nueva York, 1977.
- McCoy, Jennifer: "¿Venezuela: crisis de confianza?", en Serbin, Andrés *et al.*: *Venezuela: la democracia bajo presión*, Invesp North-South Center/University of Miami/Nueva Sociedad, Caracas, 1997, pp. 9-26.
- Mondolfi Gudat, Edgardo: "La relación Venezuela-Estados Unidos durante el último medio siglo", en *Venezuela y Estados Unidos a través de dos siglos*, VenAmCham, Caracas, 2000, pp. 321-475.
- Myers, David J.: "Perceptions of a Stressed Democracy: Inevitable Decay or Foundation for Rebirth?", en McCoy, Jennifer; Serbin, Andrés; Smith, William C.; Stambouli, Andrés: *Venezuelan Democracy Under Stress*, 1994, pp. 107-138.
- Olivares, Francisco: "Fábula asimétrica", en *El Universal*, 30-4-05, p. 2.
- Petráš, Vilma: "Relevancia de los estudios de áreas, regiones o países en el Postgrado de Relaciones Internacionales", en *Cuadernos del Postgrado 8*, Fondo Editorial Trópicos/UCV/Faces/CEP, 1995, pp. 123-170.
- Polanco Alcántara, Tomás: "La relación Venezuela-Estados Unidos durante el período 1806-1900", en *Venezuela y Estados Unidos a través de dos siglos*, VenAmCham, Caracas, 2000, pp. 23-135.
- Przeworski, Adam: "A Flawed Blueprint. The Covert Politicization of Development Economics", en *Harvard International Review*, Spring 2003, Vol. XXV, N° 1, 2003, pp. 42-45.
- Rapoport, Anatol: "Introduction" to the Carl Von Clausewitz book, *On War*, Penguin Books, Londres, 1982, pp. 11-80.
- Rice, Condoleezza: "Campaign 2000: Promoting the National Interest", en *Foreign Affairs*, N° 1, January-February, 2000, pp. 45-62.
- Rojas, Laura: "Aspectos económicos de la política exterior de Venezuela", en Romero, Carlos A. (coord.): *Reforma y política exterior*, Nueva Sociedad/Invesp, Caracas, 1992, pp. 145-172.
- Romero, Aníbal: "La situación estratégica de Venezuela", en *Política Internacional*, Vol. 1, N° 1, 1986, pp. 6-14.
- Romero, Aníbal: "Aspectos estratégicos en las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos", en *Política Internacional*, N° 10, abril-junio, 1988, pp. 8-16.
- Romero, Carlos: "Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos: ¿realidad histórica u opción política?", en *Política Internacional*, Vol. I, N° 2, abril-junio, 1986, pp. 11-14.
- Romero, Carlos: "La influencia de Tocqueville en la visión norteamericana del sistema político venezolano", en *Politeia*, N° 12, IEP-UCV, 1988, pp. 43-46.
- Romero, Carlos: "América Latina: el reto del siglo XXI", en *Síntesis*, Aietí, Madrid, N° 25, enero-junio, 1996, pp. 121-133.
- Romero, Carlos: "Las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos durante la Era Clinton: coincidencias estratégicas y diferencias tácticas", en Franco, Andrés (ed.):

- Estados Unidos y los países andinos, 1993-1997. Poder y desintegración*, Centro Editorial Javeriana-CEJA, Santafé de Bogotá, 1997, pp. 213-248.
- Romero, Carlos; Cardozo, Elsa; Romero, María T.: "La política exterior y las Constituciones de 1961 y 1999: Una visión comparada de sus principios, procedimientos y temas", en Salamanca; Luis; Viciano Pastor, Roberto (coords.): *El sistema político en la Constitución Bolivariana de Venezuela*, CEPES/Vadell Hermanos/IEP-UCV, Caracas, 2004, pp. 573-597.
- Romero, María Teresa: "Estados Unidos y su política de promoción de la democracia: el caso venezolano", en *Revista Venezolana de Ciencia Política*, N° 17, enero-junio, 2000, pp. 127-156.
- San Juan, Ana María: "La agenda de seguridad de Venezuela. ¿Ruptura o continuidad del paradigma? Un análisis preliminar", en Cepik, Marco; Ramírez, Socorro (eds.): *Agenda de seguridad andino-brasileña. Primeras aproximaciones*, Ufrgs/Iepri/Universidad Nacional de Colombia/Friedrich Ebert Stiftung/Fescol, Santafé de Bogotá, 2004, pp. 317-362.
- San Juan, Ana María: "La nueva agenda de seguridad en Venezuela. Algunos elementos para su discusión", en *Revista SIC*, mayo-junio, 2005, N°s 674-675, pp. 151-154 y 202-205.
- Scott Palmer, David: "Las relaciones entre Estados Unidos y Perú durante los gobiernos del presidente Clinton", en Franco, Andrés (ed.): *Estados Unidos y los países andinos, 1993-1997. Poder y desintegración*, Centro Editorial Javeriana-CEJA, Santafé de Bogotá, 1998, pp. 113-139.
- Schmitter, Philippe: "Las sendas del desarrollo político de América Latina", en *Estudios Andinos*, Vol. III, N° 8, 1973, pp. 49-70.
- Toro Hardy, Alfredo: "La relación económica EE.UU.-Venezuela", en *El Universal*, 30-3-2000, p. 1.2.
- Urbinati, Nadia: "A Criticism of Intellectual Critics", en *Logos*, Vol. 1, N° 4, Fall, 2002, pp. 69-78.
- Viña, Carmen Milagros: "Trabajo y desarrollos comunicacionales a finales del siglo xx", en *Politeia*, N° 25, IEP-UCV, 2000, pp. 77-100.
- Youngers, Colletta: "The U.S. and Latin America After 9-11 and Iraq", en *FPIF Policy Report*, June 2003, v. <www.fpif.org/papers/latam2003.html>.

Documentos oficiales, monografías, borradores

- Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela: *Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación*, Asamblea Nacional, Caracas, 2002.
- Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela: *Proyecto de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional*, Asamblea Nacional, Caracas, 2002.
- Bravo, Mauricio: *El narcotráfico en Venezuela, s/e*, Caracas, 1996, monografía.
- Bravo, Mauricio: *Después de la visita*, Caracas, 1999, mimeo.
- Comisión de Análisis y Recomendaciones sobre las Relaciones entre Colombia y los Estados Unidos: "Colombia: una nueva sociedad", en *Análisis Político*, Santafé de Bogotá, julio, 1997.
- Chávez, Hugo: *Nuevo mapa estratégico de la Revolución. Una nueva etapa*, Exposición del Jefe del Estado el 12 de noviembre de 2004, Imprenta Nacional, Caracas, enero de 2005.
- Embajada de Venezuela en los Estados Unidos de América: *Comunicado, 30-4-2004*, Embajada de Venezuela en los Estados Unidos de América, Washington.
- Lander, Luis E.: *Apertura petrolera en Venezuela*, Caracas, 1997, monografía.
- Ministerio de la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela: *El comportamiento militar latinoamericano y la seguridad hemisférica*, Ministerio de la Defensa, Caracas, 2000.

- Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela: *Libro Amarillo*, MRE, Caracas, años 1959 y ss.; años 1981, 1993, 1994, 1995, 1996; 1996-2004.
- Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela: *Boletín del Archivo de la Casa Amarilla*, MRE, Caracas, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2005.
- Perina, Rubén: "El régimen democrático latinoamericano: el papel de la OEA", Washington, 2000, mimeo.
- Romero, Carlos: EE.UU.-Venezuela. Después de la visita, Caracas, 1998, borrador de artículo.
- Romero, Carlos: EE.UU.-Venezuela: visiones diferentes, Caracas, 2000, borrador.
- Romero, Carlos: La política exterior del presidente Chávez: entre lo doméstico y lo global, 2005, borrador.
- Romero, María Teresa: "Transición sistémica y promoción de la democracia en la política exterior venezolana de los noventa", Caracas, 2000, mimeo.
- The Presidency of The United States: "The National Security Strategy of the United States of America", The White House, Washington, 2002.
- U.S. Department of State: Bureau of Western Hemisphere Affairs. *Background Note: Venezuela, February 2005*, The State Department, Washington, February 2005.
- The White House: Office of the Press Secretary. *Press Briefing by Ari Fisher*, The White House, Washington, April 16, 2002.

Páginas web consultadas

- <http://embajadausa.org.ve>
www.rebellion.org
[Venezuela Analítica.com](http://VenezuelaAnalitica.com)
[Venezuela analysis.com](http://Venezuelaanalysis.com)
www.fpip.org/papers/latam2003.html

Periódicos consultados

- Economía Hoy*, Caracas, Venezuela.
El Diario de Caracas, Caracas, Venezuela.
El Globo, Caracas, Venezuela.
El Nacional, Caracas, Venezuela.
El País, Madrid, España.
El Universal, Caracas, Venezuela.
The Daily Journal, Caracas, Venezuela.
The New York Times, Nueva York, EEUU.
Últimas Noticias, Caracas, Venezuela.

APÉNDICES

Cuadro 1
Cesta venezolana. Dólares por barril (1958-2004)

Año	\$ por barril	Año	\$ por barril	Año	\$ por barril
1958	2,55	1979	13,94	2000	26,14
1959	2,33	1980	16,74	2001	20,21
1960	2,30	1981	28,87	2002	21,95
1961	2,30	1982	32,88	2003	25,62
1962	2,30	1983	28,88	2004	33,61
1963	2,30	1984	27,88		
1964	2,30	1985	25,89		
1965	2,30	1986	12,82		
1966	2,30	1987	16,32		
1967	2,30	1988	13,51		
1968	2,30	1989	16,87		
1969	2,30	1990	20,33		
1970	2,30	1991	15,92		
1971	2,30	1992	14,91		
1972	2,66	1993	13,34		
1973	2,88	1994	13,23		
1974	3,90	1995	14,84		
1975	13,95	1996	18,40		
1976	13,75	1997	16,30		
1977	14,10	1998	10,80		
1978	13,83	1999	16,00		

Fuentes: Pdvsa; Gobierno de Venezuela. Promedio Anual.

Cuadro 2

Exportaciones comparadas de Venezuela
(miles de millones de dólares)

Año	Mundo	EEUU	Unión Europea	América Latina	CAN	Otros
1990	17.278	11.230,7	2.303,26	1.209,32	488,942	2.045,78
1991	14.968	9.130,48	6.500,30	1.159,91	461,960	715,35
1992	13.955	8.652,1	1.465,48	1.284,13	665,747	1.887,55
1993	14.019	9.084,31	1.315,13	1.818,20	1.045,66	1.755,7
1994	15.695	8.161,4	1.757,84	2.304,07	1.726,45	3.421,51
1995	18.630	9.426,78	1.620,81	633,42	1.918,89	5.030,1
1996	23.461	12.471	1.761	4.804	1.750	2.675
1997	25.566	13.081	1.775	5.678	2.111	2.921
1998	17.564	9.181	1.926	-	1.953	4.504
1999	20.915	11.334	838	-	-	-
2000	34.038	18.650	2.350	4.506,8	3.902,74	-
2001	25.722	12.801,5	2.963	5.501,9	-	3.405
2002	20.515	10.853	3.076	-	2.191	2.915
2003	22.475	9.175	2.560	3.809	-	4.720
2004*	36.630	11.655	4.580,45	6.052,5	-	7.975

* Acumulado al cierre del tercer trimestre.

Fuentes: MIC; BCV; Gobierno de Venezuela.

Cuadro 3

Exportaciones de Venezuela (% del total)

Año	Mundo	EEUU	Unión Europea	América Latina	CAN	Otros
1990	100	65	13,33	6,99	2,82	11,84
1991	100	61	23,38	7,74	3,08	4,79
1992	100	62	10,50	9,20	4,77	13,52
1993	100	64,8	9,38	5,83	7,45	12,52
1994	100	52	11,2	4	11	21,8
1995	100	50,6	8,7	3,4	10,3	27
1996	100	52	7,5	20,47	7,6	12,43
1997	100	53,1	6,9	22,20	8,5	23,1
1998	100	49,2	10,9	-	11,1	28,8
1999	100	54,1	4,0	-	-	42,1
2000	100	55,3	6,7	22,6	9,5	-
2000	100	55,3	6,7	22,6	9,5	-
2001	100	49,7	11,49	21,3	-	13,2
2002	100	52,9	14,9	-	10,67	14,2
2003	100	40,50	8,90	12,40	-	21,00
2004	100	45,20	10,05	16,80	-	21,80

Fuentes: MIC; BCV; Gobierno de Venezuela.

Cuadro 4

Importaciones comparadas de Venezuela
(miles de millones de dólares)

Año	Mundo	EEUU	Unión Europea	América Latina	CAN	Otros
1990	6.601	3.001,07	1.722,82	731,87	213,22	932,02
1991	10.037	4.715,94	2221,25	1.271,92	389,22	1.438,67
1992	12.672	5.859,52	1.231,34	1.666,70	605,86	3.308,52
1993	11.271	5.341,72	1.106,25	1.464,94	561,17	2.796,92
1994	8.277,52	4.072,88	1.903,71	720,09	521,45	1.059,45
1995	11.396	5.128,2	2.188,09	763,53	1.082,62	2.233,61
1996	10.909	4.744	2.203	2.457	934	571
1997	14.685	7.730	2.653	1.044	1.053	2.199
1998	14.816	6.545	2.661	2.320	1.094	2.196
1999	11.751	5.353	1.736	-	-	-
2000	16.073	5.550	1.573,19	2.079,31	-	2.709,51
2001	18.534	5.976	2.803	3.015	-	3.210
2002	20.800	6.007	2.511	3.824	-	4.115
2003	22.584	6.840	2.412	3.505	-	4.806
2004	24.014	7.905	3.595,50	4.980,45	-	4.428

Fuentes: MIC; BCV; Gobierno de Venezuela.

Cuadro 5

Importaciones comparadas de Venezuela
(% del total)

Año	Mundo	EEUU	Unión Europea	América Latina	CAN	Otros
1990	100	50	26,9	11,08	3,23	9,6
1991	100	46,9	22,13	12,67	3,88	14,3
1992	100	46,2	9,371	13,15	4,78	26,10
1993	100	47,39	9,81	12,99	4,97	24,84
1994	100	49,2	23	8,7	6,3	12,8
1995	100	45	19,2	6,7	9,5	19,6
1996	100	43,4	20,1	9	9,2	27,3
1997	100	52,6	18,06	7,1	7,2	14,5
1998	100	44,17	17,96	15,65	7,38	14,82
1999	100	45,55	14,77	-	8,1	31,7
2000	100	35,66	14,95	19,8	-	25,8
2001	100	32,54	15,01	16,26	-	17,31
2002	100	30,07	10,27	18,38	-	20,81
2003	100	32,80	9,50	19,30	-	31,40
2004	100	33,40	10,45	20,70	-	29,10

Cuadro 6

Balanza comercial Venezuela-EEUU
(miles de millones de dólares)

Año	Exportaciones	Importaciones	Balanza
1990	11.230,7	3.001,07	8.229
1991	9.130,48	4.715,94	4.414
1992	8.652,1	5.859,52	2.792
1993	9.084,31	5.341,72	3.742
1994	8.161,4	4.072,88	4.088
1995	9.426,78	5.128,2	4.298
1996	12.471	4.744	7.727
1997	13.081	7.730	5.351
1998	9.181	6.545	2.636
1999	11.334	5.353	5.981
2000	18.650	5.500	13.150
2001	12.801,5	5.976	6.825,5
2002	10.853	6.007	4.846
2003	9.175	6.840	2.335
2004*	11.655	7.905	3.750

* Acumulado al cierre del tercer trimestre.

Fuentes: MIC; BCV; Gobierno de Venezuela.

Cuadro 7

Balanza comercial Venezuela-EEUU
(% del total)

Año	Exportaciones	Importaciones	%
1990	65	50	15
1991	61	46.9	14,1
1992	62	46.2	15,8
1993	64.8	47.39	17,41
1994	52	49.2	2,8
1995	50.6	45	5,6
1996	52	43.4	8,6
1997	53.1	52.6	0,5
1998	49.2	44.1	5,1
1999	54.1	45.5	8,6
2000	55.3	35.6	19,7
2001	49.7	32.54	17,16
2002	52.9	30.07	22,83
2003	40.50	32.80	7,7
2004*	45.20	33.40	11,8

* Acumulado al cierre del tercer trimestre.

Fuentes: MIC; BCV; Gobierno de Venezuela.

Cuadro 8

Exportaciones venezolanas a EEUU, por producto (2003)

Producto	Miles de millones de dólares
Petróleo crudo	12.660
Derivados del petróleo	1.509
Gasolina	960
Bauxita y aluminio	308
Productos primos orgánicos	292
Hierro y acero	261
Partes de automóviles	163
Carbón y derivados	156
Gas licuado asociado	108
Otros	719
Total	17.136

Fuentes: FTD Webmaster, Foreign Trade Division; U.S. Census Bureau, Washington, EEUU.

Cuadro 9

Importaciones venezolanas desde EEUU, por producto (2003)

Producto	Miles de millones de dólares
Equipos para la industria petrolera	232
Derivados del petróleo	183
Trigo	118
Maquinaria industrial	110
Equipos de computación	108
Repuestos de automóviles	106
Productos químicos orgánicos	105
Equipos de telecomunicaciones	98
Generadores	96
Productos químicos	77
Otros	1.597
Total	2.830

Fuentes: FTD Webmaster, Foreign Trade Division; U.S. Census Bureau, Washington, EEUU.

Cuadro 10

**Importaciones estadounidenses de petróleo (2003)
(en millones de barriles diarios)**

Aporte de Canadá	2,1
Aporte de Arabia Saudita	1,8
Aporte de México	1,6
Aporte de Venezuela	1,4
Otros aportes (Nigeria, Emiratos Árabes, Mar del Norte)	5,3
Total de crudo y productos refinados importados	12,2

Fuente: U.S. Government web page: <eia.doe.gov>.

Cuadro 11

Importaciones de EEUU de gas (2003)
(en trillones de metros cúbicos, tcf)

Gasoducto	m³
Canadá	3.489,9
México	0
LNG	506,5
Algeria	53,4
Australia	0
Brunei	0
Indonesia	0
Malasia	2,7
Nigeria	50,6
Omán	8,6
Qatar	13,6
Trinidad y Tobago	37,8
Unión de Emiratos Árabes	0
Otros	7,4
Total	3.9996,4

Fuente: U.S. Government web page: <eia.doe.gov>.

Cuadro 12

Inversiones de EEUU en Venezuela en los últimos siete años
(en millones de dólares)

Año	Monto en dólares
1998	122.151
1999	58.292
2000	85.920
2001	93.158
2002	54.300
2003	995.890
2004	46.671

Fuente: Conapri (2004).